

Junio 6 y 7 de 1964

7ª REUNION — 2ª SESION ESPECIAL

Presidencia del doctor CARLOS H. PERETTE, vicepresidente de la Nación

Secretarios: señores CLAUDIO A. MAFFEI y CESAR ALBERTO RODRIGUEZ

Prosecretario: señor DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ABDALA, Felipe
ACUÑA, Ernesto N.
ACUÑA, Ramón Edgardo
AGUIRRE LANARI, Juan
ASTUDILLO, Félix E.
BARBICH, Adolfo A.
BASSI, Ricardo Alberto
BAUDUCCO, José Raúl
BERNARDO, Miguel Angel
BLANCO, Rubén V. M.
CANTONI, Aldo H. N.
CASTIGLIONE, José F. L.
CORRADI, Luis Mauricio
DE REGE, Roberto
FASSI, Santiago Carlos
FLORES, Domingo
FREYTES, Angel R.
GADANO, José Enrique
GAMOND, Eduardo José Agustín
GHIGLIONE, Alfredo Miguel
GONZÁLEZ FUNES, Tomás
LÓPEZ, Jorge O.
LOVAGLIO, Dante A.
LUBARY, Ginés Angel
MANCINI, Galileo
MARTÍNEZ, José Alberto
MARTÍNEZ GARBINO, Lucio
MARTÍNEZ SARAVIDA, Miguel A.
MORILLO, Carlos Argentino
OLMEDO, Rolando
RAMÍREZ, Lauro F.
RISPOLI ROMAN, Enrique G.

RODRÍGUEZ, Eugenio L.
SAPAG, Elías
VARELA DIAZ, Diógenes
ZINNY, Mario

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

ABDALA, Demetrio César
AGUIAR VÁZQUEZ, Américo Ángel
FERNÁNDEZ (h.), Mariano
GELSI, Celestino
SALMÉN, Miguel

AUSENTE, CON LICENCIA:

SNOPEK, Guillermo

AUSENTES, CON AVISO:

CAPRARO, Francisco
OVANDO, Ricardo
TARDELLI, Antonio
VITTI, Alfonso Andrés

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Página 128.)
- 2.—Decreto de citación a sesión especial. (Página 128.)
- 3.—Asuntos entrados:
 - I.—Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 128.)
 - II.—Dictamen de comisiones. (Página 130.)
- 4.—Se concede licencia para faltar a sesiones al señor senador Snopek. (Página 130.)

5.—**Moción del señor senador Fassi** para que se considere sobre tablas el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, sobre salario mínimo, vital y móvil. Se aprueba. (Página 130)

6.—**Consideración del dictamen de comisiones** a que se refiere el punto anterior de este sumario. Se aprueba. (Página 130.)

7.—**Apéndice:**

I.—**Inserciones solicitadas** por los señores senadores. (Página 188.)

II.—**Sanción del Honorable Senado.** (Página 188.)

—En Buenos Aires, a los seis días del mes de junio de 1964, a la hora 21 y 40:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Blanco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Blanco.

Sr. Blanco. — Voy a formular indicación para que se siga llamando media hora más.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Se seguirá llamando por media hora más.

—A la hora 21 y 55, dice el

Sr. Presidente. — Habiendo número en el recinto, se declara abierta la sesión.

2

CITACION A SESION ESPECIAL

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura al decreto de citación a sesión especial.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Buenos Aires, 5 de junio de 1964.

Atento la autorización conferida oportunamente a esta Presidencia por el honorable cuerpo,

El presidente del Honorable Senado de la Nación

DECRETA:

Artículo 1º — Por Secretaría cítese a los señores senadores para realizar sesión especial mañana, sábado 6, a la hora 21, a fin de considerar el dictamen de comisión en el proyecto de ley en revisión sobre salario mínimo, vital y móvil.

Art. 2º — Comuníquese.

CARLOS H. PERETTE.
Claudio A. Maffei.

—Al Archivo.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura a los asuntos entrados.

1

Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados

Salario vital, mínimo y móvil

Buenos Aires, 5 de junio de 1964.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que la Honorable Cámara que presido, en sesión de la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Toda persona mayor de 18 años, que trabaje por cuenta ajena bajo dependencia de un empleador, percibirá una remuneración no inferior al salario vital mínimo que se establezca de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

Art. 2º — Salario vital mínimo es la remuneración que posibilite asegurar, en cada zona, al trabajador y a su familia, alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión.

Art. 3º — El salario comprende a toda remuneración de servicios en dinero, especie, alimentos, uso de habitación, comisiones, habilitaciones y viáticos, excepto, en cuanto a este rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes. El salario vital mínimo estará integrado además por las asignaciones familiares.

Art. 4º — Las disposiciones sobre salario vital mínimo revisten el carácter de orden público. Por ninguna causa podrán abonarse sueldos o salarios inferiores a los que se fijen de conformidad con la presente ley, ni podrán los mismos ser disminuidos por contratos individuales o convenciones colectivas, siendo nula toda disposición o cláusula salarial en contrario.

Art. 5º — Créase el Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil, con la función esencial de determinar periódicamente el salario vital mínimo.

Art. 6º — El consejo estará integrado por cuatro representantes estatales, dos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y dos por el Ministerio de Economía, cuatro de los trabajadores y cuatro de los empleadores, todos con sus respectivos suplentes, que reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, ausencia, licencia, enfermedad o fallecimiento. Funcionará como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El presidente del consejo debe ser designado por éste, entre los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 7º — Los miembros del consejo serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía,

de la central de trabajadores con personería gremial y de la o las entidades empresarias más representativas. Durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelectos. Deberán reunir los requisitos exigidos para ser electo diputado nacional y poseer reconocida versación en materia laboral o económica. Si alguna de las entidades que deben designar representantes se negare a formular la propuesta, las designaciones se harán de oficio.

Art. 8º — El consejo tendrá las siguientes facultades:

- a) Nombrar comisiones de estudio con la participación de los sectores interesados;
- b) Requerir asesoramiento e información de las reparticiones y organismos nacionales, provinciales, municipales o privados;
- c) Realizar encuestas y estudios relativos a la situación económica y condiciones de vida de los trabajadores en las distintas zonas del país y publicar anualmente un informe económico-social con referencia a la evolución de los salarios, precios, costos y ganancias;
- d) Contratar, previo concurso, personal administrativo y técnico;
- e) Formular su presupuesto de gastos. Estos serán atendidos con hasta el 20 % de los recursos que ingresen por aplicación del artículo 15. El excedente será transferido a la orden del Consejo Nacional de Enseñanza Técnica;
- f) Realizar toda otra actividad tendiente al cumplimiento de esta ley.

Art. 9º — El consejo determinará anualmente, para cada zona, el salario vital mínimo para la familia tipo del trabajador, considerándose tal la integrada por los cónyuges y dos hijos a su cargo; teniendo en cuenta las exigencias establecidas en el artículo 2º; las variaciones de los índices de costo de vida elaborados por la Dirección Nacional de Estadística y Censos y por otros organismos oficiales; los índices zonales, que deberá determinar el consejo realizando los estudios e investigaciones necesarios; la capacidad económica de las distintas zonas del país y las circunstancias que no determinen un aumento de los índices de desocupación.

Establecerá así mismo, por resolución fundada, los porcentajes de aumento o reducción correspondientes a las distintas zonas de aplicación, a los aprendices y menores, a los trabajadores cuya capacidad laboral se encuentre manifiestamente disminuida y a aquellos que cumplan un horario de trabajo no impuesto por la calificación, naturaleza o características especiales del mismo, inferior a la jornada legal, y determinará las remuneraciones que, por su efectivo carácter de premios, primas y bonificaciones por incentivación, productividad u otro concepto, no deben considerarse para el cómputo del salario vital mínimo.

El salario vital mínimo se expresará en montos mensuales, diarios y horarios.

Art. 10. — A petición de cualquiera de los sectores representados en el consejo, se podrá modificar el monto del salario vital mínimo antes del vencimiento del período de su vigencia, siempre que los índices de costo de vida tenidos en cuenta para su determinación muestren una variación del 15 %, sin perjuicio de considerarse las demás circunstancias previstas en el artículo anterior. No se podrán practicar tales modificaciones sino en períodos mayores de 180 días.

Art. 11. — El 30 % del monto del salario vital mínimo para la familia tipo estará integrado por las

asignaciones familiares. El monto de la asignación familiar por cada persona que genere el derecho a percibirla, será el equivalente al 10 % del que se fije como salario vital mínimo de acuerdo con el artículo 9º. Las asignaciones familiares no estarán sujetas al pago de aportes jubilatorios ni del impuesto a los réditos.

Art. 12. — Las asignaciones familiares se abonarán a los trabajadores que presten servicios en la actividad privada, conforme al régimen establecido por los decretos leyes 7.913/57, 7.914/57, sus modificatorios y la ley 15.223. Quedan incorporadas al sistema de los textos legales citados, todas las actividades que tengan establecidos regímenes de salario familiar, sin compensación propia.

La Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio de la República Argentina tendrá a su cargo la aplicación del régimen respecto de todas las actividades civiles, comerciales y rurales.

Las asignaciones familiares que corresponda percibir a los agentes de la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado se abonarán directamente, efectuándose las provisiones necesarias en los respectivos presupuestos.

Art. 13. — El salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia será el equivalente al 70 % del que se fije de acuerdo con el artículo 9º.

Art. 14. — El salario vital mínimo fijado por el consejo nunca tendrá efecto retroactivo. Tendrá vigencia y será de aplicación obligatoria al mes siguiente de la publicación por tres días en el Boletín Oficial, la que deberá efectuarse dentro de los diez días de dictada la resolución y dispuesta directamente por el consejo.

Art. 15. — Los gastos del consejo serán atendidos con dos unidades del aporte previsto por el artículo 48 del decreto ley 33.302/45 —ley 12.921—, en la proporción establecida en el inciso e) del artículo 8º.

Art. 16. — Quedan excluidas del régimen de la presente ley:

- a) Las remuneraciones del servicio doméstico;
- b) Las de los agentes de las administraciones provinciales y las de sus municipalidades, organismos descentralizados y autárquicos provinciales y municipales.

El Poder Ejecutivo nacional gestionará ante los gobiernos provinciales la sanción de normas concordantes con las de la presente ley, en beneficio del personal mencionado.

Art. 17. — Las infracciones a la presente ley, consistentes en el pago de salarios inferiores al vital mínimo, serán sancionadas con multas de hasta diez veces el valor de la diferencia entre el salario vital mínimo y el efectivamente pagado.

Serán autoridades de aplicación de la presente ley los organismos nacionales o provinciales que tengan competencia en materia de policía del trabajo en sus respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponderle al trabajador.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social controlará, en todo el territorio de la República el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 48 del decreto ley 33.302/45 —ley 12.921— pudiendo aplicar a los infractores multas de hasta diez veces el valor de los aportes que hubieran omitido depositar.

Art. 18. — La presente ley no afectará los mejores derechos que tuvieren los trabajadores por aplicación de otras normas legales o convencionales.

A los fines de la presente ley entiéndese por jornada de trabajo la que habitualmente desempeñe el trabajador o fije la convención colectiva.

Art. 19. — Deróganse los artículos 1º a 44 y 50 a 65 del decreto ley 33.302/45 —ley 12.921— y toda otra disposición que se oponga a esta ley.

Art. 20. — El Poder Ejecutivo procederá a constituir el Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil dentro de los treinta días de la promulgación de la presente ley. Dentro de los treinta días subsiguientes el consejo elevará al Poder Ejecutivo su propuesta de reglamentación de la ley, en la que se determinarán los procedimientos aplicables para ajustar el salario vital mínimo a modalidades especiales de remuneración.

Art. 21. — Hasta tanto el consejo se constituya y determine para el primer período anual el monto del salario vital mínimo a que se refiere el artículo 9º, el mismo será fijado por el Poder Ejecutivo dentro de los 15 días de la promulgación de esta ley.

Este salario no podrá ser inferior a catorce mil pesos (\$ 14.000) mensuales, con las modalidades establecidas por los artículos 9º y 11.

Art. 22. — El consejo o, en su defecto, el Poder Ejecutivo establecerá, dentro de los treinta días de la promulgación de esta ley, en forma provisional, las zonas en que se dividirá el país a los efectos de su aplicación y las variaciones porcentuales para los supuestos mencionados en el segundo párrafo del artículo 9º, y dará cumplimiento a lo establecido en el último párrafo.

Art. 23. — El salario mínimo vital que se fije en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, regirá para los trabajadores de la actividad privada a partir del segundo mes subsiguiente a la promulgación de esta ley. Para los agentes de la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado, a partir del 1º de noviembre próximo, debiendo efectuarse las previsiones presupuestarias necesarias.

Art. 24. — Hasta tanto se lo incluya en el presupuesto general de gastos y recursos de la Nación, queda autorizado el Poder Ejecutivo para aprobar el presupuesto del Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil.

Art. 25. — Sin perjuicio de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la ley 16.454, por el término de seis meses a partir de la vigencia de esta ley, los precios de los productos y artículos de primera necesidad que no hubieren sido establecidos por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la mencionada ley, y los de los materiales de construcción no podrán ser superiores a los vigentes al 1º de marzo de 1964, o al menor precio que hubieren tenido entre dicha fecha y la promulgación de la presente ley, en todas las etapas de la comercialización.

La Secretaría de Estado de Comercio podrá autorizar modificaciones en los casos de productos estacionales o en aquellos casos concretos en que las circunstancias de hecho así lo aconsejen.

Las infracciones a este artículo serán penadas conforme a las prescripciones de la ley 16.454.

Art. 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

ARTURO MOR ROIG.
Guillermo González.

—A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

II

Dictamen de comisiones

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Se han expedido en el proyecto de ley en revisión sobre salario mínimo, vital y móvil. (Al orden del día.)

4

LICENCIA

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar lectura a la solicitud de licencia del señor senador Snopek.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*): Jujuy, 4 de junio de 1964. Excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, doctor Carlos H. Perette. Solicito diez días de licencia a partir de hoy por imposibilidad de viajar. Salúdalo con distinguida consideración. Senador Snopek.

Sr. Presidente. — En consideración el pedido de licencia.

Sr. Blanco. — Hago moción para que se conceda la licencia con goce de dieta.

Sr. Presidente. — En consideración la moción del señor senador Blanco para que se conceda la licencia con goce de dieta.

—Se vota y resulta afirmativa.

5

MOCION

Sr. Fassi. — Hago moción para que se trate sobre tablas el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre salario mínimo, vital y móvil.

Sr. Presidente. — En consideración la moción del señor senador Fassi.

Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

6

SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar lectura al dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Sr. Fassi. — Formulo indicación para que se lea solamente la parte formal del dictamen, porque todos tenemos en nuestros bancos el dictamen impreso.

Sr. Presidente. — En consideración la indicación del señor senador Fassi para que se suprima la lectura en general en razón de que el dictamen está impreso y en poder de los señores senadores en sus respectivas bancas.

Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Secretario (Maffei). — (Leyendo):

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión, sobre salario mínimo, vital y móvil; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.

De acuerdo con el artículo 91 del reglamento del Honorable Senado, las comisiones han dispuesto pasar este dictamen directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, junio 5 de 1964.

Santiago Carlos Fassi. — José Alberto Martínez. — Angel R. Freytes. — Rubén V. M. Blanco. — Adolfo A. Barbich. — José Enrique Gadano. — Eduardo José Agustín Gamond. — Galileo Mancini.

En disidencia parcial:

Félix E. Astudillo.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(5 de junio de 1964)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Toda persona mayor de 18 años, que trabaje por cuenta ajena bajo dependencia de un empleador, percibirá una remuneración no inferior al salario vital mínimo que se establezca de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

Art. 2º — Salario vital mínimo es la remuneración que posibilite asegurar, en cada zona, al trabajador y a su familia, alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión.

Art. 3º — El salario comprende a toda remuneración de servicios en dinero, especie, alimentos, uso de habitación, comisiones, habilitaciones y viáticos, excepto, en cuanto a este rubro, la parte efectivamente pagada y acreditada por medio de comprobantes. El salario vital mínimo estará integrado además por las asignaciones familiares.

Art. 4º — Las disposiciones sobre salario vital mínimo revisten el carácter de orden público. Por ninguna causa podrán abonarse sueldos o salarios inferiores a los que se fijen de conformidad con la presente ley, ni podrán los mismos ser disminuidos por contratos individuales o convenciones colectivas, siendo nula toda disposición o cláusula salarial en contrario.

Art. 5º — Créase el Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil, con la función

esencial de determinar periódicamente el salario vital mínimo.

Art. 6º — El consejo estará integrado por cuatro representantes estatales, dos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y dos por el Ministerio de Economía, cuatro de los trabajadores y cuatro de los empleadores, todos con sus respectivos suplentes, que reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, ausencia, licencia, enfermedad o fallecimiento. Funcionará como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El presidente del consejo debe ser designado por éste, entre los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 7º — Los miembros del consejo serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía, de la central de trabajadores con personería gremial y de la o las entidades empresarias más representativas. Durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelectos. Deberán reunir los requisitos exigidos para ser electo diputado nacional y poseer reconocida versación en materia laboral o económica. Si alguna de las entidades que deben designar representantes se negare a formular la propuesta, las designaciones se harán de oficio.

Art. 8º — El consejo tendrá las siguientes facultades:

- a) Nombrar comisiones de estudio con la participación de los sectores interesados;
- b) Requerir asesoramiento e información de las reparticiones y organismos nacionales, provinciales, municipales o privados;
- c) Realizar encuestas y estudios relativos a la situación económica y condiciones de vida de los trabajadores en las distintas zonas del país y publicar anualmente un informe económico-social con referencia a la evolución de los salarios, precios, costos y ganancias;
- d) Contratar, previo concurso, personal administrativo y técnico;
- e) Formular su presupuesto de gastos. Estos serán atendidos con hasta el 20 % de los recursos que ingresen por aplicación del artículo 15. El excedente será transferido a la orden del Consejo Nacional de Enseñanza Técnica;
- f) Realizar toda otra actividad tendiente al cumplimiento de esta ley.

Art. 9º — El consejo determinará anualmente, para cada zona, el salario vital mínimo para la familia tipo del trabajador, considerándose tal la integrada por los cónyuges y dos hijos a su cargo, teniendo en cuenta las exigencias establecidas en el artículo 2º; las variaciones de los índices de costo de vida elaborados por la Dirección Nacional de Estadística y Censos y por otros organismos oficiales; los índices zonales, que deberá determinar el consejo reali-

zando los estudios e investigaciones necesarios; la capacidad económica de las distintas zonas del país y las circunstancias que no determinen un aumento de los índices de desocupación.

Establecerá así mismo, por resolución fundada, los porcentajes de aumento o reducción correspondientes a las distintas zonas de aplicación, a los aprendices y menores, a los trabajadores cuya capacidad laboral se encuentre manifiestamente disminuida y a aquellos que cumplan un horario de trabajo no impuesto por la calificación, naturaleza o características especiales del mismo, inferior a la jornada legal, y determinará las remuneraciones que, por su efectivo carácter de premios, primas y bonificaciones por incentivación, productividad u otro concepto, no deben considerarse para el cómputo del salario vital mínimo.

El salario vital mínimo se expresará en montos mensuales, diarios y horarios.

Art. 10. — A petición de cualquiera de los sectores representados en el consejo, se podrá modificar el monto del salario vital mínimo antes del vencimiento del período de su vigencia, siempre que los índices de costo de vida tenidos en cuenta para su determinación muestren una variación del 15 %, sin perjuicio de considerarse las demás circunstancias previstas en el artículo anterior. No se podrán practicar tales modificaciones sino en períodos mayores de 180 días.

Art. 11. — El 30 % del monto del salario vital mínimo para la familia tipo estará integrado por las asignaciones familiares. El monto de la asignación familiar por cada persona que genere el derecho a percibirla será el equivalente al 10 % del que se fije como salario vital mínimo de acuerdo con el artículo 99. Las asignaciones familiares no estarán sujetas al pago de aportes jubilatorios ni del impuesto a los réditos.

Art. 12. — Las asignaciones familiares se abonarán a los trabajadores que presten servicios en la actividad privada, conforme al régimen establecido por los decretos leyes 7.913/57, 7.914/57, sus modificatorios y la ley 15.223. Quedan incorporadas al sistema de los textos legales citados todas las actividades que tengan establecidos regímenes de salario familiar sin compensación propia.

La Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio de la República Argentina tendrá a su cargo la aplicación del régimen respecto de todas las actividades civiles, comerciales y rurales.

Las asignaciones familiares que corresponda percibir a los agentes de la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado se abonarán directamente, efectuándose las provisiones necesarias en los respectivos presupuestos.

Art. 13. — El salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia será el equivalente al 70 % del que se fije de acuerdo con el artículo 99.

Art. 14. — El salario vital mínimo fijado por el consejo nunca tendrá efecto retroactivo. Tendrá vigencia y será de aplicación obligatoria al mes siguiente de la publicación por tres días en el Boletín Oficial, la que deberá efectuarse dentro de los diez días de dictada la resolución y dispuesta directamente por el consejo.

Art. 15. — Los gastos del consejo serán atendidos con dos unidades del aporte previsto por el artículo 48 del decreto ley 33.302/45 —ley 12.921—, en la proporción establecida en el inciso e) del artículo 89.

Art. 16. — Quedan excluidas del régimen de la presente ley:

- a) Las remuneraciones del servicio doméstico;
- b) Las de los agentes de las administraciones provinciales y los de sus municipalidades, organismos descentralizados y autárquicos provinciales y municipales.

El Poder Ejecutivo nacional gestionará ante los gobiernos provinciales la sanción de normas concordantes con las de la presente ley, en beneficio del personal mencionado.

Art. 17. — Las infracciones a la presente ley, consistentes en el pago de salarios inferiores al vital mínimo, serán sancionadas con multas de hasta diez veces el valor de la diferencia entre el salario vital mínimo y el efectivamente pagado.

Serán autoridades de aplicación de la presente ley los organismos nacionales o provinciales que tengan competencia en materia de policía del trabajo en sus respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponderle al trabajador.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social controlará, en todo el territorio de la República, el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 48 del decreto ley 33.302/45 —ley 12.921—, pudiendo aplicar a los infractores multas de hasta diez veces el valor de los aportes que hubieran omitido depositar.

Art. 18. — La presente ley no afectará los mejores derechos que tuvieron los trabajadores por aplicación de otras normas legales o convencionales.

A los fines de la presente ley entiéndese por jornada de trabajo la que habitualmente desempeña el trabajador o fije la convención colectiva.

Art. 19. — Deróganse los artículos 1º a 44 y 50 a 65 del decreto ley 33.302/45 —ley 12.921— y toda otra disposición que se oponga a esta ley.

Art. 20. — El Poder Ejecutivo procederá a constituir el Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil dentro de los treinta días de la promulgación de la presente ley. Dentro de los treinta días subsiguientes el consejo elevará al Poder Ejecutivo su propuesta de reglamentación de la ley, en la que se determinarán los procedimientos aplicables para ajustar el salario vi-

tal mínimo a modalidades especiales de remuneración.

Art. 21. — Hasta tanto el consejo se constituya y determine para el primer período anual el monto del salario vital mínimo a que se refiere el artículo 9º, el mismo será fijado por el Poder Ejecutivo dentro de los 15 días de la promulgación de esta ley.

Este salario no podrá ser inferior a catorce mil pesos (\$ 14.000) mensuales, con las modalidades establecidas por los artículos 9º y 11.

Art. 22. — El consejo o, en su defecto, el Poder Ejecutivo establecerá, dentro de los treinta días de la promulgación de esta ley, en forma provisional, las zonas en que se dividirá el país a los efectos de su aplicación y las variaciones porcentuales para los supuestos mencionados en el segundo párrafo del artículo 9º, y dará cumplimiento a lo establecido en el último párrafo.

Art. 23. — El salario mínimo vital que se fije en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, regirá para los trabajadores de la actividad privada a partir del segundo mes subsiguiente a la promulgación de esta ley. Para los agentes de la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado, a partir del 1º de noviembre próximo, debiendo efectuarse las previsiones presupuestarias necesarias.

Art. 24. — Hasta tanto se lo incluya en el presupuesto general de gastos y recursos de la Nación, queda autorizado el Poder Ejecutivo para aprobar el presupuesto del Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil.

Art. 25. — Sin perjuicio de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la ley 16.454, por el término de seis meses a partir de la vigencia de esta ley, los precios de los productos y artículos de primera necesidad que no hubieren sido establecidos por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la mencionada ley, y los de los materiales de construcción, no podrán ser superiores a los vigentes al 1º de marzo de 1964 o al menor precio que hubieren tenido entre dicha fecha y la promulgación de la presente ley, en todas las etapas de la comercialización.

La Secretaría de Estado de Comercio podrá autorizar modificaciones en los casos de productos estacionales o en aquellos casos concretos en que las circunstancias de hecho así lo aconsejen.

Las infracciones a este artículo serán penadas conforme a las prescripciones de la ley 16.454.

Art. 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ARTURO MOR ROIG.
Guillermo González.

ANTECEDENTES

Mensaje

Buenos Aires, 13 de abril de 1964.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter el

adjunto proyecto de ley por el cual se instituye el salario mínimo, vital y móvil.

Al hacerlo, da cumplimiento al mandato que emana del artículo 14 bis, incorporado a la Constitución Nacional por la Convención Constituyente de 1957, a lo que establece la plataforma de gobierno y al compromiso contraído con la ciudadanía en los comicios en que resultó electo.

Existe una imagen de la democracia en nuestro continente que puede resultar poco atractiva para sus pueblos, en la medida que siga sin atender justos reclamos de bienestar y seguridad, para cuya satisfacción debe apelarse a toda la firmeza, pues es preciso modificar estructuras anacrónicas que determinan un trato injusto y sin posibilidades de rectificación.

Estas reformas deben hacerse en tiempo, para evitar que la titularidad del proceso de transformación sea transferida a esquemas totalitarios que se presentan con una prédica seductora y una mística en su accionar a la que los pueblos pueden llegar a atribuir las virtudes realizadoras que la democracia no exhibe, por más que resulte ilusorio buscar el bienestar material por la vía de la pérdida de la libertad.

Crear riqueza suficiente y distribuirla con justicia constituyen imperativos permanentes de esta etapa de nuestra vida como nación. Para crear riqueza suficiente nos hemos comprometido a la «movilización de los recursos materiales y espirituales de la Nación, utilizando la planificación económica y social democrática», la que será verdaderamente democrática en tanto cuente con el asentimiento de las mayorías. Ese asentimiento no se logrará si el hombre de trabajo no se siente interpretado en sus aspiraciones, protegido en sus derechos, asegurado en la satisfacción de sus necesidades mínimas y convencido de que su participación en el producido del esfuerzo común, es la justa.

Reiteramos lo que dijéramos ante la Honorable Asamblea Legislativa en nuestro mensaje del 12 de octubre de 1963, utilizando las palabras pronunciadas desde la más alta tribuna espiritual de la humanidad por el papa Juan XXIII, cuando afirmó en su histórica encíclica *Mater et Magistra* que: «la riqueza económica de un pueblo no consiste solamente en la abundancia total de los bienes sino también y más aún, en la real y eficaz distribución según justicia, para garantía del desarrollo personal de los miembros de la sociedad, en lo que consiste el verdadero fin de la economía nacional».

Es penoso reconocer que los argentinos no hemos podido en los últimos tiempos imprimir al crecimiento económico el ritmo necesario para satisfacer las necesidades de nuestra población creciente, y lo es mucho más, comprobar que se ha dado a la distribución de la renta nacional un signo regresivo. Estas condiciones económicas y sociales nos hicieron decir a vuestra honorabilidad en ocasión del mensaje con que iniciamos nuestro mandato constitucional: «Las estadísticas nos colocan ante una dolorosa realidad, pues ellas demuestran en forma irrefutable que, durante los últimos años, se ha ido paulatinamente disminuyendo la participación del sector laboral en el producto nacional, lo que no sólo ha importado una evidente injusticia social, sino que ha repercutido perjudicialmente en nuestro proceso de desarrollo nacional».

Tan es cierta esta afirmación, que la inversión de la distribución de la renta nacional —cumplida en los últimos años, lo que supone una mayor participación del capital—, ha ido acompañada con el languidecimiento de la economía general de la Nación, la para-

lización de sectores importantes de nuestra industria nacional y el conocimiento por las nuevas generaciones de trabajadores del flagelo de la desocupación.

Los pueblos deben recoger oportunamente las experiencias que el curso de los hechos muestre. Es imprescindible que los responsables de la orientación del pueblo en todos los campos de la actividad política, económica y social utilicen estas enseñanzas para rectificar el rumbo con firmeza y renovadas convicciones.

No debería ser necesario repetir, a esta altura de la evolución científica, cultural y tecnológica de la humanidad, que no hay naciones ricas con pueblos empobrecidos; que el soporte fundamental de las actividades productivas es la existencia de un fuerte mercado de consumo.

Pero si estas razones no fueran suficientes para quienes han sostenido y sostienen la mala filosofía de que la mejor manera de aquietar los reclamos de los pueblos es mantener una adecuada tasa de desocupados, les señalamos el alto grado de inquietud social que sustituye a la paz constructiva y fecunda, cuando esos pueblos advierten que son objeto de un trato injusto. Esa inquietud, que se torna rápidamente en beligerancia social, no permite a gobernantes y gobernados, a trabajadores y empresarios, concertar armónicamente sus empeños para acometer la apasionante tarea de producir los bienes y servicios, en cantidad suficiente para satisfacer justos reclamos.

Va de suyo que la redistribución del ingreso con sentido social cumple dos altas finalidades de interés nacional: una, de elemental justicia, cual es la de restituir a los trabajadores los niveles de participación en el producto nacional que ya habían conquistado; la otra, impostergable para la reactivación económica, de incrementar en oportunidad la demanda que ponga en funcionamiento los dispositivos productivos ociosos y absorba la mano de obra desocupada.

Esta preocupación, llevó al Poder Ejecutivo a dictar el decreto 1.199, por el cual se estableció el funcionamiento de una comisión integrada por representantes obreros, empresarios y del Poder Ejecutivo, a la que se le asignó la función de confeccionar un proyecto de salario mínimo vital y móvil.

Se decía en los considerandos del citado decreto: «que las estadísticas demuestran el deterioro progresivo del salario real ante el avance continuado del nivel de precios, sin que los periódicos ajustes de los salarios nominales alcancen a compensar la merma en el poder de compra de los trabajadores, por falta de una relación constante entre precios y salarios. Tal situación afecta sensiblemente las condiciones de vida de los trabajadores y es fuente de desaliento y de malestar, particularmente en aquellos sectores que perciben remuneraciones más bajas, pues tales desequilibrios determinan privaciones que impiden satisfacer las necesidades más elementales de la subsistencia. Hacia el logro de una garantía que ponga a cubierto de tales variaciones a la población asalariada, ha de tender la vigencia del salario mínimo vital y móvil. No obstante, la formulación del régimen legal que ha de regir la institución presupone la realización de un estudio integral de las peculiaridades que ha de revestir el nuevo sistema, así como de sus posibles repercusiones sobre la economía general, por cuanto es necesario prever toda consecuencia de naturaleza inflacionaria, que perturbe los objetivos de los planes y programas de desarrollo, en cuya materialización radica en definitiva la posibilidad de un ascenso ponderable en los niveles de bienestar social del país».

La experiencia internacional resume el alcance de las leyes sobre salarios mínimos de un modo coincidente con todo lo anteriormente expresado: «El objetivo principal de las leyes sobre salarios mínimos es evitar la explotación de trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de oferta de mano de obra. Tal situación ocasiona en gran forma salarios bajos, en especial cuando no existe un movimiento sindical poderoso y activo. Además, es socialmente indeseable, injusto desde un punto de vista humanitario, y políticamente peligroso, mantener a un sector de la población percibiendo salarios de mera subsistencia.

«Otro de los objetivos es el de asegurar a los trabajadores un ingreso mínimo adecuado y aumentar el poder de compra. Mejorar los salarios de los sectores más pobres de la población trabajadora constituye uno de los aspectos más urgentes del desarrollo económico y social. Los bajos niveles de salarios son no sólo el resultado, sino también una causa, de baja productividad; así mismo, tienden a limitar la demanda de muchos tipos de productos, obstruyendo, en esta forma, las actividades de inversión, y retardando el desarrollo.

«Otro de los objetivos de la reglamentación de salarios mínimos es el logro de una distribución más equitativa del ingreso. En muchos países latinoamericanos que han logrado grandes progresos en el incremento de la riqueza nacional, vastos sectores de la población trabajadora se han beneficiado en forma muy escasa de este progreso. En el informe presentado a la OEA por el Grupo Internacional de Dirigentes Sindicales se destacó que los planes nacionales de desarrollo eran deficientes, especialmente en lo que se refiere a distribución del ingreso y a políticas de salarios y a sistemas y estructuras salariales.» (Objetivos de las leyes sobre salarios mínimos, Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, Bogotá, Colombia. Marzo de 1963. Documento de referencia número 6.)

Es incuestionable que la inspiración de fijar un límite mínimo al salario comporta un alto sentido de justicia y de preservación social. Así lo entendió la Organización Internacional del Trabajo, que en su conferencia anual de 1928 sancionó un proyecto de convenio, en el que se establece la conveniencia de fijar salarios mínimos para los trabajadores industriales.

La Declaración de Principios Sociales de América, contenida en el acta final de la Conferencia Interamericana, que se reunió en Chapultepec en febrero de 1945, ratificada por ley del Congreso argentino, recomendó la fijación de un salario mínimo vital que fuera suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, en su carácter de jefe de familia, y que dicho salario fuera «lo bastante flexible para adaptarse al alza de los precios, a fin de que su capacidad remunerativa garantizara y aun aumentara el poder adquisitivo del trabajo, manteniéndolo en armonía y equilibrio tanto con las condiciones variables de tiempo y regiones, como con el mejor rendimiento en la producción y la consecuente disminución de costos unitarios».

La novena Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogotá en 1948, sancionó la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, entre las que se establece que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo suficiente para cubrir sus necesidades normales de todo orden, de acuerdo con las condiciones de cada región y cada labor, el

costo de la vida, la capacidad del trabajador y los sistemas de remuneración de las empresas.

La Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo sobre la Alianza para el Progreso —Declaración de Cundinamarca, Bogotá, 1963— señaló la necesidad de que los programas laborales de los países americanos, en consulta con los sectores interesados, establezcan sistemas de salarios mínimos que permitan a los trabajadores participar en los beneficios del desarrollo económico y social.

La doctrina social de la Iglesia Católica tampoco ha permanecido ajena a esta aspiración de los trabajadores, y ya León XIII en la encíclica *Rerum Novarum* proclama el principio del salario vital; Pío XI en la *Quadragesimo Anno* completa el concepto estableciendo que «hay que dar al obrero una remuneración que sea suficiente para su propia sustentación y la de su familia», y Juan XXIII en *Mater et Magistra* culmina la evolución proclamando con toda claridad el derecho del trabajador a un salario mínimo y vital.

Cuando vuestra honorabilidad entre al estudio del proyecto de ley que se adjunta, tendrá oportunidad de valorar los riquísimos antecedentes legislativos que se inician en el año 1904, con el proyecto de Código del Trabajo de Joaquín V. González, y se siguen con los proyectos del diputado Nicolás Repetto en 1913, del senador del Valle Iberlucea en el año 1919 y el del diputado Leónidas Anastasi durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, que ya establecía el mecanismo de fijación del salario mínimo por una «comisión mixta de patronos y obreros presidida por un tercero y debidamente asesorada por técnicos».

Comprobará el alto cuerpo que siempre estuvo presente en el ánimo del legislador argentino, el establecimiento de un régimen salarial que diera debida protección al interés del trabajador. La ley 12.921, al ratificar el decreto 33.302/44 que creó el Instituto Nacional de las Remuneraciones, fue coherente con esos antecedentes, pero no es menos cierto que ningún gobierno de los que se sucedieron puso en marcha ese ordenamiento legal.

Las intenciones reiteradas a lo largo de sesenta años, indican la prudencia con que debe abordarse esta institución fundamental del derecho laboral, que no puede ser un mero alarde intelectual, que cree expectativas que no puedan ser satisfechas, sino que debe erigirse en instrumento del progreso social y económico de la República, asentado sólidamente sobre su realidad.

El proyecto de ley que sometemos a vuestra honorabilidad, resultó de la labor de la comisión creada por el decreto 1.199/64. Los representantes del Poder Ejecutivo en dicha comisión colaboraron un anteproyecto que fue considerado por los delegados de la Confederación General del Trabajo, de la Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres, de la Confederación General Económica, de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación General de Industrias que la integraron.

Los distintos sectores empresarios señalaron la inoportunidad de la implantación de un sistema de salario mínimo vital y móvil debido a la situación económica por que atraviesa el país, pero sin declinar su posición, y ante la decisión del Poder Ejecutivo, de posibilitar un constructivo debate nacional incluyendo el tema en sesiones extraordinarias, participaron en la redacción del proyecto.

La Confederación General del Trabajo ratificó en la comisión su apoyo al régimen de salario mínimo

vital, participando en consecuencia de su redacción.

El Ministerio de Trabajo procuró obtener coincidencias de los distintos sectores y cuando las obtuvo las incluyó en el proyecto.

De ese modo, con la contribución de trabajadores y empresarios, el Poder Ejecutivo redactó el proyecto de ley adjunto, que define el concepto de salario mínimo vital en coincidencia con las modernas concepciones del derecho laboral nacional e internacional.

La movilidad se establece sobre la base de su revisión en plazos prudentes y atendiendo a modificaciones del costo de la vida, determinadas por estadísticas oficiales y por los índices que el propio consejo nacional determine.

Se señala la obligación por parte de ese organismo de ponderar, cada vez que fije el salario mínimo, las consecuencias que el mismo tendrá sobre la economía de los distintos sectores de actividad, sus efectos sobre la economía general y la de las distintas zonas del país en particular.

El organismo de aplicación de la ley, el Consejo Nacional de Salario Mínimo, se estructura en forma tripartita, de acuerdo a lo aconsejado por los organismos internacionales especializados, pues de ese modo y en base a métodos bien concebidos, se reduce la posibilidad de error en forma más satisfactoria que un sistema de aumentos de salarios por decisión política, sea de la rama ejecutiva o legislativa.

Con este mensaje, el proyecto de ley de salario mínimo, vital y móvil toma estado parlamentario y alcanza, en el marco agosto de vuestra honorabilidad, la instancia en que es más auténtica la expresión de la voluntad popular. La serenidad y sabiduría de los señores legisladores han de dar el tono de las mejores tradiciones del Parlamento argentino, para que este constructivo debate tenga lugar en bien de la paz social.

Reitero a vuestra honorabilidad que lo importante no es que el sentido social de la democracia esté en nuestras declaraciones políticas o estatutos partidarios, sino que los argentinos tengamos la decisión y la valentía de llevarlos a la práctica.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO U. ILLIA.
Fernando Solá.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Todos los obreros y empleados, sin distinción de sexos, que realicen tareas en relación de dependencia dentro del territorio de la República percibirán una remuneración no inferior al salario mínimo vital que se establezca de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Exceptuánse aquellos que se encuentren comprendidos en regímenes especiales cuyo funcionamiento fije la movilidad salarial.

Art. 2º—Considérase salario mínimo vital a la remuneración que posibilite al trabajador alimentación adecuada, vivienda decorosa, vestido digno, asistencia sanitaria, educación, esparcimiento, seguro y previsión.

Art. 3º—El sueldo o salario a los efectos de la presente ley comprende a toda remuneración de servicios en dinero, especie, alimentos, uso de habitación, comisiones, propinas y viáticos excepto en

cuanto al último rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes.

Art. 4º—El salario mínimo vital revistirá carácter de orden público y será irrenunciable; por tanto, por causa alguna podrán abonarse sueldos o salarios inferiores a los que se fijen de conformidad con la presente ley, ni podrán los mismos ser disminuidos por contratos individuales o convenciones colectivas, siendo nulo todo acuerdo o pacto en contrario.

Quedan excluidas de las precedentes normas las mayores sumas que, por encima del salario mínimo vital y de los salarios básicos emergentes de las convenciones colectivas, fijen o convengan los empleadores, principalmente como consecuencia de la aplicación de sistemas de premios o incentivos para incrementar la productividad; tales sistemas se registrarán exclusivamente por las disposiciones propias que en cada caso se hayan establecido o pactado o se establezcan o pacten en el futuro.

Art. 5º—Créase el Consejo Nacional de Salario Mínimo con la función de determinar periódicamente el salario mínimo vital.

Art. 6º—El consejo estará integrado por cuatro representantes del Poder Ejecutivo nacional, dos de los cuales lo serán por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, uno por el de Economía y uno por el de Obras y Servicios Públicos; cuatro de los trabajadores y cuatro de los empleadores, todos con sus respectivos suplentes. Funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual tendrá su sede y será presidido por el funcionario que éste designe de entre sus representantes.

Art. 7º—Los miembros que integren el consejo serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Economía y de Obras y Servicios Públicos; de la central de trabajadores con personería gremial más representativa y de la o las entidades empresarias más representativas. Durarán tres años en las funciones y podrán ser reelectos. Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia, licencia, enfermedad o fallecimiento.

Deberán reunir los requisitos de edad y nacionalidad exigidos para ser electo diputado nacional y poseer reconocida versación en materia económica o laboral.

Si alguna de las entidades consideradas por el Poder Ejecutivo nacional como más representativa se negare a la integración del Consejo de Salario Mínimo, las designaciones se harán de oficio.

Art. 8º—El consejo queda facultado para:

- Nombrar subcomisiones de estudio con la participación de los sectores interesados de cada actividad específica;
- Requerir asesoramiento e información de los distintos organismos nacionales, provinciales o municipales;
- Realizar encuestas y estudios relativos a la situación económica y condiciones de vida de los trabajadores en las distintas zonas del país;
- Tomar personal administrativo y contratar economistas y técnicos especializados;
- Formular su presupuesto de gastos y realizar toda otra actividad pertinente para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 9º—El consejo determinará anualmente el salario mínimo vital teniendo en cuenta los índices de costo de vida elaborados por la Dirección Nacio-

nal de Estadísticas y Censos, los índices zonales que pueda determinar el consejo en virtud de los estudios que realice, las exigencias establecidas en el artículo 2º, la capacidad económica de las distintas zonas del país y circunstancias que no determinen el aumento de los índices de desocupación. En cada oportunidad en que el consejo fije el monto del salario mínimo vital para un período determinado, deberá previamente estudiar y ponderar las consecuencias que el mismo tendrá sobre la economía de los distintos sectores de actividad, sus efectos sobre la economía general y las distintas zonas del país en particular.

Establecerá así mismo, por resolución fundada y atendiendo a las particularidades de cada convención colectiva, los porcentajes de reducción aplicables a los aprendices, cadetes y menores, a empleados y obreros cuya capacidad de trabajo se encuentre manifiestamente disminuida y aquellos que cumplan una jornada de trabajo, no impuesta por la naturaleza o características especiales del mismo, inferior a la jornada legal o las establecidas en las convenciones colectivas. El salario mínimo vital se expresará en montos mensuales, diarios y horarios.

Art. 10.—A petición de cualquiera de los sectores interesados se podrá modificar el salario mínimo vital antes de su vencimiento, siempre que los índices tenidos en cuenta para fijarlos muestren una variación del quince por ciento o más, sin perjuicio de considerarse las circunstancias prescritas en el artículo 9º. No se podrán practicar tales modificaciones al salario mínimo vigente, sino en períodos mayores de 180 días.

Art. 11.—El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no homologará ninguna convención colectiva de trabajo, estatuto o escalafón celebrados de acuerdo al régimen de la ley 14.250 que tengan remuneraciones inferiores al mínimo establecido por el consejo nacional para la actividad de que se trate.

Art. 12.—Los empleadores que abonen el sueldo anual complementario están obligados a ingresar, dentro de los 15 días hábiles, en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del consejo, el 5 % del monto total pagado por tal concepto. A tal efecto, los empleadores quedan facultados para retener el 2 % a los empleados y obreros en el momento del pago.

Art. 13.—Las infracciones a la presente ley, consistentes en el pago de salarios inferiores al mínimo vital serán sancionadas con una multa de hasta 10 veces el valor de la diferencia entre el mínimo vital y el salario efectivamente pagado.

Son autoridades de aplicación de la presente ley, en lo relativo al pago del salario vital mínimo, los organismos nacionales y provinciales que tengan competencia en materia de policía de trabajo, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social queda facultado para controlar en todo el territorio de la Nación el cumplimiento de la obligación que instituye el artículo 12 de la presente ley, pudiendo imponer multas de un valor de hasta 10 veces el monto de la suma que se hubiere omitido depositar.

Art. 14.—Los fondos recaudados en virtud del artículo 48 del decreto ley 33.302/45, ratificado por ley 12.921, y los que se recaudaren por los artículos 12 y 13 de la presente ley, serán transferidos y/o depositados a la orden del Consejo Nacional de Salario Mínimo, el que propondrá al Poder Ejecutivo nacional el destino de su inversión, previa deducción de las sumas necesarias para la atención de su presupuesto.

Art. 15. — El Poder Ejecutivo nacional deberá constituir el consejo dentro de los treinta días subsiguientes a la promulgación de la presente ley. El consejo, dentro de los sesenta días subsiguientes, propondrá al Poder Ejecutivo nacional la reglamentación de la ley.

Art. 16. — La reglamentación determinará los procedimientos para ajustar el salario mínimo a las distintas actividades y modalidades de trabajo.

Art. 17. — El salario mínimo fijado por el consejo nunca tendrá carácter retroactivo. Tendrá vigencia y será de aplicación obligatoria al mes siguiente de la publicación por tres días en el Boletín Oficial. Las disposiciones de esta ley son de orden público e irrenunciables para las partes.

Art. 18. — Derógase el artículo 48 y demás artículos del decreto ley 33.302/45, ratificado por la ley 12.921, y cualquier otra disposición que se oponga a la presente ley.

Art. 19. — El Poder Ejecutivo nacional gestionará ante los gobiernos provinciales la sanción de normas concordantes con la presente ley que aseguren a sus agentes y a los de las municipalidades la movilidad de sus remuneraciones.

Art. 20. — A efectos de computar el salario mínimo vital de aquellos trabajadores que presten servicios en relación de dependencia con más de un empleador se tendrán en cuenta todas las remuneraciones en tanto su jornada no exceda la legal.

Art. 21. — Quedan excluidas del régimen de la presente ley las siguientes actividades:

- a) Las prestaciones de servicio a que se refiere el decreto 28.169/44 (ley 12.921);
- b) Los trabajadores comprendidos en la ley 13.020;
- c) Las remuneraciones del servicio doméstico.

El consejo propondrá al Poder Ejecutivo las modificaciones al régimen salarial de los sectores excluidos en los incisos precedentes, para que los salarios se ajusten al concepto de salario mínimo vital y a las posibilidades económicas y modalidades de trabajo.

Art. 22. — Hasta tanto se lo incluya en el presupuesto general de la Nación en vigor, el Poder Ejecutivo nacional queda autorizado para aprobar el presupuesto de gastos y cálculos de recursos del Consejo Nacional de Salario Mínimo.

Art. 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fernando Solá.

Sr. Presidente. — En consideración en general el proyecto de ley sobre salario mínimo, vital y móvil, despachado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el señor miembro informante, senador Martínez.

Sr. Martínez. — Señor presidente: hay hechos singulares y extraordinarios que señalan las etapas definitorias de una época.

Hoy estamos frente a una ley que significará para el país el hito de la fe recuperada por un pueblo que aún no había podido quebrar en forma definitiva las ya viejas estructuras socio-económicas arraigadas en muchas clases dirigidas.

Esta realidad no es la improvisación de una imaginación, se ha amasado desde el fondo de la historia con sangre, sudor y lágrimas.

El trabajo, desde la génesis del hombre, fue por siglos y milenios la lucha contra el hambre, la sed y el instinto de conservación, defendiendo su núcleo biológico, utilizando todos los elementos de la naturaleza y la inventiva primitiva; su mayor o menor esfuerzo significaba su mayor o menor bienestar; tenía el fruto de su trabajo, ciertamente duro y agotador, pero era presuntamente feliz. No pudo evitar la selección natural y debió someterse a la ley del más fuerte. Así nace la esclavitud, la propiedad del hombre por el hombre, como un medio para el logro de los fines de egoísmo, la barbarie y el poder.

El poderoso aprende a no matar a sus vencidos; los esclaviza en el trabajo exterminador para gozar del sacrificio ajeno. Así se arraiga en la filosofía griega el concepto de que hay hombres que nacen libres y otros esclavos. Aristóteles justifica la existencia de la esclavitud como un proceso natural y hasta divino.

Roma organiza el trabajo del esclavo, utilizándolo en todas las tareas; los propietarios obtenían enormes beneficios con el salario de la esclavitud. Nadie trabaja para sí; el poderoso nada hacía y el vencido todo lo entregaba.

Largos periodos de la historia del hombre pasaron sin lograr atenuar las miserables condiciones del vencido; sólo factores de amor y cultura atenuaron este doloroso proceso de la liberación.

Los hijos de esclavos fueron el vínculo permanente para iniciar juntamente con los esclavos intelectuales el camino de una nueva etapa.

El cristianismo ejerce la más profunda transformación social. El hombre halla el verbo de Dios, dormido desde la creación, y se expande por el mundo viejo con arrolladora y prodigiosa metamorfosis.

Hay una voz que dice: la igualdad entre los hombres y la libertad de éstos, es el milagro de un nuevo tiempo.

La mitigación del régimen trae nuevas instituciones: el colonato y la servidumbre, aferrando al hombre a sus derechos a la tierra. Luego los villanos, la gleba, las encomiendas, la mita, las reducciones, la trata de negros, sirven de imagen para señalar el calvario de generaciones y generaciones por siglos y siglos.

La Edad Media opera otra transformación que altera el conjunto social al nacer por imperio de la desesperación y el ansia de dignificar el trabajo, las corporaciones y los gremios que son conformaciones ya de sentido liberativo. Por primera vez el trabajo es expresión y factor de poder. Una nueva conciencia de unidad y solidaridad crean un estilo de lucha, síntoma de nuevos caminos. El absolutismo feudal detiene la revolución pero no puede evitar que las leyes de la historia preparen el advenimiento de la era industrial y económica.

La burguesía nacida de la era de las corporaciones obtiene el dominio del dinero y entonces se convierte en elemento de poder mediante el oro, y unos pocos van adquiriendo todos los

poderes económicos utilizando el salario como medio de pago del trabajo. El sistema del salario, iniciado con la caída de las corporaciones de oficios, tiene por base la libertad de trabajo. Por fin los obreros empiezan a ser libres, pueden vender su labor según la ley de la oferta y la demanda.

El camino recién se allana, pero la burguesía egoísta también determina las condiciones del salario por el derecho del más fuerte.

La figura del poder por la fuerza se estaba trastrocando en la fuerza del dinero. Este aparecía con la misma hegemonía del poderoso sobre el débil, regulando siempre a su conveniencia las condiciones sociales de la humanidad.

Se hacía necesario cumplir nuevas etapas con la presencia de los sindicatos, sustitutos modernos de los gremios y corporaciones de artesanos de la Edad Media, para equilibrar con la unión de los asalariados el dominio de los factores sociales, y morigerar el permanente afán de lucro de la nueva clase económica.

Los sindicatos convierten al mundo laboral en sectores de auténtica expresión y de profunda gravitación de la sociedad moderna, y su consolidación origina positivo avance en el balance económico y humano del trabajo. Nadie puede negar su presencia como organismo social, concretando bases más justas en las relaciones entre patronos y trabajadores.

Muchos creyeron concluido el ciclo de la lucha por el salario, pensaron incluso que los conceptos del poder se habían modificado con la presión sindical, sin comprender que el sistema capitalista se tomaba una tregua para atacar nuevamente mediante la sutileza de las leyes económicas, adecuando la técnica del abuso mediante el deterioro del valor del dinero por la acción del alza de los precios de los productos y servicios.

Así surgieron todos los elementos perturbadores de la economía, derivados por la rotura del razonable equilibrio de los salarios y el precio de las cosas. Esta alteración modificó todo el principio de equidad, fatigosamente buscado y logrado a través de generaciones, obligando a nuevas luchas y disputas sociales.

Esa mezcla de recesión y desarrollo encadenado a una pretendida estabilización monetaria que no era tal, por cuanto se mantenía en forma artificial el dólar con el ahorro nacional, se elevaban los recargos aduaneros, los impuestos y servicios públicos, regateando a la vez los aumentos de salarios, pidiendo tregua a los obreros, buscando paliativos, permitiendo el cierre de las fábricas, destruyendo los sistemas previsionales, se disponía de los dineros de los bancos para todo tipo de negociados, sembrando la desconfianza y el resentimiento.

De tal suerte que el año 1958 se puede precisar como funesto para la economía popular. Ya no era la inflación que perjudicaba al conjunto en general; era una obra perfectamente dirigida, cuyo resultado lógico fue previsi-

ble: la modificación del producto bruto nacional en franco beneficio para la clase empresaria.

Hay muchas otras razones técnicas y prácticas para dejar sentado que nada de lo ocurrido puede aplicarse a las consecuencias de la implantación del salario mínimo, vital y móvil.

Todo lo contrario: tiende a obtener una reducción de los índices de los aumentos de los precios y salarios, si todos los sectores deponen arbitrariedades y dejan en manos de la ley el reajuste que sea necesario.

No podemos dejar de destacar la antigua doctrina de la Iglesia, que sintetizara Pío XI de la siguiente manera: «A más de la justicia conmutativa, existe la justicia social que impone sus deberes, a los que no se pueden sustraer los patronos y los obreros», y agregaba esta expresión que resume toda la filosofía que fundamenta el proyecto de ley que estamos considerando: «no se puede decir que se ha satisfecho la justicia social, si los trabajadores no tienen asegurada la propia sustentación y la de sus familias con un salario proporcionado a este fin...»

El pontífice León XIII en su conocida encíclica *Rerum novarum* proclamó el principio del salario justo, del salario vital, conceptos que luego quedan complementados en forma más definida en la encíclica *Quadragesimo anno*. Juan XXIII culmina todo este proceso proclamado por la Iglesia con su encíclica *Mater et Magistra*.

La Organización Internacional del Trabajo, esa magnífica creación del Tratado de Versalles, ha tomado para sí la responsabilidad a través de la participación directa de todos los países, actuando con la representación de trabajadores y patronos, de propender a ir creando las condiciones necesarias para el establecimiento de normas o principios de carácter internacional sobre salarios mínimos aplicables a todos los países miembros de dicho organismo, lo que es decir a todos los países del mundo. En la XI reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo del año 1928, se adoptó un convenio, que lleva el número 26, para la fijación del salario mínimo. Entre las obligaciones fundamentales que impone el referido convenio está la de «establecer o conservar métodos que permitan la fijación de tasas mínimas de los salarios de los trabajadores y empleados en las industrias».

Se establece también la conveniencia y necesidad de que sean consultados los representantes de los obreros y los patronos para la fijación de los mismos. Señalamos que nuestro país figura entre los tantos que han ratificado este convenio.

La Conferencia Internacional del Trabajo sanciona posteriormente el convenio 93, también estableciendo principios que hacen a la doctrina. En la tercera reunión del año 1951, la conferencia adoptó y sancionó el convenio 99 con referencia a la fijación de salarios mínimos en la agricultura. Dicho convenio establece que «todo miembro de la Organización Internacional

del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a establecer o a conservar métodos adecuados que permitan fijar tasas mínimas de salarios para los trabajadores empleados en las empresas agrícolas o en ocupaciones afines». También en esta reunión se sanciona el convenio 7, que establece el principio de la igualdad de las remuneraciones, que alguna vinculación tiene con la materia que estamos abordando.

Los Estados americanos miembros de la OIT y atentos a la necesidad de encarar en forma conjunta los problemas que son peculiares de esta región del mundo, han ido estructurando organismos de tipo internacional y regional donde se estudiaron los problemas propios de América.

En la segunda conferencia del trabajo de los Estados americanos miembros de la OIT reunidos en La Habana en el año 1939, se adoptó una resolución donde se prevé el establecimiento de salarios mínimos sancionados por vía de la autoridad, es decir, tasas mínimas legales que permitan a los trabajadores mantener un nivel de vida adecuado. También en esa conferencia se sancionó una resolución donde se reconoce la necesidad de establecer salarios mínimos para la mujer que trabaja.

La cuarta conferencia de Estados de América reunida en Montevideo en 1949, recogiendo aquella sanción anterior de la OIT sobre empleo y remuneración de los trabajadores que desempeñan tareas en la agricultura, adoptó una resolución propendiendo y recomendando la necesidad de la fijación de salarios mínimos básicos, tomando muy especialmente en cuenta sus necesidades individuales y también familiares.

Quiero hacer notar con respecto a estos antecedentes, señor presidente, que ya los medios internacionales auspiciaban la obtención del salario vital mínimo para los trabajadores agrícolas, que en la reunión de la Cámara de Diputados ha sido tan duramente fustigado como un elemento perturbador para nuestra economía. Hay profusos antecedentes en el sentido de que los trabajadores de la agricultura merecen igual respeto y remuneración que todos, y especialmente para eliminar esa inquietante desigualdad en los trabajadores de la República Argentina.

La cuarta conferencia reunida en Petrópolis en 1952 adopta resoluciones tendientes a la fijación de salarios mínimos, destacando la necesidad de que el mismo tome en cuenta la satisfacción de las exigencias de un nivel de vida apropiado. Además, se recomienda la conveniencia de que al realizarse las fijaciones salariales por vía legal se consulte a empleadores y trabajadores, los que deben participar en pie de igualdad en los organismos creados o a crearse con esa finalidad.

Esto, señor presidente, justifica el establecimiento de la ley, porque ya los organismos

internacionales piden que ésta fije el salario mínimo, vital y móvil.

En la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá de 1948, donde se adoptó la carta internacional americana de garantías sociales, se proclamó el principio de que todo trabajador tiene derecho a obtener un salario mínimo suficiente para cubrir sus necesidades de todo orden, adecuadas a las condiciones de cada región.

Todo este esfuerzo, toda esta preocupación de distintos organismos internacionales, sean de carácter general o regional, han marchado en conjunción con la preocupación que los distintos Estados han tenido tendiente a concretar por distintos medios y por diversas vías, sistemas que propenden a establecer retribuciones salariales para el trabajador que satisfagan las exigencias de niveles de vida adecuados para el desenvolvimiento y desarrollo de la personalidad humana, tanto en forma individual como integrando el grupo familiar.

En este orden podemos señalar que en casi todos los países del mundo es posible encontrar sea la norma legal, sea la norma reglamentaria, sea incluso la costumbre, un sistema con las más variadas soluciones donde se acepta y se concreta un procedimiento tendiente a la fijación del salario mínimo. En la República Federal Alemana, una ley del 11 de enero de 1952 sancionó el sistema sobre fijación de condiciones mínimas de salario para los trabajadores. Por su parte otros países, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, han establecido un método permanente para fijación de salarios mínimos a través de los consejos de industrias, que pueden ser regionales, centrales o locales.

En los países de América encontramos también los antecedentes legislativos que sancionan por distintas vías o procedimientos el sistema de este proyecto, es decir la fijación del salario mínimo. Bolivia reconoce la vigencia de este sistema a partir del decreto legislativo del año 1944; Brasil, en su Constitución de 1934, proclama la necesidad de establecer un salario mínimo suficiente que satisfaga las necesidades normales del trabajador. Y reglamentando ese principio constitucional, como punto de partida, comienza una abundante legislación sobre la materia a partir de la ley 185, de enero de 1936, que dispuso el establecimiento de juntas especiales para la fijación del salario mínimo.

La nueva Constitución de 1946 reafirmó los principios de la anterior, disponiendo la fijación «de salarios que satisfagan, de acuerdo con las condiciones de cada región, las necesidades normales del trabajador». El artículo 76 de la codificación de las leyes del trabajo, al definir el salario mínimo establece su ámbito de aplicación incluyendo a todos los trabajadores.

Colombia, tras reconocer los antecedentes de distintas normas que se computan cronológica-

mente a partir de 1937, sanciona a través del Código Sustantivo del Trabajo de 1951, complementado por decretos posteriores dentro de los que destacamos el número 3.871, que fija un salario mínimo para todos los trabajadores del país y reconoce el principio del salario vital. Otro tanto podemos decir de Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Uruguay y México.

México, cuyo código del trabajo fue uno de los primeros ordenamientos legales en la materia y ejemplo en América, estableció a través de distintas disposiciones normativas la vigencia del salario mínimo que garantizara a los trabajadores mexicanos un mínimo de vida satisfactorio.

Yendo a nuestro país, esta preocupación, este empeño tendiente a garantizar a los trabajadores el derecho a percibir salarios compensatorios para atender a las elementales exigencias de la vida, tiene exteriorizaciones que reconocen lejanos antecedentes.

En el proyecto de código del trabajo de Joaquín V. González, de 1904, ya se prevían disposiciones que de alguna manera podemos sentar como el reconocimiento de la autoridad pública de la necesidad de establecer salarios que respondan a las necesidades del hombre que trabaja.

El diputado Repetto en 1913 y posteriormente en 1915 y 1917; el senador Del Valle Iberlucea en 1919, y otros legisladores en distintas iniciativas han mostrado la preocupación por establecer en nuestro país un sistema adecuado al reconocimiento del derecho a la percepción de un salario justo y equitativo por parte de los que contratan su capital humano.

En la presidencia de Hipólito Yrigoyen podemos destacar distintas iniciativas para lograr ese propósito. Así como Leonidas Anastasi, en un proyecto presentado en la Cámara de Diputados, procuró conseguir sanción favorable para una ley que establecía el mecanismo para la fijación de salarios mínimos a través de una comisión mixta en la que debían participar patronos y obreros. Otros antecedentes en ese sentido fueron en el año 1938 el del diputado Ghioldi, y del diputado Méndez Calzada en 1939, Bogliolo en 1942, Palacios y otros muchos legisladores que en su momento mostraron esa preocupación loable para materializar los principios que hacen al contenido de este proyecto que consideramos. Es posible mencionar también antecedentes concretos de orden legislativo, como la ley 10.505, sobre trabajadores a domicilio, del año 1918, que prevé la creación de juntas de salarios para la fijación de salarios mínimos para la Capital Federal y los territorios nacionales. Por un decreto del año 1936 se extendió su aplicación a los talleristas. Posteriormente dicha legislación fue modificada por la ley 12.713, del año 1941, donde se mantiene todo el sistema tendiente a establecer salarios que aseguren un nivel de vida adecuado a los trabajadores. El estatuto del peón, del año

1944; el decreto 32.412, del año 1945, sobre el trabajo de menores, y otros han consagrado en nuestra legislación el principio de la intervención directa del Estado en materia de fijación de salarios, regulando los mismos siempre atento al concepto de retribución justa, equitativa, compensatoria y suficiente. No podemos dejar de destacar la sanción del decreto 33.302: por él se creaba el Instituto de las Remuneraciones, el cual debía fijar periódicamente los salarios vitales mínimos y los salarios básicos para todos los empleados y obreros, quedando excluidos los del servicio doméstico y los trabajadores rurales, error fundamental en ese proyecto ley. También se hacía exclusión de los trabajadores públicos.

Dicho instituto, si bien fue creado a través de la sanción del decreto mencionado, no alcanzó a materializarse. Lamentablemente, no fue una concreción real, pero constituye, sin lugar a dudas, un antecedente digno de destacar.

Pero fundamentalmente quiero destacar, como hombre de la Unión Cívica Radical del Pueblo la activa participación que nuestro partido y nuestros hombres han tenido a través de su actuación en la Convención Constituyente de 1957 al sancionar el artículo 14 bis en un minuto en que la Unión Cívica Radical del Pueblo fue mayoría. Ese minuto consagró este artículo fundamental para la vida popular, para esa aspiración del pueblo trabajador de la República, incorporando a nuestra Carta Magna los principios rectores de la protección del trabajo al consagrar el derecho a la retribución justa, al salario mínimo, vital y móvil. Ponemos de relieve que es por mandato de esa norma constitucional que el Poder Ejecutivo ha remitido a este Congreso el proyecto de ley que estamos considerando, que quiere, como lo enuncia el mensaje, atender los justos reclamos de bienestar y seguridad de los trabajadores, apelando a un sistema normativo que tienda a modificar decididamente estructuras anacrónicas que dan un trato injusto al trabajador.

He distraído la atención de este Honorable Senado trayendo la cita de los antecedentes de distinto orden que de una u otra manera traen el abono doctrinario y legal de este proyecto que consideramos. Pero no puedo dejar de hacer una —referencia aunque breve— a un aspecto también fundamental del proyecto, cual es el que hace al principio del reajuste salarial. Todo cuanto hemos traído como cita va a la esencia del proyecto, es decir, a la concreción por vía de sanción legislativa del principio del salario vital mínimo. Ahora quiero hacer algunas aco-taciones con respecto al otro aspecto también fundamental de la movilidad, es decir, el reajuste del salario siguiendo las oscilaciones impuestas por el costo de vida. La idea del reajuste automático, periódico, de los salarios, a fin de que los mismos continúen permanentemente respondiendo a las exigencias del salario vital, consti-

tuye una vieja aspiración de los trabajadores y reconoce antecedentes que brevemente quiero mencionar.

Dejando de lado la cita de los muy anteriores, podemos considerar que es sólo a partir de la guerra de 1914, época en que se desata un violento período de inflación, cuando los trabajadores comienzan a procurar el reconocimiento, sea por parte de los empleadores o del Estado, y la sanción de sistemas o técnicas adecuados para una pronta actualización de sus salarios con relación al alza del costo de vida.

Las escalas móviles o sistema de movilidad han sido reconocidas como procedimiento complementario necesario para mantener una constante relación entre el salario y el aumento del costo de vida. Tales procedimientos se han difundido inicialmente a través de las convenciones colectivas, para luego alcanzar los niveles de la consagración legislativa. Podemos decir que, sea por la vía de la convención colectiva o por vía de la ley, en casi todos los países del mundo se ha consagrado la vigencia de distintos tipos de procedimientos tendientes a ese objetivo primordial: el reajuste del salario en forma periódica, de acuerdo con las modificaciones de los índices del costo de vida. Así, por ejemplo, la Confederación Noruega de Empleadores y su similar de obreros concertaron, en el año 1950, un acuerdo por el que se prevén reajustes semestrales de salarios. En Australia, el reajuste es periódico, y lo propio podemos decir de Nueva Zelandia, Perú, Uruguay, Francia, entre otras naciones. Por ello, quiero dejar señalado que este principio del reajuste del salario, o sea la movilidad del mismo, constituye un principio con abundante abolengo doctrinario y normativo.

Las filosofías económicas liberales han señalado, y han pretendido demostrar e imponer el criterio de que el salario debe regirse exclusivamente por las naturales leyes económicas derivadas de la oferta y la demanda, dejando librado al sector patronal el manejo exclusivo de los costos y precios a fin de poder regularlos de acuerdo con la necesidad de la empresa o las condiciones de la producción y la venta. Este aparente y razonable procedimiento se adecuó perfectamente en la mentalidad de los economistas dispuestos a mantener las enormes distancias económicas de las clases empresarias y las asalariadas, prendidos al atavismo y prejuicios de una era ya considerada caduca.

La economía social tiene objetivos fundamentalmente opuestos. Busca la capitalización del pueblo mediante la participación efectiva del trabajador en las empresas; mediante la distribución equitativa de los bienes y la participación en la conducción como medio de acrisolar el esfuerzo y generar mejores condiciones de vida a la sociedad.

Muchos expresan que el aumento masivo de los salarios significa la inmediata inflación de costos y precios que deteriora el valor adquisi-

tivo del dinero, arruinando el ahorro, anulando la previsión, destruyendo las reservas, desvirtuando las amortizaciones de bienes, imposibilitando la inversión, incrementando la usura, en fin, una serie de secuencias económico-financieras que coloca a los capitales al borde de la quiebra. Es indudable que hay realidades que reconocer, pero tampoco es menos cierto que en países donde la producción industrial es de total consumo interno no puede admitirse la paralización de la actividad, el desempleo, el alza de los costos y precios por el bajo consumo popular. La miseria es la consecuencia de una política económica efectuada al revés, que muchos pretenden instalar en el país para seguir ejerciendo sus privilegios sin pensar que ellos serán los primeros derrotados.

Las condiciones económicas y financieras del país son harto conocidas, pero es interesante demostrar cómo en los últimos años se fue haciendo más notorio el desequilibrio del reparto del producto bruto nacional, consecuencia de una política económica antisocial, derivada de la irresponsabilidad de los sectores empresarios de evitar el alza de los precios. Muchos quieren que el proceso inflacionario se detenga en base al sacrificio de los salarios, para permitir la capitalización de las empresas, y postulan que el método de los convenios colectivos de trabajo es una fuente inagotable de la inflación, que continuará infinitamente.

Este criterio se define como una cobardía económica que se aferra a los clásicos conceptos en la materia sin pensar que la Argentina padece una crisis de inflación no por exceso de dinero en poder del pueblo, sino todo lo contrario, y que sumadas a la paralización por el bajo consumo popular, determina también una crisis de trabajo. Por ello, ante esta complicación económica y laboral, se hace necesario modificar los principios y la conducta económica y financiera. Los créditos otorgados por el Estado no han cumplido el camino de la reactivación industrial; la disminución de la demanda no ha eliminado la tensión de los precios; los enormes fondos bancarios no son utilizados por los empresarios en la producción de stocks. Se ha entrado en un círculo restringido y de seguridad capitalista, dejando a la suerte y a la desesperación a cientos de miles de hombres y mujeres que desean trabajar. El egoísmo de los empresarios no les permite comprender la responsabilidad que tienen en la orientación de la economía hacia el gran consumo y el total empleo, con lo que aliviarían al Estado de sus gastos burocráticos al absorber a miles de trabajadores que pugnan por ingresar en la administración pública para escapar a la miseria.

Entonces, señor presidente, ¿qué leyes y normas podemos permitir que cierran el camino al trabajo al hombre argentino? Debemos arbitrar nuevos pensamientos económicos para reanudar el camino de las realizaciones que el país necesita.

Un pueblo sin salario vital configura una sociedad desamparada y sin seguridad laboral, donde las nuevas generaciones esperan estoicamente la oportunidad de lograr su ubicación de acuerdo con su vocación y formación.

Un Estado sin recursos financieros y un país sin realizaciones son la consecuencia de que haya algunos que viven del privilegio de una injusta distribución de bienes.

Podemos hablar de moneda sana y aplicar las técnicas económicas que la rigen cuando están dadas las condiciones generales para evitar la inflación por el exceso de demanda en relación a los bienes producidos, orientando ese ahorro a los fines de capitalizar al pueblo en bienes productivos.

Pero ante un panorama de infraconsumo, descapitalización popular, inflación de precios y costos por improductividad, hay que apelar a una nueva distribución, primero, con un equilibrio de los salarios y los precios de los productos mediante un mecanismo que los regule permanentemente sin distorsión artificial; segundo, aplicando las leyes impositivas integralmente; tercero, controlando los precios de los artículos de consumo popular; cuarto, contribuyendo a la productividad con todo el poder del Estado, acordando préstamos a bajo interés y largo plazo.

Nadie puede negar que algunas medidas dadas con este nuevo espíritu económico han elevado las posibilidades de los trabajadores y jubilados creando un mayor consumo, que significa paralelamente una mayor producción. Esta corriente, prudente pero sostenida, de promover los salarios y controlar los precios, dará a breve plazo la razón de nuestra tesis.

También se hace necesario dejar bien establecido que durante el ciclo 1945/49 se originó una fuerte expansión industrial beneficiando solamente a ese sector del pueblo en detrimento de otros sectores también populares, consecuencia funesta para asegurar los bienes fundamentales para la economía del país, como es la agricultura y la ganadería. También se hicieron discriminaciones en las remuneraciones dando ventajas a ciertos grupos en perjuicio de otros, agravada por una serie de subsidios a casi todos los servicios públicos y otras secuencias que modificaron y destruyeron los beneficios iniciales de la fuerte actividad industrial.

Posteriormente, en el período 1955/1963, se inicia una serie de planes económicos en base al sacrificio de las condiciones de vida del pueblo con menos recursos.

Entonces se hizo necesario hallar nuevas estructuras que retornaran al principio ético del salario, en cuyo hito están ya todos los pueblos civilizados, no por improvisación o empirismo, sino por razón de evolución de la lucha del fuerte sobre el débil, síntoma del permanente egoísmo de los hombres. Estoy seguro que si nosotros no cumplimos, detendremos el nuevo

proceso de la reivindicación total del pueblo asalariado argentino. No puedo predecir el tiempo y el efecto, pero sí, no seremos artífices del acontecimiento que por sí colma la satisfacción de ser protagonista.

El salario vital, mínimo y móvil es la nueva expresión que el Estado ha ideado para obtener la armonía de las grandes clases sociales que integran el pueblo. La ley será, en consecuencia, la piedra fundamental de una nueva era de la historia del trabajo y el salario.

Abordando en términos generales el proyecto en consideración, quiero, señor presidente, realizar un análisis aunque sea somero de los tópicos fundamentales que hacen a lo medular, a la esencia del proyecto. En primer término, queremos resaltar el alcance y el ámbito de aplicación que han de tener en la práctica las disposiciones del proyecto de ley que estamos considerando. Por su artículo primero, se extiende el ámbito de su aplicación a todos los trabajadores, sin distinción de sexo, que realicen tareas en relación de dependencia. Para todos ellos el proyecto sanciona un régimen a través del cual se garantiza a los trabajadores un salario, una remuneración que no sólo atienda a las urgencias y reclamos de la materia, de la biología, sino también a la satisfacción de otras exigencias de orden espiritual, como la educación, el esparcimiento, el seguro y la previsión. El concepto, entonces, que el proyecto tiene en cuenta para determinar lo que debe entenderse por salario mínimo vital comprende todo lo que razonablemente puede involucrarse como exigencia natural, razonable y justa del hombre que trabaja. El salario, en consecuencia, se estructura de modo y forma que la remuneración sea suficiente para que el trabajador y su familia puedan atender el cúmulo de exigencias impuestas por la vida en comunidad.

El proyecto de ley parte del núcleo familiar y contempla las exigencias y necesidades del mismo, atendiendo al trabajador y su familia, por lo que la estructura del salario mínimo vital se descompone en dos partes. Una, equivalente al 70 por ciento del importe que se fije, complementado por un 30 por ciento integrado por asignaciones familiares. Esa retribución mínima vital está revestida en el proyecto de garantías suficientes para no permitir que de modo alguno el hombre que trabaja pueda percibir las en forma retaceada; por ello, se le atribuye carácter de orden público, es decir, es irrenunciable, por lo que ni aun mediando consentimiento de parte será posible que el empleador abone un jornal inferior al que quede establecido en cada oportunidad por la vía que se señala en el propio proyecto.

Por el proyecto se crea un organismo con la denominación de Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil, cuya función esencial es la de determinar en forma periódica, y a medida que varíen en determinado grado los índices de

costo de vida, cuál debe ser para cada zona el salario vital mínimo. En dicho organismo tienen adecuada representación los sectores directamente interesados en la materia, es decir, los trabajadores y los empleadores, con la participación del representante del Estado, cuya intervención, por razones obvias, no puede ser desconocida.

Se establece un plazo mínimo de vigencia del salario que se fije por el consejo, pero que permite, ante toda variación en los índices de costo de vida que alcance a un 15 %, que las partes puedan solicitar su modificación antes del vencimiento.

Como dijéramos anteriormente, el proyecto de ley al estructurar la composición del salario fija un índice del 30 % a las asignaciones familiares, las que, de conformidad con las expresadas revisiones que se efectúan en el proyecto, han de jugar dentro del ámbito y con las modalidades y formas propias que lo conforman, de acuerdo con el régimen legal vigente. Al comprender la ley a todos los sectores de la actividad, con las excepciones que se señalan en el artículo 16, se incorpora también al régimen legal vigente el subsidio familiar a sectores que hasta este momento no gozaban de tal beneficio como los trabajadores rurales, expresamente incorporados por el artículo 12 de este proyecto.

Se excluye del régimen de la ley al personal de servicio doméstico e igualmente a los agentes de las administraciones provinciales, municipales, organismos descentralizados y autárquicos, provinciales y municipales. No obstante, y con relación a estos últimos, se impone al Poder Ejecutivo la gestión de procurar ante los gobiernos provinciales la sanción de normas concordantes a las de este proyecto en beneficio del personal mencionado. Las exclusiones obedecen a razones obvias. El personal de servicio doméstico, por las particularidades en que desenvuelve sus actividades, no ha podido ser abarcado por las disposiciones de esta ley, pero no se nos escapa la necesidad de contemplarlo a través de un régimen y de un sistema especial.

En cuanto a los agentes de las administraciones provinciales y municipales, queda perfectamente explicado por razones de orden institucional.

El proyecto, al sancionar el procedimiento, crea un órgano, el Consejo del Salario Vital, Mínimo y Móvil, que ha de estar encargado de determinar en cada oportunidad el cuántum del salario vital mínimo, no desconoce los mejores derechos que por vía de la convención colectiva o de otras normas legales pudieran beneficiar a los trabajadores, propende solamente a la fijación de un salario mínimo vital; en lo demás queda todo reservado a la convención colectiva, es decir, a lo que puedan acordar libremente las partes. Lo que quiere el proyecto es que de ningún modo la convención salarial pueda establecer mínimos inferiores a los que se determinen

como salario mínimo por la autoridad de aplicación. Ningún contrato colectivo ni individual de trabajo podrá en lo sucesivo fijar remuneraciones por jornada legal de trabajo inferior a las que quedan establecidas por la vía señalada en el proyecto.

En oportunidad del tratamiento en particular abundaremos en más detalles y procederemos a formular todas las aclaraciones que se nos soliciten a este respecto. Pero quisiera dejar perfectamente aclarado y en especial con relación al artículo 19, que este proyecto en nada altera las normas legales vigentes, por lo que no podrá interpretarse como derogatorio de derechos actualmente reconocidos a los trabajadores.

No obstante todos los antecedentes enumerados a través de la vida nacional, la Unión Cívica Radical del Pueblo tiene la profunda satisfacción de haber inmortalizado en la Constitución Argentina los derechos del trabajador, señalando en su artículo 14 bis la obligatoriedad de legislar para asegurar la vigencia del salario mínimo, vital y móvil.

En aquellas memorables jornadas nuestros legisladores señalaron con palabras proféticas las serias realidades que fundamentan la fijación de este precepto constitucional que para muchos era utópico y demagógico, pero que para la Unión Cívica Radical del Pueblo era un ideal profundamente comprometido desde el nacimiento de nuestra plataforma política declarada en Avellaneda en 1948.

Por eso no nos molestamos cuando algunos sectores de opinión dicen que estamos presionados por la CGT, mediante su plan de lucha. Sabemos desde lo más profundo de nuestra formación política que no le tememos a nadie en el país, ni nos dejamos intimidar ni presionar. Venimos de la dura lucha política en que se jugaron el honor, el patrimonio y la vida en aras de un ideal. A ningún radical, y menos a los legisladores, nos asustan las posturas de violencia o de presión. No entregamos la dignidad por detentar el poder.

Aquellos sectores de opinión que pretenden subalternizar esta ley, introduciendo el concepto de la presión al ideal de convicción partidaria, están terriblemente equivocados. Algunos andan con sus planes de la insurrección y la revancha. Nosotros queremos darle leyes al país para dignificarlo, para darle seguridad económica y paz social. Quien quiera transitar por ese camino está con la República y con nosotros.

Consideramos natural la preocupación obrera, aceptamos serenos la impaciencia, no nos ofuscamos por ese pretendido plan de lucha para imponer sin respetar a quienes juraron respetar y cumplir la Constitución. Nosotros estamos con el ejemplo de la dedicación y el trabajo, otros andan en el rumor, algunos en la amenaza, y muchos en lo estéril, deteniendo el ritmo de la Nación, cuando más hace falta la paz y el trabajo. Estamos seguros de que el auténtico

pueblo juzgará las acciones de ellos y las nuestras en el balance final de las realizaciones definitivas para la Argentina.

Venimos todos, radicales y otros partidos, no con recelo y genuflexia; estamos aquí porque deseamos ganar horas de paz para la República. La ley que os pido que aprobéis es fundamental para el pueblo. Lo hacemos dignamente y lo haremos cuantas veces sea necesario para consolidar la democracia, las instituciones y la soberanía nacional. Nada más. (*Aplausos*.)

Sr. Astudillo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Astudillo. — Termina el octavo mes de gobierno del presidente Illia y aquí estamos, con resignación filosófica, dando sanción definitiva a un proyecto de ley sobre precios y salarios, en cuyos efectos benéficos nadie cree en demasía.

Tres iniciativas de consideración parlamentaria —la modificación de los artículos 27 y 49 de la carta orgánica del Banco Central, la llamada ley de abastecimientos y esta última sobre precios y salarios— fueron lanzadas espectacularmente, asignándoles a las mismas una trascendencia social inusitada, una especie de cura milagrosa para todos los males que afligen al pueblo argentino. Pero el proceso de maduración legislativa sirvió en cada caso para demostrar con facilidad la inocuidad de las soluciones propuestas porque las mismas eludían sistemáticamente la raíz de los problemas suscitados, para, en cambio, atacar sin convergadura y sin eficacia los efectos perniciosos de la crisis de productividad que estamos padeciendo. Se ofrecía y se ofrece la panacea distributiva, pero por ninguna parte aparece la riqueza que pensamos distribuir.

Por economía de tiempo voy a eludir toda consideración sobre los aspectos históricos del problema que estamos abordando. Tampoco insistiré mayormente en la justicia que importa la asignación de salarios que sirvan para cumplir las necesidades materiales y espirituales del hombre de trabajo argentino para que pueda vivir en bienestar y decoro. Me tranquiliza la sensibilidad social que han puesto de manifiesto los señores senadores durante sus luchas políticas para eximirme de todo comentario sobre este aspecto de la cuestión. Centraré mi exposición abordando este singular proyecto de salario mínimo, vital y móvil promovido por los sectores legislativos del oficialismo, tratando de ubicarlo aquí y ahora, en la convulsionada Argentina del presente. Y digo singular proyecto de salario mínimo, vital y móvil, porque en mi concepto este salario no es ni mínimo, ni vital y de dudosa movilidad.

No es mínimo, porque si al mínimo propuesto le deducimos los importes correspondientes a las asignaciones familiares y a las quitas zonales y las que puedan provenir por la incorrecta interpretación del artículo 18, obtendre-

mos, sí, un nuevo mínimo, que es muy inferior al mínimo declamado.

No es vital, y esto es de fácil demostración. Basta con recordar los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Nutrición en ocasión de efectuarse la encuesta sobre el nivel de vida en 1960, a través de los servicios estadísticos oficiales, para admitir que ni aun con los 18.300 pesos peticionados por la central obrera se podrían satisfacer en plenitud los requerimientos alimentarios de una familia tipo.

Y pongo en duda la movilidad, porque estamos viviendo el auge de una política de precios que se perfila como intervencionista, mediante procedimientos como el control de precios o la fijación de precios máximos o la congelación de precios, que solamente tienen valores estadísticos, porque en la realidad nunca el hombre del común puede adquirir los artículos a los precios establecidos por decreto.

Y he dicho convulsionada Argentina del presente, porque es el clima de tensiones sociales provocado por el plan de lucha de la organización sindical, el que está delimitando el tiempo y la forma en que vamos a tratar este proyecto de ley.

De donde podemos deducir que esto no es la resultante de ninguna cláusula programática escrita en alguna plataforma electoral sino la búsqueda de elementos cristalizadores de la división de la Confederación General del Trabajo. O, considerado con muy buena voluntad, la búsqueda de un artículo para poder poner en la mesa de las negociaciones entre la Confederación General del Trabajo y el gobierno.

Y no se suponga en ningún instante que nosotros nos vamos a oponer, precisamente, a la búsqueda del medio que permita amenguar en alguna medida las tensiones sociales que vivimos, ni aun a este aumento de emergencia que ha sido calculado en un 10 % sobre los salarios actuales por el señor ministro de Economía, doctor Blanco.

Lo que nos importa es determinar con claridad si la incrementación de los salarios con el dispositivo de las fluctuaciones del costo de la vida constituye por sí un factor determinante del aumento del nivel de vida del trabajador.

¿Qué opinan los sectores interesados? En general existe una marcada discrepancia entre los sectores empresarios y los sectores obreros, sobre un aspecto circunstancial: el que hace a la oportunidad de la aplicación de esta técnica salarial. Los dirigentes laborales arguyen que un aumento de los salarios ha de traer consigo una reactivación económica por vía del mayor consumo, con lo que se vitalizará el mercado interno. Los empresarios en general entienden que el poder jurídico del Estado no lo habilita para cambiar la «naturaleza de las cosas» y, en consecuencia, mal se pueden exigir mayores salarios cuando no están dadas las condiciones económicas para ello. Pero, tras esta diferencia

circunstancial, hay una unidad de criterios entre empresarios y obreros, porque ambos sectores entienden que es necesario terminar con el estancamiento en el país.

Desarrollo, dice la Unión Industrial Argentina; cambio de estructura, parece más grato a los representantes laborales. Estas diferencias conceptuales que determinan distintas terminologías están dadas exclusivamente por enfrentamientos o colisiones internas, que juegan en el ámbito nacional. Pero hay un objetivo común que solamente se podrá obtener mediante la conjunción de empresarios y obreros: la subsistencia de la industria nacional. La clase trabajadora, que está integrada en la vida nacional y es partícipe de su destino histórico, orienta sus luchas en dos direcciones: una, tener los mayores beneficios dentro de las condiciones económicas vigentes, y la segunda, presionar por un cambio que le permita obtener una mayor participación en el producto. Por eso tiene que haber mucha claridad en el estudio del cuadro económico existente, porque es dicho cuadro el que determina las posibilidades de las reivindicaciones, que nunca pueden ir más allá de lo que las condiciones ofrecen, porque es necesario mantener y acrecentar el patrimonio común sobre el que se asienta el bienestar de la colectividad. Por eso es artificioso el enfrentamiento que se provoca entre empresarios y obreros tratando de marginar la responsabilidad del gobierno, cuando es precisamente la política del estancamiento la que perjudica a intereses comunes, dentro de las actuales condiciones de la evolución económica y social del país. Solamente en la transformación de estructuras, que desde el punto de vista económico puro se manifiesta a través de la integración de la actividad agropecuaria con una potente industria afirmada en un desarrollo de base, podrán encontrar los sectores obreros el medio y las posibilidades para una mayor participación en los beneficios. Pero las luchas de los sectores obreros tendrán vigencia si consiguen mantener y acrecentar la unidad gremial, y es por eso que hay una congruencia entre quienes desean frenar el desarrollo, con consignas de izquierda o de derecha, y al mismo tiempo tratan de socavar la unidad gremial. Es aquí, en las declaraciones y en las maniobras que se hacen para dividir el movimiento sindical, donde los sectores reaccionarios se exhiben al desnudo.

Pero volvamos a hurgar en las proposiciones de los interesados. El representante de Luz y Fuerza, señor Angeleri, en la reunión convocada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, dice: «Nosotros vemos que al existir más poder adquisitivo con los salarios, se tendría una verdadera reactivación, pues hay que tener en cuenta que quien recibe mayor salario es el hombre que invierte en bienes de consumo. Es decir que si a un trabajador le sobran mil pesos no los guarda sino que adquiere artículos

de alimentación y confort, pero los gasta, con lo que se promueve la reactivación. Así, entonces, es indiscutible que se hace mayor reactivación por los bienes de consumo al tener más dinero en circulación, mediante la incrementación de salarios, pues éstos de cualquier manera vuelven a la plaza.»

Deseo aclarar que estas manifestaciones de Angeleri no expresan su pensamiento cabal, pues él entiende que es necesario complementar el mayor salario con una reactivación industrial intensa. Esto es sólo un aspecto de sus declaraciones.

Queda allí expuesto un ciclo interesante y muy similar al que se exhibió y con el que se teorizó en este Honorable Senado en ocasión de la modificación de los artículos 27 y 49 de la carta orgánica del Banco Central.

Ahora bien: para que esto sea absolutamente cierto, es necesaria una determinada capacidad de producción, de modo tal que puedan ser permanentemente satisfechas las nuevas demandas. ¿Y qué ocurre cuando se rompe la relación producción-demanda, y la expansión se produce en una forma mucho menor que el crecimiento del circulante? Sobreviene la inflación. Nosotros hemos tenido una experiencia interesante; me refiero a la que vivimos durante el gobierno del presidente Perón, el que como ninguno satisfizo las demandas salariales de la clase trabajadora. ¿Qué ocurrió? Tuvo también su proceso inflacionario. ¿Cómo se produjo? No obstante el auge de la industria liviana, la que fue protegida mediante un fuerte intervencionismo de Estado y un apoyo crediticio generoso, el incremento de la productividad de esta industria no guardó la relación correspondiente con la demanda de los nuevos salarios, demanda que se vio acentuada, por otra parte, por la incorporación masiva al conglomerado industrial y urbano y, además, por la creciente participación de la mujer en la vida laboral. La demanda, entonces, superó a la producción y nos encontramos con un proceso inflacionario.

También en aquella oportunidad se recurrió a remedios ineficaces; primero, la campaña de los 60 días y luego la ley de agio y la especulación, con cláusulas represivas severísimas.

Conviene advertir que este proceso de expansión se inició en condiciones bastante favorables. La acumulación de reservas cuantiosas durante la guerra (los 1.600 millones de dólares que hemos oído mencionar tanto) y las condiciones propicias del mercado internacional, que nos mostraban una Europa occidental deteriorada en su economía y ávida de nuestros alimentos. Pero durante la gestión gubernativa, por vía de los aumentos salariales se produjo una elevación del standard de vida de la población, y esto trajo consigo un mayor consumo, que influyó directamente en las posibilidades de la exportación, pues disminuyeron ostensiblemente los saldos exportables.

Por otra parte, la industria liviana se encontró a poco andar con la escasez y encarecimiento de la materia prima importada. Vivimos así un proceso de estrangulamiento, pues a las condiciones desfavorables que se iban presentando se sumaban las insuficiencias de una industria de base que eran cada día más notorias. Industria de base que se llama energía, acero, petróleo, petroquímica, caminos y transportes.

Recuerdo que quienes militábamos en la Unión Cívica Radical, en aquel entonces criticábamos la prioridad que se había establecido favoreciendo a la industria liviana en desmedro de lo que conceptuábamos como los factores básicos de la economía nacional. Pero con el tiempo he aprendido que no siempre los estadistas pueden impulsar una economía perfectamente planificada, aunque la compartan.

El mejor nivel de vida, las reivindicaciones sociales que se cumplieron después de tantas postergaciones, sirvieron al peronismo para obtener un crédito de confianza que le sirvió para que la clase trabajadora, posteriormente, no pusiera en duda las intenciones o las finalidades que llevaba el peronismo cuando éste cambió algunas de sus modalidades en la acción realizadora, para salir del estancamiento.

No quiero profundizar sobre los aspectos que mostraba el peronismo en sus últimos tiempos, pero voy a señalar, a modo de referencia para que se comprenda el análisis, los publicitados programas de productividad y la petición de colaboración de los organismos financieros internacionales para activar la producción petrolera.

Si partiendo de condiciones tan favorables no pudieron evitarse los efectos perniciosos de la inflación, ¿cuáles son los fundamentos para que nosotros, en este momento, estemos tan conformes?

El cuadro económico está conformado en la actualidad: primero, por la recesión industrial y la restricción del crédito; segundo, por la utilización de los nuevos y cuantiosos medios de pago, creados para neutralizar los crecientes déficit de la administración central y de las empresas del Estado, alentando los gastos improductivos; tercero, la paralización o retraimiento de los planes puestos en marcha para terminar con nuestra insuficiencia de infraestructura, y cuarto, la ruptura o aislamiento con los círculos financieros internacionales.

Estos aspectos configuran, independientemente o relacionados, el clima deficitario, el lamentable clima de paro en que vive la economía argentina. Pero más lamentable aún que el paro mismo son las declaraciones o los hechos de quienes quieren mantener esta situación de parálisis general.

En la sesión del miércoles pasado el señor senador Gadano, refiriéndose a la minuta de comunicación que elevamos al Poder Ejecutivo, con respecto al cumplimiento de la ley de abastecimientos, sostuvo que era el gobierno el único

que no había participado en el crecimiento del costo de vida, puesto que los servicios que presta no habían sufrido aumentos. Confieso que me extrañó sobremanera esta argumentación por parte del señor Gadano, de quien hemos escuchado lúcidas exposiciones sobre el tema económico. Yo había leído declaraciones públicas y comentarios periodísticos que esgrimían una argumentación similar, pero se me ocurría que era una cosa poco seria. Hasta me parecía un artículo de barricada. Pero como se lo ha traído aquí, entiendo que se trata de un error de concepto y entonces estamos obligados a demostrar el equívoco.

Lo que ocurre con los servicios del Estado es que tienen una tarifa política y otra real; la que no ha variado es la tarifa política. Esto puede ser así porque se compensan los déficit mediante el aporte de los dineros del Estado, que se vuelcan a través de un emisionismo incontrolado.

Las diferencias entre las tarifas reales y las políticas alguien las paga; y las paga, evidentemente, el pueblo en su conjunto.

Hay una ecuación económica —que tiene la rigurosidad de las matemáticas— que establece una relación directa entre el monto del circulante y la velocidad de circulación, con el producto y el costo de los artículos. Si varía uno de los términos de esta ecuación, en nuestro caso el monto del circulante, para que se mantenga la igualdad, es necesario que también se altere el otro término, y como el producto —en este caso son los servicios que se prestan— es el mismo, es lógico que la variación se produzca en los precios.

Sr. Gadano. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Astudillo. — Con mucho gusto.

Sr. Gadano. — El señor senador parte del supuesto de que en todos los casos las empresas que prestan esos servicios públicos son deficitarias. Yo le puedo citar el caso de Gas del Estado y de SEGBA en su etapa actual y también de YPF, que no tienen déficit y que, en consecuencia, contribuyen por esa vía directa a mantener los costos naturales de los artículos y evitar precios distorsionados. Eso es exactamente lo que yo manifesté, pero no desconozco la posibilidad de que existan precios políticos, que han sido mantenidos en todos los gobiernos porque tienen un sentido económico-social perfectamente establecido. Yo entiendo, señor senador, que usted ha dado a mis palabras un sentido absolutamente distinto del que verdaderamente tenían.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Astudillo.

Sr. Astudillo. — Vamos a analizar algunos casos. Tomemos en primer lugar los ferrocarriles. Evidentemente, mantener las actuales tarifas de los ferrocarriles constituye una fuente notable de aumento del costo de la vida porque ahí se

está inyectando dinero sin que exista un consecuente aumento de servicios.

Sr. Gadano. — ¿Me permite una última interrupción el señor senador, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Presidente. — Si la consiente el señor senador Astudillo...

Sr. Astudillo. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gadano.

Sr. Gadano. — Pero en el caso de los ferrocarriles puede existir una razón mayor porque hay servicios que se deben prestar aunque sean deficitarios, lo que es una cosa absolutamente distinta. Por otra parte, hemos recibido una estructura que nosotros no hemos creado, correspondiendo señalar además que los ferrocarriles, en principio, son deficitarios en todas partes del mundo.

Sr. Astudillo. — De acuerdo.

Sr. Gadano. — Nosotros no podemos terminar con el déficit ferroviario provocando una desocupación masiva o dejando de prestar servicios a zonas en donde las cargas no son suficientes para compensar el costo del tráfico, precisamente porque actuamos con un sentido político y de gobierno que nos dice que es útil y necesario seguir prestando ese servicio.

Sr. Astudillo. — Yo no discuto ese último aspecto, que podría ser tema de otra discusión. Sostengo que no se puede afirmar que por el mero hecho de que no se aumenten las tarifas no se esté introduciendo modificaciones al costo de la vida.

Sr. Gadano. — Pero es una contribución directa y efectiva, señor senador.

Sr. Astudillo. — Por otra parte, y refiriéndome también al aspecto de los ferrocarriles, quiero señalar que ese aporte sería efectivo en el supuesto de que la prestación de los servicios fuera eficiente, es decir, que hubiese un déficit natural y no un déficit completamente artificioso.

Sr. Gadano. — ¿Atribuye a este gobierno esa diferencia o cree usted que en un período de siete meses se puede cambiar una estructura ferroviaria? Eso sí no es serio.

Sr. Astudillo. — Yo no le atribuyo a este gobierno absolutamente nada. Lo único que quiero señalar —y vuelvo a insistir en el tema— es que no se puede seguir afirmando que por el mero hecho de no haber aumentado las tarifas el gobierno no ha contribuido al acrecentamiento del costo de la vida.

Sr. Gadano. — Ese es un punto de vista. A ningún término se le puede dar un concepto absoluto. Yo no podría negar un hecho de ese tipo, pero el señor senador le asigna una extensión que no tiene. Muchas gracias.

Sr. Astudillo. — En el caso de SEGBA se ha hecho mucho ruido, pero lo cierto es que el ministro Blanco se ha comprometido a que si la empresa produce déficit el Estado va a contribuir, y entonces hay que esperar los resultados. Yo no soy pesimista ni optimista, pero he visto

tantas contradicciones que es posible que el día de mañana también haya déficit en SEGBA. De todo esto colijo que el gran responsable del encarecimiento del costo de la vida es precisamente el gobierno, que en el término de ocho meses ha hecho una emisión del orden de los 40.000 millones de pesos sin que la misma haya tenido mayores efectos benéficos en lo que respecta a la producción.

Sr. Acuña (R. E.). — ¿De dónde sacó ese dato, señor senador?

Sr. Astudillo. — De los organismos oficiales.

Sr. Acuña. — ¿De cuáles, señor senador?

Sr. Astudillo. — Del Banco Central. La cifra es de 38.200 millones de pesos, aproximadamente.

Sr. Acuña (R. E.). — Muchas gracias, señor senador.

Sr. Astudillo. — Hay algunas experiencias, y voy a referirme al caso nuestro porque no he traído mayores estadísticas para demostrar este aserto.

En 1959, durante el gobierno de Frondizi, no hubo incremento de la producción y sí una notable expansión del circulante por un monto equivalente al 60 por ciento: algo así como 30.000 millones de pesos; y se produjo un aumento en el costo de la vida superior al 110 por ciento. En los años 1960 y 1961, en que hay sí un incremento notorio en el producto bruto que llega en los dos años en conjunto a algo más del 15 por ciento, se produce al mismo tiempo una disminución de la inyección de circulante, hasta el punto de que en los dos años apenas se superan un poco los 30.000 millones que se habían puesto en circulación en el año 1959. Hay una evidente disminución de la espiral del costo de la vida, llegando en los dos años apenas a un 40 por ciento.

Sr. López. — ¿Y los bonos «9 de Julio», con los cuales se pagó a la gente? Con eso solo le robaron un 30 por ciento.

Sr. Presidente. — Ruego a los señores senadores que soliciten las interrupciones para guardar orden en el debate y para que el orador pueda continuar normalmente su exposición.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Astudillo.

Sr. Astudillo. — Estamos hablando del circulante y no de la creación de medios de pago, que es muy distinto.

Si vamos a considerar la creación de medios de pago por el actual gobierno, diré que no tengo las estadísticas a mano, pero puedo afirmar que para febrero de este año ya había una creación bruta de medios de pago del orden de los 61.000 millones de pesos. Una política atinada no consiste en mantener las tarifas políticas sino en reducir los costos, en racionalizar los servicios y acrecentarlos, siempre que esto se haga con un criterio económico y armónico. Esto sí que se podría exhibir con orgullo. Pero mientras a los dineros del Estado se los vuelque para

cubrir los déficit presupuestarios y los que arrojan los organismos descentralizados y se los utilice para expandir la burocracia, mantendremos con toda seguridad la espiral inflacionaria en el país.

Nosotros hemos contribuido a que se siga esta política mediante el voto positivo a la modificación de los artículos 27 y 49. El artículo 49 de la carta orgánica del Banco Central le ha permitido al gobierno destinar para estos déficit los dineros públicos que se congelan en los bancos. Confieso que hemos sido defraudados, porque en aquella oportunidad se habló de una reactivación industrial intensa, por una parte, y por la otra se afirmó que iban a utilizarse los recursos en forma muy moderada. Y puedo declarar a esta altura de los acontecimientos que prácticamente quedan muy pocas posibilidades de seguir utilizando las facultades conferidas por el artículo 49, por lo que el gobierno deberá recurrir a nuevos artificios.

También se hizo en la sesión del día miércoles de esta semana un cálido elogio a la decisión del gobierno de pagar durante el corriente año las deudas que tiene el Estado, cumpliendo estrictamente los plazos. Esta es una novedad que trajo el ministro Blanco después de su viaje a Ginebra y de la gira por Europa. Yo desearía que consideráramos la importancia de esta decisión. En general, una política de expansión o de crecimiento debe basarse en el crédito. Naturalmente, es preferible el crédito interno porque el ciclo económico se complementa en el país y no hay posibilidad de evasión. Pero cuando no se puede obtener crédito interno es necesario recurrir a los organismos financieros internacionales, y por ello no consideramos desdorado o inconveniente ni la petición de un crédito ni la refinanciación de una deuda.

Por eso nos parece que esta decisión del gobierno, en el supuesto de que sea unilateral de nuestra parte, la vamos a pagar muy caro.

En efecto, ¿cómo hará el gobierno para cumplir con el compromiso contraído? El gobierno tiene que recurrir al mercado para adquirir los dólares, y para que esos dólares estén en el mercado en la cantidad suficiente, de modo tal que no se produzca una presión que eleve los precios, será menester provocar un desequilibrio marcado en la balanza comercial: exportar más e importar mucho menos. Y como el 85 por ciento de nuestras exportaciones lo constituyen los productos agropecuarios y esencialmente alimentos, para poder exportar más tendremos que obligar a nuestro pueblo a reducir el consumo. Pero para importar menos, que es el otro aspecto de la cuestión, debemos tener en cuenta que la importación está constituida esencialmente por materias primas necesarias para nuestra industria y en la medida en que se mantenga la política de restricción de las importaciones, la industria ha de sufrir una hecatombe total: de la recesión iremos sin lugar a dudas a la falen-

cia. Por otra parte, la adquisición de dólares significa la inyección de circulante en el mercado. Por cada dólar que compra el gobierno, necesita pagar 136 pesos en moneda nacional, de acuerdo con los precios actuales. La deuda que tendríamos que pagar según algunas declaraciones asciende a 450 ó 500 millones de dólares —pero otras versiones aseguran refinanciaciones hechas con anterioridad que la disminuirían a 200 millones de dólares—. Calculando lo que ha de costar al gobierno la adquisición de estos dólares, habrá que inyectar en el mercado 27 mil millones de pesos, que irán a engrosar el circulante, para pagar exclusivamente deudas que, por cierto, no van a producir más y sí a influir decisivamente en el costo de la vida. El elogio a esta disposición del gobierno está en la línea de quienes pregonan en este momento un aislamiento de los medios financieros internacionales, sosteniendo que este aislamiento es una forma de antiimperialismo. Nosotros sostenemos que se trata de un antiimperialismo formalista y vacío. Y ello ha quedado virtualmente comprobado por la contratación de un empréstito para la adquisición de armamentos, según la denuncia formulada en la Cámara de Diputados y que ha sido silenciada por la derecha e izquierda del país. Estamos de acuerdo con la modernización de nuestros ejércitos, pero no comprendemos por qué, si se pueden conseguir créditos para la compra de armamentos, se denostan con tal virulencia los créditos que pueden servir para el desarrollo.

Sr. Martínez Saravia. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Astudillo. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez Saravia.

Sr. Martínez Saravia. — Creo que el señor senador hizo referencia a algunas palabras que pronuncié en la sesión anterior respecto al enunciado del ministro de Economía sobre el pago de deudas al exterior. Esto es un enfoque que se da a la economía. No es una línea ortodoxa de rechazar el crédito internacional. Cualquiera de los señores senadores aquí presentes que haya actuado en la vida económica del país puede comprender fácilmente cómo cuando van a una institución bancaria a pagar en término, al vencimiento, los créditos quedan abiertos y se restablece la confianza en la firma.

A diferencia de otras oportunidades en que el país nunca encontraba los medios de pago en tiempo para poder encarar con altura y con dignidad el cumplimiento de sus compromisos, ahora que la balanza comercial del país en el primer cuatrimestre ha dado un saldo positivo de 207 millones de dólares, creo que lo que cabe para conservar el crédito y el prestigio de la República es pagar sus compromisos. Esto no significa en manera alguna que se contraiga el compromiso de no pedir el crédito necesario si es indispensable para reactivar la economía.

Con esto quiero dejar aclarado el alcance de mis palabras y destacar también cuál es la política que en materia de créditos sigue el actual gobierno.

Sr. Astudillo. — Dentro del concepto empresario, la renovación de los créditos es una operación común. Lo que no entiendo es que, si se ha podido refinanciar la deuda, por qué precisamente no lo hemos hecho, perdiendo un tiempo precioso que luego trataremos de ganar mediante nuevos requerimientos de crédito. Esta pérdida preciosa de tiempo va a tener el significado que acabo de expresar: por un lado, un aumento impresionante del circulante, por el otro, la disminución del consumo.

Sr. Martínez Saravia. — Pero hemos logrado el restablecimiento de la confianza, señor senador.

Sr. Astudillo. — Si se podía refinanciar, indudablemente no había pérdida de confianza. Hay que hablar con absoluta claridad. Si no se podían refinanciar las deudas, se debió haber dicho al país que por pérdida de la confianza no se refinanciaba.

—Hablan simultáneamente varios señores senadores.

Sr. Presidente. — Señores senadores; ruego que soliciten las interrupciones.

Sr. Gamond. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente. — El señor senador Astudillo le concede la interrupción.

Sr. Gamond. — Está equivocada la apreciación del señor senador, porque el crédito financiero del país ha de quedar demostrado en las nuevas operaciones que habrán de concertarse, en mejores condiciones que si se hubiera hecho la refinanciación.

Sr. Astudillo. — Yo espero que así sea, señor senador.

Sr. Gamond. — Ya lo va a ver el señor senador.

Sr. Corradi. — ¿Me permite una interrupción el señor senador?

Sr. Presidente. — El señor senador Astudillo le concede la interrupción.

Sr. Corradi. — Yo entiendo, señor presidente, que los mecanismos crediticios de la banca internacional no son exactamente los mismos que los de la banca nacional, como el crédito de entre casa. Voy a dar mi interpretación de por qué se pagaron esas deudas. Coincidió en que fue para recuperar la confianza, pero se ha usado eso porque no se ha tenido otra cosa que mostrar para captar precisamente esa confianza. Mucho más importante que pagar esos créditos en término, era refinanciarlos con vista a un plan de desarrollo.

Nada más.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Astudillo.

Sr. Astudillo. — Yo creo que el actual gobierno es el que ha perdido la confianza de la banca internacional. Y creo que el señor ministro...

Sr. Gamond. — ¿Me perdona, señor senador, una sola interrupción más?

La equivocación en su manifestación está en el tiempo. La confianza la había perdido el gobierno anterior, desde que el señor Alsogaray actuaba, porque nunca llevaba planes a la banca internacional. El decía que no concebía los planes porque ello era contrario a la libre empresa, y por eso el país había llegado a donde llegó. La Nación va a tener mucho más crédito ahora porque las nuevas operaciones se realizarán sobre la base de planes concretos para el desarrollo del país. Esta es la razón por la que ha habido que pagar, señor senador.

Perdóneme la interrupción, y se la agradezco.

Sr. Astudillo. — Yo tengo mis dudas sobre la posibilidad de los planeamientos de desarrollo que han sido anunciados y que serán presentados a la banca internacional. Y las tengo, porque los planes de largo aliento, estructurales, tienen una relación directa con los objetivos coyunturales de la economía. ¿Qué es lo que ha pasado, desde el 12 de octubre hasta la fecha? ¿Se han mejorado las condiciones para hacer un planeamiento de la economía argentina? ¿Se mantienen o se ha deteriorado la economía? En mi concepto, las medidas de tipo coyuntural que se han adoptado no han favorecido el clima para lanzar en el día de mañana, como se pretende, un plan que ha de tener tanta trascendencia como para modificar las estructuras económicas del país.

Esto, de todos modos, es una interpretación. Creo que a esta altura de las circunstancias estamos en peores condiciones que el 12 de octubre para lanzar un plan que tienda a modificar sustancialmente la economía.

Sr. Gamond. — El 12 de octubre no se podía hacer un plan porque ni siquiera había una contabilidad en regla; estaba atrasada nueve meses y no se podía saber cuál era la deuda pública y privada, en una palabra, la situación real de la Nación. Esta era la realidad en que vivía el país: en el caos económico y social.

Sr. Astudillo. — En una oportunidad anterior, el señor senador hizo una relación del caos financiero en que vivía el país y dijo que se había llegado hasta no cobrar los impuestos. Cuando el señor senador hizo esa afirmación, pensé que íbamos a tener en el país, a partir de la gestión del presidente Illia, una Dirección Impositiva que iba a exhibir un aumento impresionante de los ingresos fiscales con respecto a ejercicios anteriores.

Confieso que a esta altura de la gestión impositiva, los aumentos son decepcionantes, con el agravante de que el valor actual de la moneda es muy inferior al del año pasado.

Sr. Gamond. — ¡Son tan relativos que de 50 se han ido a 600 millones!

Sr. Fassi. — Solicito, señor presidente, que el orador vuelva...

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Astudillo.

Sr. Fassi. — Sería interesante volver al tema del debate, señor presidente; estamos tratando la ley de salario mínimo, vital y móvil.

Sr. Presidente. — Le doy traslado de su inquietud al señor senador.

Sr. Astudillo. — En ningún momento me he apartado del tema, porque entiendo que existe una interdependencia clara y terminante entre los aspectos sociales y los económicos, es decir entre el salario, en este caso, y la economía, con las posibilidades que ofrece para hacer efectivos los salarios. Tanto es así que voy a afirmar que las normas jurídicas, aunque sean muy correctas, como ésta del salario vital que se propone, son muy interesantes, pero en ningún momento determinan una evolución en los beneficios en favor de los obreros.

Tras cada cuestión social existe un problema económico, y en la medida en que no resolvamos éste, subsistirá aquélla.

Por eso invito a los señores senadores a reflexionar sobre los problemas que tiene el país, a fin de que eliminen falsos prejuicios y conceptos perimidos, para encontrar así la exacta dimensión de los problemas que estamos padeciendo, y con sentido y criterio realista abocarse a sus soluciones.

Ni la emisión ni el crédito son beneficiosos o perjudiciales. Resultan simples instrumentos y su utilidad o ineficacia estará dada por el uso o aplicación que se les dé. Si la emisión y el crédito internacional lo utilizamos para reactivar la industria, para tecnificar y modernizar la actividad agropecuaria, y fundamentalmente para promover el desarrollo de base, estaremos en la buena senda, en el camino de la liberación nacional.

Por ello es que hemos dado una importancia decisiva a las modificaciones que solicitamos se introduzcan en el dictamen de la mayoría, y que se refieren exclusivamente a un plan de emergencia que creemos que es necesario aplicar contemporáneamente con el salario vital, mínimo y móvil. Con este plan, que queremos sustituya el artículo 25 del proyecto en consideración, se suspenderá la aplicación del artículo 49 de la ley orgánica del Banco Central, debiendo en lo sucesivo abstenerse el gobierno de colocar títulos nacionales en el mercado en todo el país. Se crea el fondo especial para la reactivación económica, que funcionaría en el Banco Industrial, administrado por éste, y movilizándolo mediante la disminución correspondiente a las exigencias de efectivo mínimo la suma de 20 mil millones de pesos, que sería el aporte inicial para el fondo.

Este fondo especial para la reactivación económica permitiría aplicar un estricto criterio selectivo en los créditos a otorgar, tendiendo a

poner en marcha las empresas paralizadas y exigiendo como condición inexcusable la rehabilitación de técnicos y obreros despedidos.

Por otra parte, es imperioso declarar de primordial interés, a los efectos de toda acción crediticia, la industria de la construcción en todas sus manifestaciones, y proponemos para ello la aplicación de un gravamen del cinco por ciento a la producción agropecuaria. Todo el producto de ese gravamen ingresaría íntegramente al fondo para la tecnificación y mecanización del campo. En la medida en que se complemente esta ley de carácter social con una reactivación económica general estará garantizado el éxito de la misma; de lo contrario el hombre de nuestro pueblo sufrirá una nueva frustración.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Cantoni. — Voy a adherir, en nombre de mi bloque, al proyecto que se debate, con las reservas que en la discusión en particular pueda formular, no para limitar los objetivos justicieros de la iniciativa, sino, por el contrario, para contribuir, si es posible, a su perfeccionamiento.

Mi apoyo al proyecto, que suscribo en general, se fundamenta en las mismas motivaciones que impulsaron a mi partido, la Unión Cívica Radical Bloquista, hace 36 años, para clavar el hito inicial en la lucha por el derecho de los trabajadores. Con emoción, como continuador de aquellos precursores de la justicia social, que fueron los fundadores del bloquismo, ratifico con mi adhesión a la institución del salario mínimo, vital y móvil, que seguimos siendo fieles a aquel espíritu revolucionario que por medio de la ley hizo realidad los anhelos reivindicativos de los obreros de San Juan, de los trabajadores de la ciudad y de los rurales, hasta en el último rincón de la provincia.

La Constitución de 1927, que la incompreensión y el egoísmo trató de disminuir con su pretendida tachadura de «Constitución de los bloquistas», recibió los vituperios más violentos de cuantos se resistían a aceptar que los de abajo, los olvidados, los que ponen su energía muscular al servicio de la comunidad, tienen que vivir también con dignidad. El bloquismo, al establecer el salario mínimo en la misma Constitución provincial, a los efectos —como lo consigna su texto— de que los trabajadores tuvieran garantizada la base indispensable de su existencia y subsistencia como seres humanos, tanto para ellos como para su familia, había incorporado, por primera vez en la República y adelantándose, inclusive, a muchos países del mundo, el derecho del trabajo en la ley fundamental del Estado.

Ese hecho, a fuer de visionario, y cuyo sentido histórico, trascendente en el proceso civilizatorio que nos lleva al imperio de la justicia social, que en su hora llegó a tener repercusión inter-

nacional por cuanto desde distintos gobiernos extranjeros llegaban los pedidos de información para sumar la Constitución sanjuanina a los antecedentes que sirvieran para la solución de sus respectivos problemas en el orden económico-laboral, tuvo sus enconados adversarios. Contra el salario incluido como derecho básico en nuestras instituciones locales se lanzó toda una serie de intereses —intereses políticos y de ciertos grupos económicamente fuertes—, que si no calificaron a aquel gobierno de «subversivo» fue porque la palabra indudablemente no estaba de moda. Pero fue acusado de todo. Aquel derecho, hoy reconocido por el progreso social, casi sagrado, por cuyo ejercicio con justicia se ha pronunciado la mas alta expresión de la cristiandad, que es la voz de los papas, era presentado entonces como el prolegómeno del caos, como la chispa de hecatombes imprevisibles.

Y ahí está nuestra Constitución de San Juan, tal como fue concebida por la sed renovadora de una generación que no tuvo miedo de ponerse a la altura de los tiempos, agregando al derecho del hombre a vivir en libertad el derecho a vivir en justicia y en dignidad. Desde la vigencia de ese cartabón institucional nadie sufrió perjuicios por sus normas. Ninguna empresa económica se arruinó y ninguna estructura se vio lesionada porque los obreros de San Juan desde entonces no fuesen parias ni trabajaran de sol a sol, como quizás lo pretendían las voces reaccionarias que se alzaron contra esa Constitución, que fue modelo y que la República pudo exhibir después con orgullo, aquietadas las pasiones que se habían movido en contra de ella.

Si en esos años, en que todavía se hallaba en cimiento la conciencia social, que se afirma, y con fuerza ya incontenible, en las dos últimas décadas, fue posible instituir, y dentro de la ley fundamental, el derecho a un salario remunerativo; si en esos años, difíciles por cierto, en que había que tener verdadero coraje cívico para romper anacronismos y terminar con injusticias que ciertos sectores se empeñaban en mantener; en que todavía no se agitaba una masa suficientemente esclarecida —aunque presentía su liberación— a la que gobernantes con sentido popular y fieles a su mandato emanado de esas mismas masas a las que habían prometido mejorar, debían proteger; si en esos años, insisto, fue realizada y cumplida una legislación social avanzada para los intereses creados solamente, pero necesaria en todo sentido para resguardar el esfuerzo creador de los trabajadores, con cuánta más razón se impone ahora consolidar el desarrollo argentino —que tanta falta hace— comenzando por llevar a los sectores más castigados por la carestía el estímulo de que carecen, para que contribuyan mejor a la expansión que se busca y a la urgencia de una mayor productividad.

Como siempre ha ocurrido, cada vez que se quiere dar un paso adelante a tono con una hu-

manidad que avanza, que no se detiene, a tono —y esto es lo más importante— con un mundo que puja en muchas partes con dramatismo, en otras con explosiones violentas y con regueros de sangre, por una equitativa distribución de la riqueza, por un real poder adquisitivo para los pueblos y contra el hambre y la miseria, surgen los que andan de contramano con la historia e insisten en que las cosas queden como están, aferrándose a sistemas y a filosofías perimidas. Anteponen el dogma a la realidad y ensayan declamatorias posturas sin ofrecer ninguna solución concreta. Como les ocurrió a los precursores sanjuaninos que soportaron los peores dictérios y a los que el tiempo confirmó su verdad, ocurre en nuestros días y se repiten las inculpaciones, las recriminaciones, y a lo que se debe hacer se opone lo que no se debe hacer.

Acabo de llegar del exterior, de los Estados Unidos, con el optimismo que me ha infundido el gran concepto que se tiene allí de nuestra patria y de las inmensas posibilidades que se nos abren para el futuro. Me quedé algunos días más que los colegas que viajaron a ese país y tuve oportunidad de ampliar las observaciones recogidas y mantener nuevas conversaciones con personalidades de distintos sectores ciudadanos de la Unión. Las miradas están puestas en nosotros como en ninguna otra parte del continente, por la reserva que significa la Argentina para la causa de la democracia. Y dentro de la convivencia respetuosa que signa las relaciones entre países soberanos, traigo la seguridad de que existe intención cierta y sincera de hacer inversiones aquí con halagüeñas perspectivas para ambas partes. Las crisis argentinas son vistas como manifestación de una coyuntura que tarde o temprano encarrilará las cosas por la vía de una normalidad completa, porque no puede ser de otra manera, dado el potencial humano y la inventiva de los argentinos. Son palabras éstas de autorizados y competentes conocedores de los problemas americanos.

Por eso, la mejor manera de disminuir las tensiones sociales es legislar con justicia, y la justicia debemos comenzar por dársela a los más abandonados a su suerte, a los que tienen como único capital sus brazos para levantar a la República. No creo en los agoreros que hablan de apocalipsis inflacionarios, de quiebras de empresas, de caos social. El caos vendrá si nos quedamos de brazos cruzados, esperando que los problemas sean arreglados por el almanaque. Es claro que esta legislación salarial debe ser seguida por un vasto plan que ponga en movimiento otros campos de la actividad nacional, atendiendo a las exigencias de los sectores agropecuarios y de nuestras empresas industriales. Una planificación en que no se coarte, por supuesto, la libre iniciativa, y en la que participen empresarios, trabajadores y el gobierno, es de una perentoria necesidad en este instante.

Con humildad, desde mi banca, contribuiré para que por conducto del Senado, el Parlamento coparticipe en la forja de la paz social, exhortando al gobierno, a los representantes de los grupos económicos y a los dirigentes gremiales para que busquen armonizar sus puntos de vista, y den con la solución patriótica que el país reclama. Que en este debate, con la sanción del proyecto de salario mínimo vital y móvil, honremos al prestigio del Congreso dando una ley que pidan con angustia los trabajadores organizados.

Nada más.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador De Rege.

Sr. De Rege.— En esta grave contingencia económica, en la que el alza del costo de la vida diariamente va devorando la empobrecida economía de los trabajadores, encaramos el debate previo a la sanción de un nuevo instrumento económico.

Socialmente justo, el salario mínimo vital y móvil constituye una nueva pieza y un orden estructural que se viene abriendo paso y que la doctrina social cristiana ha impulsado y explicitado. Por eso las grandes medidas económicas que la democracia cristiana ha apoyado en este recinto —reforma de la carta orgánica del Banco Central, ley de abastecimiento, y represión de monopolios—, las consideramos necesarias para poner los bienes de la comunidad al servicio de todos los que la integran y la nutren con su esfuerzo y no de círculos privilegiados que parasitan con el trabajo de los demás.

Pero estas medidas para nosotros no son aisladas, no son correctoras de deficiencias circunstanciales del sistema vigente. El régimen liberal, capitalista y libreempresista ha fracasado totalmente y no hay correctivo que lo salve. Debe ser sustituido por un nuevo ordenamiento que ponga los bienes al servicio del hombre y de su realización y trascendencia. Si esto no se comprende, inútil será ésta y cualquier otra medida que se tome.

Criticamos un sistema que posibilita a algunos hombres beneficiarse con la propiedad de los bienes y el producto que de ellos deriva a expensas de otros. Y para que no haya equívocos, señalamos que tampoco tienen razón los que plantean la situación en términos de lucha de clases, como lo hacen los marxistas, y discuten a los empresarios la mera posesión de los bienes en un esquema simplista y materialista.

Nuestro planteo cala más hondo; está directamente vinculado al destino del hombre, a su trascendencia y realización. Esa es la finalidad para la cual el Creador ha colocado los bienes en este mundo, y un orden será justo o injusto en la medida en que cumpla coherentemente con los fines que le han sido dados.

Dentro de este esquema existe una serie de medidas de orden económico necesarias para adecuar los bienes a sus funciones, o sea hacer

que posibiliten la realización y trascendencia del hombre argentino de 1964. Pero estas medidas configuran un todo y no pueden ser tomadas alternativamente, según la presión de turno. Esto es necesario tenerlo muy en cuenta. Cuando se trató la reforma de la carta orgánica del Banco Central, reclamamos y obtuvimos la presentación por parte del Ejecutivo de un plan corto de coyuntura que se insertó en las páginas 231 y 232 del Diario de Sesiones correspondiente a este honorable cuerpo durante el período extraordinario de 1963. Allí señalamos diversas fallas. Un control sobre el régimen de cambios, que, de alguna manera, se ha establecido, y el contralor de la política bancaria, a fin de dirigir el crédito y utilizarlo como instrumento de la promoción de la economía argentina. Esto último, entendemos, no se ha hecho en la medida necesaria...

Sr. Gadano.— Pero se ha hecho, señor senador.

Sr. De Rege.— En forma muy limitada.

Sr. Gadano.— En forma amplia, a través del Banco Central.

Sr. De Rege.— Creemos que no.

Sr. Presidente.— Ruego a los señores senadores solicitar las interrupciones.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador De Rege.

Sr. De Rege.— Pero es interesante destacar que en ese plan corto o de coyuntura se estableció el compromiso del Ejecutivo de utilizar todos los recursos económicos que en ese momento se le brindaban, para lograr una óptima utilización de la capacidad ociosa —palabras textuales de ese plan—. Lamentablemente, nos encontramos a seis meses de esa oportunidad y las fábricas del país siguen paradas en gran medida, y existe gran desocupación todavía. Los precios siguieron aumentando con una demanda cada vez más restringida. El Ejecutivo, pese a contar con diversos recursos que la ley de ministerios concedía a la Secretaría de Comercio para el control del abastecimiento, reclamó la ley «A» y, posteriormente, la de represión de los monopolios.

En ocasión de tratarse la ley de abastecimiento apoyamos un régimen que castigaba y reprimía la especulación, pero señalamos que no era esto sólo lo que había que hacer, no era allí donde habría de encontrarse la fórmula mágica que produjese el descenso de los precios de los artículos de primera necesidad. Analizamos las deficiencias y las incorrecciones del proceso de abastecimiento, que sufría distorsiones que gravitaban decisivamente en el nivel de precios y destacamos la importancia de uno de los incisos, el m), del artículo 3º, que tiene por objeto la tarea de planificar la creación de una red de mercados centrales de concentración y distribución.

Es que frente a los problemas, señor presidente, se puede seguir el camino fácil de dar respuesta a circunstanciales requerimientos, o se

puede llevar a cabo una acción más larga y constructiva, pero mucho más real que es la de encarar el fondo de los mismos. Nosotros entendemos que se ha seguido el camino fácil y no se ha ido a lo profundo.

El plan corto implicaba proceder a la inmediata reactivación industrial. Para ello se necesitaba una acción coherente y una clara visión de los objetivos buscados. Pero únicamente se atendió a los requerimientos del sector público. Obvio es que la normalización de pagos de la administración pública contribuye a brindar cierta liquidez a la plaza, pero nada más; la industria siguió paralizada, los depósitos bancarios crecieron a cifras nunca vistas y, sin embargo, los créditos bancarios no se ampliaron en la misma forma. Estadísticas publicadas en los diarios de estos días nos están indicando que lo que afirmo es exacto; son estadísticas reales. El aumento de las disponibilidades bancarias, que supera los diez mil millones de pesos, está constituido en gran medida por no decir en su casi totalidad, por depósitos de clientes, que llegan a la cifra de 12.500 millones de pesos. Esto quiere decir que el sector privado no se benefició con el aumento de la liquidez en la forma debida y que no se tenía clara idea de la necesidad y la gravitación en el proceso económico argentino de la reactivación industrial.

Con respecto al aumento de los precios, se trató de reprimir simplemente —que es la actitud más sencilla cuando algo molesta—, pero no se trató de corregir las deficiencias del abastecimiento que son la raíz última del problema.

Por otra parte, la declinación creciente de la producción ganadera, que tan ilustrativamente fuera expuesta en esta Honorable Cámara por el señor senador Gamond, nos coloca ante una grave realidad: la de que nuestra tradicional producción agropecuaria puede no ser suficiente para satisfacer las necesidades de nuestro comercio exterior, como lo sostienen los sectores agroexportadores.

Sr. Gadano. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente. — ¿Concede la interrupción el señor senador?

Sr. De Rege. — ¡Cómo no, señor presidente!

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gadano.

Sr. Gadano. — ¿No entiende el señor senador que las medidas dictadas hace pocos días por el gobierno de la Nación con relación al problema de las carnes cubren en todo su ámbito la posibilidad a que hace referencia? ¿No entiende el señor senador que esas medidas, por una parte, aseguran el stock, mantienen la exportación y posibilitan precios lógicos en el mercado interno?

Sr. De Rege. — Entiendo que son, simplemente, medidas parciales y que hay que cavar mucho más hondo y más profundo para poder solucionar el problema.

Sr. Gadano. — Me interesaría conocer de qué manera. Describa usted, con relación al pro-

blema de las carnes, qué medidas aconseja con sentido concreto, en este momento.

Sr. De Rege. — Considero indispensable, en primer lugar, hacer una consideración general de todo el problema, que lo vamos a debatir con toda profundidad cuando tratemos el proyecto de las carnes.

Sr. Gadano. — No; en este momento.

Sr. Bassi. — ¿Por qué no lo trae en este momento?

Sr. De Rege. — No lo traigo porque estoy tratando un problema general; estoy señalando un panorama general que existe en el país.

Sr. Fassi. — Es mejor que no nos apartemos del tema en debate.

Sr. Presidente. — Se está hablando en términos generales.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador De Rege.

Sr. De Rege. — La existencia de excedentes agrícolas en otros países constituye otro llamado de atención para nosotros y entonces debemos concluir con evasiones con las que se pretende eludir una apremiante realidad. O se promueve y diversifica nuestra economía con la participación simultánea de los sectores del trabajo en la conducción y beneficio del proceso o no existe salida alguna.

Hoy tenemos que sancionar el salario mínimo, vital y móvil. Lo hacemos porque es justo. Pero también se hace como una respuesta a un apremiante requerimiento de la clase trabajadora y como una forma de aliviar la tensión social existente en estos momentos.

No se ha previsto, sin embargo, qué es lo que va a pasar después. El salario mínimo si no va acompañado por un fuerte impulso de la actividad económica, si no se brinda el apoyo necesario para que las fábricas puedan pagar, para que sigan manteniendo a los obreros ocupados y recuperen a los que actualmente no lo están, para que los engranajes de la industria, señor presidente, se pongan nuevamente en marcha con pujanza y en toda plenitud, si no se logra la utilización óptima de la capacidad ociosa, tal como lo establecía el plan de coyuntura que reclamamos al Ejecutivo y que éste aceptó, no se conseguirá nada en favor de aquellos a quienes se pretende ayudar con esta medida, y en cambio tanto ellos como el resto de la economía nacional resultarán seriamente perjudicados.

Quede terminantemente en claro que tampoco sostenemos la necesidad de que primero se recupere la industria para luego atender a las necesidades legítimas de los obreros. Los obreros argentinos no tienen trabajo y los que lo tienen cobran tan magros sueldos que no les alcanzan para afrontar el alza creciente del costo de la vida. Ya a los obreros argentinos no se les puede pedir más inviernos, y nadie puede extrañarse de que haya agitación en la calle o se propicien huelgas. Esta ley y la reactivación industrial, así como todas las medidas neces-

rias para reponer el funcionamiento de una economía paralizada, anquilosada, deben adoptarlas los responsables de la condición económica en este momento, que bastantes recursos legales y financieros han recibido del Parlamento para ello. Si no lo hacen no debe culparse a los obreros de que en su desesperación busquen soluciones por sí mismos. Es necesario que se termine de una buena vez con el recurso de andar buscando culpas como medio de eludir la responsabilidad de la solución de los problemas acuciantes y crecientes de los distintos sectores que integran la comunidad nacional. Únicamente una economía fuerte, floreciente, pujante, podrá llevar a todos los argentinos la posibilidad de realizarse plenamente, de contar con los medios legales indispensables para la trascendencia del ser humano.

Nosotros no creemos que el salario mínimo vital y móvil solucione los problemas de los sectores laborales si no se procede a una enérgica reactivación económica; pero creemos que es necesario sancionarlo por razones de subsistencia de los trabajadores. Es menester tener en cuenta que los reclamos de la CGT y de otras entidades no concluyen con el salario mínimo. La central obrera ha reclamado además la reactivación industrial, sin la cual esto que hoy se sanciona no pasaría de ser una conquista utópica; y nosotros preguntamos cuando ha de ser esto considerado. No se puede esperar tampoco más tiempo para ello. En caso de no encarar urgentemente una política de fondo, la consecuencia de lo que hoy sancionamos será aumentar los despidos, por cuanto las empresas no cuentan con los medios para afrontar estas erogaciones. Se aumentarán los precios y se iniciará una carrera inflacionaria de resultados desastrosos que ninguno de nosotros puede desear para nuestra patria.

Se ha hablado reiteradamente de las diversas presiones. Una de ellas ha sido la de los trabajadores frente a una acuciante e ineludible realidad. La lentitud en tomar medidas de fondo por parte de quienes dirigen la economía los ha empujado en gran medida a esta alternativa. Se ha hablado también de otras presiones, y nosotros decimos que esas presiones llegan cuando las necesidades de la comunidad no son satisfechas. No busquemos en otros las culpas de lo que nos pasa. Asumamos plena, enteramente, la responsabilidad de una hora en la que hay que tener esquemas claros y objetivos definidos.

No busquemos soluciones ilusorias con las que se pretende eludir una realidad imperiosa. Seamos consecuentes con un destino nacional que impulsa a los argentinos a luchar por una revolución cristiana que posibilite al hombre el acceso a los bienes para su trascendencia. Llevemos esa bandera por toda América latina y realicémosla en nuestro propio suelo. Cuando todos los argentinos coparticipen en la tarea de

incrementar sus innumerables riquezas, reciban el justo beneficio de sus riquezas y coparticipen además de la tarea común de llevar idéntica revolución a sus hermanos que sufren idéntica distorsión y opresión, cuando en toda Latinoamérica exista un gran mercado que absorba lo que toda Latinoamérica produce y cuando todo eso esté al servicio de la realización y trascendencia de cada uno de los habitantes que la integran, los problemas, las tensiones, los enfrentamientos y los golpes de Estado habrán sido definitivamente desterrados de nuestros suelos.

Hoy apoyamos en general este proyecto con las disidencias que señalaremos en el debate en particular, pero reclamamos, exigimos el enfoque integral de una situación económica que ya no da más. Quienes tienen la conducción económica de la Nación tienen hoy la imperativa obligación de dar requerimiento coherente a este reclamo que no es nuestro sino que es de la Argentina toda.

Con respecto, señor presidente, a los aspectos concretos de este proyecto de ley que se propugna, debo decir que a nuestro criterio es formalmente insuficiente, pero que pese a sus deficiencias, incluso de orden formal y jurídico, lo estimamos justo y en general lo vamos a apoyar. Creemos que las observaciones que podamos hacerle no hacen sino perfeccionar algo que consideramos sustancialmente justo y que la mejor tradición del pensamiento cristiano ha sostenido a lo largo de muchos siglos. El principio de que el salario no es precio del trabajo sino que tiene carácter alimentario, esto es, debe atender a subvenir todas las necesidades materiales del hombre, a fin de posibilitar su perfeccionamiento y su trascendencia, es algo ya antiguo para la doctrina social cristiana; y entiéndase bien que cuando nos referimos a necesidades materiales, nos referimos a alimentación y vivienda dignas para el trabajador y su familia y posibilidades de progreso y perfeccionamiento.

Este reclamo por un derecho que, por otra parte, ha sido introducido en el texto constitucional a iniciativa del partido hoy gobernante, lo ha encarado la Confederación General del Trabajo, que es la representación de las fuerzas laborales organizadas e institucionalizadas dentro de un contexto de reclamos realmente justos y necesarios.

El Poder Ejecutivo envió un proyecto de salario mínimo que sufrió diversas modificaciones en la Cámara de Diputados y que nos viene hoy en consideración. Creemos que por premura, posiblemente, se han deslizado errores de peso que resulta necesario señalar si no se pretende derogar las conquistas laborales obtenidas a lo largo de muchos años por los trabajadores argentinos. Baste señalar que entre las normas que deroga esta ley se encuentra el artículo 2º del decreto ley 33.302/45, que determina en forma precisa

las actividades comprendidas dentro de este cuerpo normativo. Como en virtud de este mismo decreto ley se extiende el régimen de despido originariamente destinado a los empleados de comercio a todas las actividades comprendidas en el artículo 29 del mencionado decreto ley, al derogar el artículo 29 se deja sin protección contra despido injustificado a todas las actividades laborales, menos la de empleados de comercio.

Baste señalar este hecho para demostrar las consecuencias que pueden derivar del apresuramiento para modificar un régimen como el de trabajo, que en la Argentina se encuentra bastante elaborado e interrelacionado.

Lo que se pretende es fijar un salario mínimo vital que pueda cumplir con su función, que no es simplemente la de poder alimentarse el trabajador, como ya hemos visto. Sin embargo, las sumas que se han considerado resultan insuficientes para la finalidad buscada, y la Confederación General del Trabajo así lo ha sostenido hoy. Nosotros consideramos que, de acuerdo con las estadísticas vigentes, la suma de 14.000 pesos que se ha establecido no alcanza para la subsistencia de una familia tipo.

En esta cuestión seguiremos el sistema de determinación fijado por la CGT, que es, a nuestro juicio, correcto.

En 1956, Prebisch manifestó que el salario de sacrificio para el peón industrial debía ser de 1.120 pesos mensuales. De acuerdo con las estadísticas oficiales, el costo de vida de diciembre de 1963 era de 1.010,9 por ciento veces mayor que el vigente en 1956, y correspondería por lo tanto aplicar un salario de sacrificio de 11.322 pesos moneda nacional mensuales. Actualmente esta cifra es de 13.500 pesos para un obrero y de 18.300 para la familia tipo. El salario mínimo de 14.000 pesos para la familia tipo de los que sólo un 70 por ciento corresponde al trabajador soltero, se encuentra por debajo del salario de sacrificio que reclamara Prebisch para los trabajadores argentinos en 1956. Nosotros creemos que, por lo tanto, este Congreso debe fijar un salario de emergencia hasta que el Poder Ejecutivo determine el monto, pero que no puede estar tan por debajo de las elementales necesidades de los trabajadores. Y, en consecuencia, no puede ser inferior a 16.000 pesos mensuales.

Este salario de emergencia, así como el salario mínimo vital y móvil tampoco puede sufrir quitas zonales, ya que constituye el mínimo imprescindible, a juicio del legislador, y ese mínimo imprescindible no puede ser inferior en ninguna parte del país. Consideramos así que es necesario que esto se establezca en la ley que tratamos,* en el artículo 99, suprimiendo la referencia a las reducciones zonales en el tercer párrafo del mismo.

Por la misma circunstancia de ser imprescindible para el trabajador, al que le corresponde en carácter de derecho natural, no podemos concebir tampoco que se elimine de este

régimen a los empleados públicos, a los que se posterga hasta noviembre en su percepción, estableciendo una distinción tan arbitraria como injustificada. Tampoco se comprende la eliminación del servicio doméstico, al que se le puede valorar por vía de reglamentación lo que corresponde a techo, alimentación y vestido, pero no se le puede excluir del derecho al salario.

Creemos, sin embargo, que el salario puede ser enriquecido por vía de servicios asistenciales y previsionales por ejemplo, que es el salario indirecto, pero para determinar esto sería necesario que el consejo que por este régimen se establece tuviera una misión mucho más profunda, cual sería la de orientar la política salarial del gobierno, realizar estudios a fin de determinar la estructura del salario en el país por profesiones y por regiones, teniendo en cuenta la composición del salario directo e indirecto y determinar la composición de la familia en el país basándose en la población activa. Todas estas cuestiones serán objeto de disidencias en particular que formularemos en el transcurso del debate y con referencia a las cuestiones pertinentes.

Fundamentalmente, señor presidente, quiero hacer una exhortación al trabajo serio, profundo y metódico de los problemas, para lo cual seremos permanentemente materia dispuesta. En la Argentina de 1964 no queda ya lugar para las improvisaciones y es necesario que sus legítimas aspiraciones de ser una nación grande, poderosa y respetada que vive y trabaja en paz interna, pueda concretarse de una buena vez.

Nada más.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Flores.

Sr. Flores. — El asunto que motiva el proyecto que tenemos en consideración interesa primordialmente a los trabajadores. Ellos son sus destinatarios y serán sus beneficiarios.

Cada sector y cada senador lo enfocará desde su particular punto de vista y desde su personal concepción doctrinaria. Es útil que así se haga, estableciendo la motivación que los lleva a apoyarlo, la inspiración que tienen sus conceptos, porque ellos esclarecerán los alcances del proyecto y el criterio interpretativo de sus disposiciones.

Nuestro bloque se inspira y aplica una concepción doctrinaria: la justicialista.

Explicaré entonces, lo más brevemente que me sea posible, las razones que nos impulsan, aplicando nuestra doctrina, a apoyar en general el proyecto, sin perjuicio de nuestro desacuerdo con varias de sus disposiciones.

Para nuestra doctrina justicialista, uno de sus principios fundamentales es el de la dignidad del trabajo, y considera como uno de los deberes principales de quienes la siguen, sostener cuanto contribuya a que sea reconocida esa dignidad del trabajo y de los trabajadores; a mejorar las condiciones de éstos en todos los aspectos y a promover una auténtica justicia social

que asegure a los trabajadores una justa participación en lo que producen con su esfuerzo.

Conforme con nuestra doctrina, comprendemos y respetamos a los trabajadores; entendemos sus problemas, nos interesan sus inquietudes, sus aspiraciones y sus organizaciones. Pensamos que todos los trabajadores tienen derecho a un salario suficiente que les alcance para alimentarse, vestirse, educar a sus hijos, tener vacaciones y distracciones; para que puedan capacitarse, elevar su cultura e influir auténticamente en la vida nacional.

Comprendemos y sentimos sus problemas: cuando les falta trabajo, cuando no ganan lo suficiente; sus inquietudes y sus aspiraciones y sus luchas para lograr que sus problemas se solucionen. Opinamos que sus organizaciones son dignas del mayor respeto cuando trabajan y luchan por conseguir soluciones a los problemas que afligen a la masa trabajadora; que son instituciones útiles para la Nación y para su pueblo. Pensamos que deben ser fuertes para que sean eficaces, para que traigan las voces auténticas del trabajo a consideración de los poderes públicos y de la opinión pública en general. Creemos que ellas deben merecer el mayor respeto de todos, y por eso nos apena y nos parece incomprensible e injusto que cuando, como en las circunstancias actuales, luchan por concretar aspiraciones que son las de la gran masa trabajadora argentina, aun cuando no se compartan todos sus puntos de vista y sus métodos, surjan voces que reclamen contra ellos medidas de fuerza o persecutorias de cualquier tipo. Eso no debe ser; no es justo.

Dentro de nuestro ideario justicialista, hemos propiciado siempre, lo hacemos ahora y trataremos de hacerlo en el futuro, medidas que obedeciendo al principio doctrinario y fundamental a que me refería, se ajusten a los distintos momentos y circunstancias del país y a las posibilidades de realización de quienes seguimos esa doctrina.

Desde 1946 a 1955 en que gobernaron el país hombres del movimiento justicialista, durante la presidencia de Juan Perón, se realizó una política social que incluyó muchas medidas en beneficio de los trabajadores. Se promovió, especialmente, una legislación social tendiente a elevar el nivel de vida de los mismos. Se dictó un conjunto de medidas que aseguraron el resguardo de sus derechos; hubo creación de organismos de trabajo y previsión social, ministerios, tribunales del trabajo, Instituto Nacional de Previsión Social, Dirección Nacional de Servicio de Empleo, Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, Comisión Nacional de Precios y Salarios, Dirección Nacional de Asistencia Social y Fundación Eva Perón.

Se hizo una regulación de la oferta y la demanda de mano de obra a través de la acción encomendada a la Dirección Nacional del Servicio del Empleo y Dirección Nacional de Migraciones. Hubo protección contra el despido y la

suspensión arbitraria de los trabajadores, a través de distintas leyes y decretos que garantizaron su estabilidad en el trabajo. Se establecieron para los trabajadores las vacaciones anuales pagas y se reglamentó la duración de las mismas de acuerdo con las particularidades de numerosos gremios. Se reglamentó el descanso hebdomadario, cuya innovación más destacada fue la de extensión a empleados y obreros de muchas ramas y empleados oficiales de la semana de cinco días de trabajo, con dos de descanso. Se estableció el descanso semanal en el servicio doméstico y tareas rurales. Se fijaron días feriados obligatorios con goce de sueldo, extendido a todos los trabajadores de la República. Se estableció el sueldo anual complementario y el salario familiar. Se reformó la ley de accidentes de trabajo y se la adecuó a la realidad económica nacional. Se fijó el régimen de trabajo de menores y aprendizaje. Se establecieron cursos de capacitación profesional. Se creó la Universidad Obrera Nacional. Se estableció un régimen para asociaciones profesionales. Se crearon sistemas y organismos de conciliación para conflictos de trabajo, tribunales y comisiones de conciliación, arbitraje y paritarias. Se reglamentaron las convenciones colectivas de trabajo. Hubo asistencia y servicios sociales, pensiones a la vejez, seguro obligatorio de vida para los trabajadores del Estado; se fomentó la vivienda obrera, el turismo de los trabajadores y sus familias, la gratuidad en el ejercicio de las reclamaciones judiciales y administrativas del trabajador.

A ello, desde luego, puede agregarse el auspicio del Estado a la acción mutual sindical de los trabajadores organizados, algunos de cuyos resultados surgen de una encuesta realizada en el año 1954, que he tenido a la vista, la que dice que en el año 1943, 58 federaciones de trabajadores argentinos, que sólo tenían 5 consultorios médico-odontológicos, que atendían a 1.342 asociados por año, llegaron a poseer 8 policlínicos y 226 consultorios, que en el año 1953 atendieron a 1.667.000 personas. Que en 1943, organizaciones sindicales que no tenían una sola proveeduría sindical, llegaron a poseer 150 proveedurías organizadas como tales, como cooperativas o como mutuales, las que beneficiaron a 570.000 obreros. Que en 1943 poseía una de las federaciones mencionadas una sola colonia de vacaciones para 1.500 personas, y llegó a tener 22 colonias para 310.000 personas en cada período del año.

Junto con esta serie de medidas de política social se siguió, a la vez, una política económica que permitió la ejecución de las medidas relacionadas. Hubo fomento y defensa de las industrias mediante limitaciones de importaciones de artículos competitivos, aumento de derechos aduaneros, preferencia de ventas en el mercado interno, facilidades para importación de maquinarias y materias primas, fundación del Banco de Crédito Industrial, régimen de cambios, etcétera.

En este punto, y sin pretender entrar en un debate que sería ajeno al proyecto que estamos tratando, manifiesto mi desacuerdo total con lo que expresó el señor senador por Formosa en el sentido de que habían sido descuidados algunos sectores, entre los cuales parecería encontrarse el sector agrícola-ganadero. Entiendo que si observamos las cifras de esos años correspondientes al monto de la producción y a las hectáreas dedicadas a explotaciones agrícola-ganaderas, podemos llegar a la conclusión de que no hubo tal descuido. Existió, sí, desde luego, el deseo de fomentar la industria para que toda nuestra economía no estuviera dependiendo única y exclusivamente de la agricultura y la ganadería, pero sin abandonar tampoco ese sector tan fundamental de la industria agrícola-ganadera.

Así mismo, me permito expresar mi discrepancia con ciertas manifestaciones del señor senador por Santa Fe en el sentido de que se descuidó la promoción de industrias básicas. En realidad, no hubo tal descuido, ya que las iniciativas referentes a carbón de Río Turbio, a la siderurgia de San Nicolás y otras más que no tengo presentes en mi memoria en este momento, demuestran que se tuvo el criterio de fortificar la industria manufacturera y mejorar las condiciones de vida de la masa trabajadora argentina para que, de esta mejora de las condiciones de vida y de los medios que tenían a su disposición los obreros para gastar, resultara una capacidad de consumo que, a su vez, impulsara la manufactura y ésta pudiera recibir todo lo que produjeran las industrias básicas a que hacía referencia.

Sr. Martínez. — ¿Me permite una interrupción el señor senador, con permiso de la Presidencia?

Sr. Flores. — Con mucho gusto, señor senador.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez.

Sr. Martínez. — Creo que las consideraciones expuestas por el señor senador se encuentran desvirtuadas por la realidad de la política salarial seguida por el gobierno de 1945 a 1949. Lo demuestran los salarios mínimos que tenían los obreros industriales incluso en las zonas rurales, donde los peones de la misma jurisdicción ganaban hasta dos y tres veces más que los peones rurales, aun los técnicos como los tractoristas o con alguna capacitación agrícola o ganadera. Eso surge de las estadísticas y datos que están en todos los textos en que aparece el Estatuto del Peón y que demuestra que había una política totalmente equivocada en la materia. Yo no sé si fue bien intencionada o fue un descuido o un concepto erróneo el de crear una masa industrial rápida con un criterio de política demagógica. Pero es evidente que en el país la masa asalariada agrícola sufrió un deterioro. Lo demuestra el hecho de que el salario rural, en el año 1956, apenas llegaba a pasar los 20 pesos mientras que los salarios in-

dustriales llegaban a 78 y 80 pesos, con beneficios totales en materia de asistencia médica, farmacéutica, enfermedades inculpables, seguros, mientras que los rurales no tenían ningún beneficio. Entiendo que la realidad de los números demostró que esas diferencias de salarios determinaron el éxodo de los trabajadores rurales hacia las ciudades, ante la total despreocupación de un sistema de gobierno que sólo buscó en su hora la rapidez demagógica en materia salarial, quebrando las bases de la economía nacional. Ese es el fundamento de mi exposición, que, puedo afirmar, surge de las cifras de los decretos y estatutos dictados en esa época.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Flores.

Sr. Flores. — Aun con el temor de ser objeto de una observación por parte del señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que hace un rato invitó a un senador a que volviera al tema, voy a responder a las manifestaciones de un compañero de sector del señor presidente de bloque.

Yo creo que existe un profundo error de parte del señor senador y desde luego que me limitaré a hacer una breve observación porque estoy de acuerdo en que, sobre esa política, corresponde hacer un debate amplio y completo. Pero nos llevaría demasiado tiempo y además estaríamos lejos de la realidad actual. Pero creo, aun así, que hay un profundo error en pensar que la posición del peón rural de aquel entonces sufrió un grave deterioro. ¿Qué grave deterioro podía haber si la situación que con anterioridad tenía ese peón rural era desastrosa? El hecho de que no se consiguiera llegar al nivel que se consiguió con esa política que se llamó demagógica, pero que yo entiendo que era una política justa, de enaltecimiento de la dignidad de los trabajadores argentinos, puede ser exacto. No se llegó a esa uniformidad plena, no se pudo salir prácticamente de la nada en esa materia, para llegar en un día —que es lo que unos pocos años representan en la vida de una nación— a que los trabajadores rurales argentinos tuvieran los más altos salarios, iguales a los de la industria, entonces incipiente, y fomentada, porque había el deseo de conseguir que la economía de nuestro país no estuviera exclusivamente basada en lo rural, sino también en la industria, en la que está el porvenir de la Nación.

¿Que hubieran retrocedido los trabajadores del campo? ¿Cómo puede pensar eso el señor senador? ¿Cómo puede pensar eso cualquiera de nosotros, cuando hemos conocido cómo vivían los trabajadores del campo antes de 1945? Eso es sencillamente inexplicable. Si el señor senador sostiene que no alcanzaban los niveles de salarios y de mejoras, que no alcanzaban a tener los policlínicos a mano, como ocurría con los obreros industriales, los trabajadores bancarios y tantos otros sectores en la época del

justicialismo, 1946 a 1955, si estaríamos de acuerdo. No se llegó a eso, pero que fueran para atrás, no lo creo. Al contrario, fueron para adelante y mucho, señor senador. Hay que haber recorrido la campaña para darse cuenta de que hubo una mejora muy grande, muy apreciable, en la situación de los trabajadores rurales argentinos. Continúo, señor presidente, con el tema.

Sr. Castiglione. — Mató la gallina de los huevos de oro.

Sr. Presidente. — Ruego a los señores senadores dirigirse a la Presidencia.

Sr. Flores. — Estaba viva en 1955. Se la mató después, y algún día podemos hacer un debate amplio y dar todas las cifras para que veamos cómo...

Sr. Presidente. — Ruego a los señores senadores no dialogar. No se está tratando quién mató la gallina. (Risas.) Continúa en el uso de la palabra el señor senador Flores.

Sr. Flores. — Continúo con la breve relación que estaba haciendo; hubo entonces medidas de orden económico tales como la reforma cambiaria, monetaria, la nacionalización de los depósitos de los bancos, la política comercial externa basada en convenios bilaterales celebrados con el propósito de diversificar los mercados, etcétera. Hubo una política económica general que permitió que se realizara todo ese conjunto de medidas de orden social, política comercial, política económica que dio resultados, —a mi juicio, honradamente y sin perjuicio de la opinión en contrario de otros señores senadores—, concretos y favorables en cuanto a la diversificación de nuestra producción; a la transformación de la estructura de nuestra economía, traducida en el crecimiento de las industrias manufactureras y de la construcción; en la eliminación de la vulnerabilidad de nuestra economía, debida a factores externos, la sustitución de esos factores, que la hacían depender del extranjero, por estímulos internos, por un consumo interior que absorbía la producción de la industria; la disminución de la significación del capital extranjero en nuestra economía y su reemplazo por el nacional; la distribución equitativa de la renta nacional, que en el período 1949 a 1955 correspondió en un sesenta por ciento a los trabajadores, y en un cuarenta por ciento al capital.

En ese mismo período se adquirieron servicios públicos que estaban en manos extranjeras, como los ferrocarriles, teléfonos, se aumentó el tonelaje de nuestra marina mercante, etcétera. Todo esto constituye un conjunto de medidas que permitieron realizar grandes mejoras sociales.

Entonces nuestra doctrina, el justicialismo, tuvo la posibilidad de realizar ese conjunto de iniciativas de mejoramiento económico y social que, sin perjuicio de la opinión de adversarios políticos y de algún técnico que pueda estimar

lo contrario; fue indudablemente aceptada y admitida con aplauso por el pueblo.

En la actualidad, desde luego, el justicialismo no tiene posibilidades de realización semejantes por razones que son del conocimiento público, pero obedecemos ahora al mismo principio e inspiración fundamental que tuvieron las iniciativas justicialistas en aquel período de 1946 a 1955. Obedeciendo a ese principio, apoyaremos toda iniciativa, de cualquier origen partidario, que sea útil para mejorar la condición de vida de los trabajadores y la angustiosa situación que muchos viven. Lo haremos así en el caso de este proyecto como lo hicimos con la ley de abastecimiento al pensar que podía influir favorablemente en las condiciones económicas de la población al reducir el costo de la vida; procedimos así también cuando se trató la reforma de la carta orgánica del Banco Central, porque pensamos que iba a permitir el pago de sueldos y jubilaciones, el fomento de las industrias y la reactivación de la economía del país, a fin de que saliera de este estado de estancamiento.

Procederemos con ese criterio y esa inspiración; apoyaremos entonces este proyecto a pesar de que en muchos aspectos no nos satisfaga en su estructura. Pero, repito, lo apoyaremos en general con ese criterio de sostener siempre toda medida que pueda favorecer a los trabajadores, cuando ello coincida con los intereses del país, y sin desmedro de los derechos legítimamente respetables de otros sectores.

Entendemos cumplir así con nuestra doctrina y nuestra conciencia. Pensamos que el proyecto es sólo un paso para corregir ciertas situaciones muy angustiosas de los trabajadores. Nos entusiasmaría, desde luego, otro tipo de medidas, otras soluciones que permitieran realmente a los trabajadores una vida más amplia, con mayores posibilidades de todo orden: culturales, económicas, espirituales. Pero por esa aspiración de hacer algo mejor por ellos, no podríamos dejar de apoyar este proyecto, que tiene otro origen, que no ha sido elaborado por hombres de nuestra doctrina, ya que es una aspiración de los trabajadores, la sanción de una ley de salario vital mínimo, expresada por sus organismos más representativos.

Declaro, entonces, que con ese criterio apoyaremos en general el proyecto, sin perjuicio de señalar discrepancias en varios aspectos. Los principales son: las quitas zonales establecidas para el salario, y la indeterminación del organismo que propondría el representante de los trabajadores ante el consejo, que entendemos debe decirse explícitamente que será la Confederación General del Trabajo. En cuanto al monto mínimo señalado, coincido con el señor senador de la democracia cristiana, en el sentido de que es muy inferior a las necesidades vitales de una familia tipo de trabajadores, por lo que debe elevarse.

De acuerdo con estos conceptos, pienso y así lo dejo sentado para que ello pueda servir como criterio de interpretación de esta ley por los jueces u otros organismos, que esta ley debe ser interpretada siempre en un sentido favorable al trabajador, porque ella debe ser de protección y justo reconocimiento del derecho a tener siquiera el mínimo indispensable para vivir; un criterio, entonces, que nunca sea restrictivo para negarle una ventaja, sino que debe ser amplio, favorable, de protección.

Termino mi exposición expresando, sinceramente, el anhelo de que la aplicación de esta ley que haga el Poder Ejecutivo y la política económica que éste siga, que es un factor indispensable para que esta ley pueda tener éxito y favorecer realmente a su destinatario, el trabajador argentino, permitan lograr los beneficios a que aspiran nuestros trabajadores. Si así se consigue, habremos tenido éxito en esta tarea.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Ramón Edgardo Acuña.

Sr. Acuña (R. E.). — Señor presidente: desde el principio mismo de la gestión presidencial Illia, y desde distintos sectores de la opinión pública, se ha definido a este gobierno a través de un «slogan» que fue ganando alguna opinión ingenua en el país y que terminó por convertirse en el argumento más contundente de la oposición: gobierno antiguo, gobierno del que se adueñó una especie de quietismo nirvánico, gobierno que ha paralizado al país, gobierno que no es de este siglo sino de otro tiempo y acaso difícil de ubicar en la historia, etcétera. Suponen los filósofos del «desarrollismo» —filosofía de la entrega— que los hombres que integran el gobierno están erradicados de la realidad contemporánea y de toda información ilustrada acerca del complejo mundo de relaciones sociales, económicas y jurídicas que constituyen la realidad circundante.

Afirmo, señor presidente, que no nos son extrañas ni las viejas ni las nuevas teorías y que participamos, incluso, de algunos conceptos vertidos por los epígonos del desarrollismo al afirmar que, efectivamente, no habrá desarrollo sin una adecuada dosis de inflación. Pero nosotros no concebimos un desarrollo económico operante en desmedro de la justicia social, y allí radica nuestra primera discrepancia con los filósofos de marras.

También concebimos nuestra realidad nacional como inmersa dentro de una más vasta y fecunda de tipo regional. Y tanto lo sentimos al regionalismo económico que, incluso, por boca de nuestro canciller llegamos a hablar del aprovechamiento continental de los recursos, mientras el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales auspiciaba la creación de un depósito latinoamericano de petróleo.

Señor presidente: cuando nosotros auspiciamos determinadas soluciones tendientes a mo-

dificar las estructuras de base, también percibimos que el problema se amplía y proyecta ya que debemos impactar un mundo en el que la división internacional del trabajo nos ha sido impuesta desde afuera, y, lógicamente, tendremos que romper esos esquemas para avanzar en el camino de un auténtico desarrollo al servicio de la Nación y de la comunidad regional que integramos en el cono Sur del continente americano.

También comprendemos —y en este sentido estamos dando la batalla— que no puede haber desarrollo nacional si no rompemos las estructuras del GATT —Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio—, al que hoy, por suerte, según lo anuncia la prensa, se le cantó el réquiem en Ginebra.

He debido incursionar sobre estos antecedentes y aquellos «slogans» del «desarrollismo», para aclarar algunos equívocos introducidos en debates llevados a cabo en este Honorable Senado, y no sólo a raíz de la discusión de nuestra ley de salario mínimo, vital y móvil; los hemos visto plantearse en cuanta oportunidad ha sido propicia, como sucedió al debatirse la reforma a la carta orgánica del Banco Central. No resulta entonces una novedad que un radical del pueblo haya penetrado en las intimidades de estos esquemas modernos para reconocer que nuestra economía fundamentalmente sufre las consecuencias de una distorsión crónica y creciente de los términos del intercambio, y que la industrialización de los países periféricos se impone como una necesidad, como un impulso, a veces irracional, de forjar las industrias necesarias para la sustitución de las importaciones, impulso de sentido nacional que muchas veces no conoce los controles de las etapas ni planifica sus objetivos, por cuya consecuencia resulta que algunas sustituciones se conviertan a lo largo del tiempo en peligrosas y antieconómicas para el país.

También conocemos, señor presidente, aquello sobre lo cual durante tanto tiempo se habló, se dijo y pregonó sobre el crecimiento hacia adentro. Conocemos y son base de nuestras preocupaciones para los planes que iremos poniendo en ejecución en los tiempos por venir inmediatos, que el crecimiento hacia adentro no basta por la insuficiencia y limitaciones del propio mercado y que tendremos que irrumpir hacia las exportaciones no sólo de nuestras materias primas sino de los productos industriales en un mundo de relaciones económicas que se exprese a través de la diversificación de los mercados y en el que tengamos el valor de producir un hecho revolucionario dentro de la tradición exportadora argentina rompiendo el prejuicio de los mercados tradicionales y abriendo las extraordinarias perspectivas del comercio con todos los países del mundo, incluso con los de organización socialista.

Señor presidente: todo este esquema previo a mi exposición reconoce como sustento y fun-

damento otras realizaciones que pasan a veces inadvertidas en esta hora de confusión de sentimientos y de ideas que vive el país, porque no puede haber desarrollo sin justicia social, pero tampoco puede haber desarrollo sin libertad. Por eso fue preocupación constante de nuestro gobierno abrir las perspectivas nuevas de una vida plena en la libertad, que terminará por derrumbar el andamiaje de una legislación represiva que no nos pertenece ni como inspiración ni como ejecución, y que logrará, señor presidente, la integración plena del cuadro electoral de la República a través de una legislación que concluya con las proscripciones de cualquier sentido y procedencia. Porque no sólo fue proscripción la proscripción escrita de las ideas: fue proscripción el fraude que nos hicimos; lo fue la demagogia, así como el decreto que inhabilitaba a un sector ponderable y respetable del país.

Pero para enmarcar este debate dentro de los antecedentes correctos y de la información adecuada, y porque algunos lo olvidan y otros lo silencian, es necesario, señor presidente, realizar alguna indagación en el pasado próximo para confeccionar un balance de las realidades y hacer un pronóstico de posibilidades ciertas para el futuro.

Se nos acusa de habernos lanzado en el torrente de una inflación incontenible pero se omite señalar —aunque haciendo honor a la verdad algo se dijo esta noche por intermedio de un señor senador— que al 30 de abril de 1958 teníamos un circulante del orden de los 53.000 millones y al 30 de marzo de 1962 uno de 141.000 millones, sin que haya avanzado en la misma progresión el volumen de los bienes y servicios que se relacionan con ese caudal de dinero y de depósitos bancarios.

También es bueno recordar que mientras crecía el monto del circulante nos encontramos con que la deuda externa, estimada en dólares y con inclusión de intereses, que al 30 de abril de 1958 era del orden de 1.072 millones, al 30 de septiembre de 1963 alcanzaba a la cifra de 2.706 millones. Ello tiene alguna importancia para evaluar las posibilidades de nuestro desarrollo. Quiere decir que nosotros arrancamos desde un punto crítico y que el peso inerte del deterioro avanzante que venía sufriendo el país no podía contenerse por obra y gracia de la mera mutación presidencial, sino que ese deterioro y ese peso inerte iban a seguir actuando por un lapso más o menos prolongado hasta que las prudentes, cautelosas y sabias previsiones de nuestro gobierno pudieran frustrarlo en su desarrollo aparentemente incontenible. El dólar, que en mayo de 1958 estaba a 42,20 pesos, fue recibido por este gobierno a 149,40.

Por eso, señor presidente, tenemos que recoger otras cifras para ver el campo de la vida económica y financiera dentro del cual va a jugar su papel esta ley de salario mínimo, vital y móvil. Un gobierno que recibe al país en este

punto crítico de fusión y que sin deterioro de las posibilidades financieras de las empresas del Estado mantiene congelados los precios de sus servicios; mientras que en la época del «desarrollo», el gas de 9.300 calorías pasa de \$ 3,4 a 4,25 y los teléfonos de casas de familia, de \$ 75 a \$ 345 en 1963. Y este mismo crecimiento súbito de los precios que nos demuestra un proceso de inflación creciente lo recibimos en los combustibles líquidos y en todos sus derivados. Así, la nafta, que en 1958 se vendía a \$ 2 el litro, la recibimos a \$ 11; la motonafta, de \$ 2,80 a \$ 13; el gasóleo, de \$ 1,40 a \$ 7; el queroseno, de \$ 1 a \$ 7,50, y en esta misma proporción los demás derivados del petróleo.

El transporte privado sufre desde 1958 a 1963 el siguiente aumento progresivo: período 1958-59, 57,94 por ciento; 1959/60, 30,02 por ciento; 1960/61, 29,6 por ciento; 1961/62, 28,3. Estos porcentajes, progresivos y alarmantes, nos están exhibiendo la realidad de un país no sólo gravemente enfermo sino al borde de su postración definitiva.

Podría citar los antecedentes de los incrementos de transportes suburbanos, interurbanos y rurales o recordar otros porcentajes de este rubro, por ejemplo el de los ferrocarriles, que llega sin poder enjugar sus déficit, de un porcentaje acumulado, tomando como base el índice de 100 para el año 1958, a 552 en 1963, y en relación a un costo de la vida que había subido de un índice 100 en 1958 a 540 en 1963.

Todas estas cosas van integrando un cuadro demasiado crudo y dramático como para que no merezca en esta hora una reflexión sobre las verdaderas condiciones en que nosotros recibimos este gobierno y acerca de la magnitud del esfuerzo que debe realizar el país para contener primero este proceso y avanzar después decididamente hacia los grandes objetivos de la liberación nacional. Los quebrantos comerciales llegaban en 1959 a 826 millones, ascienden a 1.005 en el primer trimestre de 1962. Mientras esto sucedía, señor presidente, el reparto del ingreso neto calculado en algo así como el 85 por ciento del producto bruto que en el año 1962 ofrecía una distribución al sector salarial del 61 por ciento —que es el más alto conocido por el país— y el 39 por ciento para el sector propietarios, profesionales, intereses, etcétera, lo encontramos en el año 1960/61 convertido en el 43,1 para el sector asalariado y el 56,9 para el sector propietarios, profesionales, e intereses. Lo que importa es señalar que, indudablemente, los conceptos inspiradores de la justicia social se habían distorsionado y que el esfuerzo del país empezaba a traducirse en el fortalecimiento de los grandes sectores del privilegio nacional.

Lo mismo pasa, señor presidente, con la energía eléctrica, que de 1,15 pesos por kilovatio-hora, nosotros la recibimos a 3 pesos.

Esta es la realidad que informa este período del pretendido «desarrollo nacional».

Señor presidente: si esto no fuera suficiente, podríamos decir que el encarecimiento del costo de la vida, que en 1958 con respecto al índice 100 de 1943 estaba en 1905,8, en abril de 1960 estaba en 4041,6, con un aumento convencional en relación a 1957 del 107,43, y que ya en 1963 llegaba al 6502,0 con relación al índice citado precedentemente.

Estos antecedentes son más que informativos para comprender el drama que imperaba y tenía vigencia en el país, y medir cómo después de siete meses de gobierno, a pesar del tremendo peso de los profetas del caos, a pesar de la supuesta inoperancia y antigüedad mental del gobierno, empezamos ya un sostenido avance en el camino de la recuperación nacional. Puedo afirmar por mi voz, pero a través de informaciones que no vienen ciertamente del sector oficial que ha terminado la recesión económica en la República. Lo señala así no sólo la prensa especializada en la materia, sino incluso la publicación «International Commerce» de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América, cuando presenta una visión optimista de las posibilidades del país en esta hora precisa en que dentro de la República se pretende instrumentar un clima de fracaso y hacer la pedagogía del decrecimiento en vez de crear las condiciones de fe y de optimismo, bases y estructuras mentales sobre las cuales ha de construirse y reconstruirse este país tan gravemente afectado.

Automotores trabaja a capacidad plena. En abril de 1964, llegamos así a la producción de 12.820 unidades, contra 7.122 de abril de 1963, con un aumento del 80 por ciento de la producción.

Y podemos ver cómo este proceso es vigoroso y dinámico si consultamos las cifras de los trimestres enero-marzo, de los años 1963 y 1964, donde sólo se acusa un incremento del 37,2 por ciento.

Los quebrantos comerciales, señor presidente, según información de la revista «Veritas», que en mayo de 1963 llegaban a 1.772.725.903 pesos, en mayo de 1964, llega a sólo 711 millones, con una diferencia del orden de los 1.060.249.408 pesos.

En el sector básico de SOMISA se trabaja a pleno, con ocupación y rendimiento plenos. Un solo detalle puede ilustrarnos acerca de esta afirmación. La facturación de SOMISA en diciembre de 1963, llega a 954 millones de pesos, mientras que la de abril, llega a 1.600 millones con la siguiente producción trimestral: arrabio 205.500 toneladas, acero crudo 398.100 toneladas, laminado 309.000 toneladas, teniendo esta empresa una capacidad diaria de 1.500 toneladas de arrabio y 3.000 toneladas para laminados.

Textil algodónera: una de las industrias madres del país. Trabaja al 90 % de su capacidad máxima, mientras que la industria textil lanera pasa del 50 % de su producción en pleno receso económico e industrial al 75 %. Y en metalurgia, vemos cómo se ha incrementado a través de la

información que publica «El Economista», la producción de maquinaria agrícola y de artículos para el hogar.

Así es como en la revista citada anteriormente se decía de manera concreta: No sólo buenas entradas agropecuarias que pueden computarse a condiciones climáticas excepcionales, sino estímulo industrial y aumento en la demanda de los automotores.

Pero esto no sería suficiente. Bastaría conocer las estadísticas publicadas por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos con respecto al comercio en la zona de la ALALC, para ver en qué medida el comercio de la Argentina, con el Brasil, Colombia, Chile, el Ecuador, el Perú y el Uruguay ha experimentado un extraordinario incremento en los primeros meses de 1964, con relación a igual lapso de 1963.

Oportunamente solicitaré la inserción de este cuadro, al cual considero ilustrativo, con respecto a la situación general de la economía nacional y a su tendencia hacia el avance y hacia el desarrollo, sin que aún se hayan puesto en marcha los planes estructurales que, sin duda alguna, tendrán una pronta ejecución, según lo prometieran el ministro de Economía y el propio presidente de la República.

Desde distintos sectores se pretende asegurar que esta ley del salario mínimo, vital y móvil, no conseguirá otra cosa que afirmar el proceso inflacionario y que el crecimiento de los precios destruirá el salario real, colocándose los críticos en la tesis de que las desvirtuaciones de la oferta y la demanda no existen como cosa en sí, sino que el encarecimiento de la vida es consecuencia fatal de la disminución de la producción. Esta afirmación no es exacta. En un país desmoralizado, deprimido espiritualmente, sin fe en el futuro, en un país en el que se han roto por algunos sectores compromisos éticos trascendentales para con la comunidad, el agio, la usura y la especulación actúan y crecen desmedidamente, hechos demostrables con el simple análisis y estudio del mercado en el que se ofrecen los artículos de primera necesidad.

Sostengo, señor presidente, que en numerosos casos podemos comprobar que, sin escasez de los productos, éstos son vendidos a precios de agio y de especulación, por el crecimiento insólito de una intermediación incontrolada, que fue la causa que señalara el doctor Aldo Ferrer al juzgar el aumento del 60 por ciento de los sueldos y salarios dictado por Frondizi, y al que apeló como antecedente para afirmar que ello había impedido romper el estancamiento y avanzar en la espiral del desarrollo.

¿Por qué ese aumento del 60 por ciento no produjo los resultados previstos? Como tiene relación con el tema que estamos considerando, lo he de mencionar. Ello ha ocurrido así porque el aumento no fue transferido a los sectores básicos de la producción, quedando trapeado en el mecanismo distribuidor y, consiguientemente, trasladado a los precios. La gestión presi-

dencial de Frondizi no trató de destruir ese mecanismo vicioso de la intermediación parásita, a la que ahora podemos combatir con la ley de abastecimiento, que no es ley de precios máximos, sino que, fundamentalmente, se dirige a organizar el mercado, la producción y distribución de los productos.

Los hombres que ejercemos la conducción del gobierno tenemos fe en el país; creemos que ha de ser posible superar estas instancias. Otras naciones, en momentos más dramáticos de su historia, lo lograron. Las medidas de emergencia no sólo se dictan en países como los nuestros, llamados en desarrollo o subdesarrollados, sino también en los países más altamente industrializados del mundo, y Norteamérica conoció en su hora la necesidad de leyes de emergencia y tuvo que optar entre los criterios de los controles selectivos de Henderson y las tasas generales de Baruch.

Tenemos que encontrar el camino para contener este proceso inflatorio y este crecimiento artificioso de los precios, para que el aumento del salario real del obrero y del trabajador no se traduzca, por el aumento de los precios, en una lamentable ilusión que precipite y estimule las convulsiones sociales, la desesperanza y el sentido de la frustración que vive el hombre argentino. Hace unos instantes advertí un cierto matiz de polémica entre el señor senador Astudillo y el señor senador Flores cuando hablaban, desde sus puntos de vista, respecto de lo que era primero: si el desarrollo de las industrias básicas, pesadas, o el desarrollo de las industrias livianas. Y por un momento vi transferido a este recinto...

Sr. Astudillo. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Acuña (R. E.). — Sí, señor senador.

Sr. Astudillo. — No he hecho en absoluto ninguna referencia a qué es lo primero que hay que realizar. Simplemente he tratado de fijar con objetividad el proceso del peronismo diciendo que en mi opinión le dio prioridad a la industria liviana sobre la pesada.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Acuña. Le ruego al señor senador Astudillo solicitar las interrupciones para mantener el orden en el debate.

Sr. Acuña (R. E.). — Esta diferencia de enfoque es un viejo problema y costó mucha sangre. No es tan sencillo. A veces la polémica se traduce en episodios trágicos. Es el viejo enfrentamiento de la política stalinista y de la de Bukarin. El señor senador Flores es representante —y no le deseo la suerte de Bukarin (*Risas*)— de quienes auspician el desarrollo de la justicia social, aun en desmedro de las industrias básicas, y el señor senador Astudillo es representante conspicuo de las conducciones unipersonales...

Sr. Astudillo. — La interpretación es absolutamente capciosa. En primer lugar, que no me he referido a la justicia social.

Sr. Presidente. — Le ruego al señor senador que solicite las interrupciones, para que mantengamos la misma equidad que mantuvimos en su exposición.

Sr. Astudillo. — Creo que hay una interpretación capciosa del asunto. En ningún momento me he referido a la justicia social, sino a la industria liviana y al desarrollo de la industria pesada.

Sr. Acuña (R. E.). — Claro que la industria liviana tiende a satisfacer las necesidades apremiantes del pueblo y la pesada las necesidades prorrogables del Estado. Ahí está el porqué: con el desarrollo de la industria pesada y de los sectores básicos, en desmedro de la industria liviana, se estaba haciendo desarrollo sin justicia social.

Con respecto a manifestaciones vertidas en este recinto con referencia a la distribución de los fondos provenientes de la reforma del artículo 49, yo deseo aclarar que según antecedentes que tengo sobre mi banca 12.000 millones de pesos fueron a las cajas de previsión. Yo no sé si puede afirmarse que haya otra prioridad mayor que resolver el problema del sector pasivo de la población, colocado al borde de la miseria. Yo no sé tampoco si los 13.000 millones anticipados a las provincias para ponerlas en pie y sacarlas de su estado de postración, hubieran aceptado la intercalación de otra prioridad con miras a poner en marcha un supuesto plan de desarrollo, ni que los 7.000 millones para Agua y Energía y los 18.000 millones para mantener en pie el funcionamiento de EFEA, puedan aceptar en esta hora una sustitución de destino que nos hubiera llevado a la paralización del país en aspectos fundamentales de su economía.

Estamos tan interesados en el desarrollo, señor presidente, como en ponerlo en un mismo nivel de interés y de urgencia con la justicia social que libere al hombre argentino de las limitaciones y de los sometimientos a que lo lleva el estado de pobreza y de miseria al que fue confinado en los últimos años.

Schacht, durante su visita a la Argentina, posiblemente ya informado de nuestro problema, hizo una advertencia a los hombres políticos y del comercio y la industria. Repitió el razonamiento mínimo, que todo el mundo comprende, de que no hay que olvidarse que «sólo un trabajador satisfecho puede rendir bien, y es en este sentido que los empresarios y los políticos argentinos tendrán, según me parece, que cambiar totalmente en su manera de pensar y actuar.

»El obrero vende sus horas de trabajo; no las invierte, hay que pagarle bien para que él, a su vez, pueda comprar, estimulando la producción, la distribución y el consumo». Era la tesis de Frondizi de 1958: crecimiento hacia adentro, aumento de la capacidad de compra, traslación de la misma al sector de la producción, aumento de ésta, mejora de las condiciones de

trabajo, inversiones de capital, todo lo cual terminó en el más ruidoso fracaso porque no se combatió la intermediación parasitaria. Se hizo crecer hasta lo insólito el mecanismo distribuidor, que ya de por sí absorbe las savias mejores de las naciones subdesarrolladas.

Señor presidente: tal vez este salario vital, mínimo y móvil, no satisfaga las esperanzas y las aspiraciones mayores de la clase trabajadora, pero es la solución posible, es la que señala el camino por donde debemos transitar y avanzar. No es nada más que un preludio de lo que piensa realizar nuestro gobierno en la ejecución de su programa, y no en el cumplimiento de consignas demagógicas, circunstancias y de oportunidad, porque cuando ya lo pusimos en octubre de 1957 en la Constitución Nacional representaba una vieja idea, una vieja y dinámica profesión de fe doctrinaria, para los hombres de mi partido, y cuando lo incorporamos a nuestro programa escrito para la campaña de julio de 1963 no estábamos más que confirmando la voluntad expresa de ratificar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Estas son nuestras banderas. Habremos de ejecutarlas; no interesa responder a ninguna clase de provocación o de interferencia. Hemos dado al país la imagen de un gobierno que quiere pacificarlo, que quiere la legalidad para todos; hemos dado la imagen de un gobierno que no utiliza sus leyes represivas, que las deroga, que no quiere proscritos, que desea la legalidad para todos los argentinos. En ese camino no hemos de cejar, porque es preferible vivir en el llano con las banderas al tope de los mástiles de nuestra ideología, que permanecer en el gobierno con las banderas arriadas y en la indignidad de las transacciones que son incompatibles con las grandes responsabilidades históricas de nuestro partido.

Nada más. (Aplausos.)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: estimo que debemos seguir hablando con toda claridad y sin ambages, y para ello no podríamos silenciar que entramos a este debate en circunstancias que no son propicias para el estudio sereno y meditado que hubiera debido realizarse ante un asunto tan trascendente como el que estamos tratando.

Me adelanto a decir que esto no implica restar el apoyo ni denunciar una falta de convicción frente al instituto del salario vital, mínimo y móvil, cuyo dictamen apoyamos en forma general, aunque con algunas reservas, ya que casi todos los partidos políticos argentinos tienen opinión comprometida en cuanto al asunto en sí, sino que me estoy refiriendo a la necesidad de estudiar con mayor sedimentación algunas de las disposiciones del proyecto que debatimos esta noche.

No se trata entonces de discordancia en cuanto al instituto mismo, que no solamente tiene la relevancia imperativa de una disposición constitucional, sino también el aval de conferencias internacionales, de encíclicas papales y de una opinión abrumadora en la doctrina que estudia la materia.

De lo que se trata aquí es del momento en que abordamos el estudio del tema, que estamos realizando a pocas horas de su sanción por la Cámara de Diputados, impidiéndose de esta manera un estudio más exhaustivo y sereno, que deberíamos haber realizado.

Yo interpreto y conozco la decisión que impulsa al bloque mayoritario a tratar este asunto con la urgencia que se exhibe en este instante. Creo que no se debe a debilidad frente a lo que podría entenderse como una presión inadmisibles. Acepto incluso que el bloque de la mayoría desea sentar con este tratamiento de urgencia que no podría invocarse mañana ni indulgencia ni falta de interés para justificar, con la no sanción inmediata, medidas de fuerza que parecen cernirse en el ambiente. Pero dentro de la voluntad que hemos tenido en todo instante de cumplir con los deberes legislativos, también toca a nuestra responsabilidad hacer saber en qué condiciones venimos a este debate, que hubiéramos deseado contara con la sedimentación necesaria para estudiar algunas disposiciones; poder pulsar opiniones en favor y en contra de los artículos y preceptos, e intercambiar opiniones dentro de la común ecuación del patriotismo, los datos, las informaciones y las opiniones que quizá hubieran podido alterar el curso de algunas de las mismas. Pero esto que conceptúo, señor presidente, como una advertencia necesaria frente a las deficiencias que pudiéramos tener en el tratamiento de determinados asuntos, no implica en modo alguno —y quiero que esto quede bien claro— una discrepancia en cuanto al motivo fundamental que nos reúne. Y es que no podría haberla, porque existen argumentos más que suficientes, si no fuera por sí sola suficiente la prescripción constitucional, tantas veces citada y repetida en el curso de esta noche, para demostrar que estamos tratando un instituto legislativo de honda raigambre histórica y de profundo significado moral.

Ya está incluso en los textos bíblicos, y así puede recordarse que el propio Moisés, cuando se producía la liberación de extranjeros, imponía que si ellos querían seguir sirviendo a sus antiguos señores debían estos últimos pagarles un salario justo. Luego viene la cuestión social, tan debatida, que surge con el industrialismo. Y saltando etapas, que no considero necesario recordar por ser demasiado conocidas, y a fin de no cansar la atención de la Honorable Cámara llegamos al moderno constitucionalismo social, uno de cuyos pilares es justamente la materia que tratamos esta noche.

El salario vital, pues, tiende a la satisfacción de necesidades mínimas, ineludibles, que no pueden soslayarse dentro de un mundo que busca la comprensión, la fraternidad y la justicia, en medio de la paz y de la libertad.

También este salario ha sido objeto de preocupación relevante en convenciones y conferencias internacionales, sea de manera integral o para casos determinados. Y, en tal sentido, podríamos recordar las conferencias interamericanas del trabajo; tal, por ejemplo, la primera, reunida en Santiago; la segunda en La Habana, en 1939; la cuarta en Montevideo, en 1949; la quinta en Petrópolis, en 1952; la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, de 1948, que adopta la Carta Internacional Americana de Garantías, así como también, en este orden, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que proclama que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme con la dignidad humana. A su vez, los convenios 26 y 99 adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida sucesivamente en Ginebra en 1928 y 1951, permiten a los países ratificantes la libertad de determinar los métodos para la fijación de los salarios mínimos y las modalidades de aplicación.

Esto es importante, señor presidente; y no estoy haciendo una mera relación fatigosa, como podrá advertirse más adelante en el curso de mi exposición. Todo es importante, porque justamente podemos observar a través del derecho comparado la adopción de diversos sistemas. En síntesis, para abreviar estas palabras, diré que a veces este instituto se aplica por disposiciones legislativas y otras por disposición gubernamental; a veces también dentro de este último orden de ideas se acude a su aplicación por juntas centrales y otras por juntas locales o regionales.

Es importante señalarlo, señor presidente, porque vemos cómo los sistemas varían, cómo existen distintas soluciones; y es lógico que ello ocurra, porque estamos transitando en un camino delicado y, por cierto, sometido a profundos peligros que nos obligan a centrar la atención para que reconozcamos —como ha ocurrido en algunas de las conferencias citadas— que no puede adoptarse un cartabón único y uniforme sin atenderse en cada caso, en cada lugar y en cada momento histórico en que toca vivir, a las circunstancias que mejor convienen dentro de un mínimo ineludible e insoslayable de justicia social y a los requerimientos y condiciones económicas del país por aplicarse.

También en la Argentina tenemos antecedentes —porque no es un instituto nuevo—, como que ha merecido la atención de gobiernos, de legisladores, de publicistas y de políticos. Los distintos sectores —tanto en el curso de la reunión de esta noche como en el debate originado inicialmente en la Cámara de Diputados— han re-

cordado las contribuciones que en uno u otro sentido hicieron sus bloques partidarios.

En cuanto al partido que represento puedo repetir —respecto a las agrupaciones que hoy le son afines— lo que dijera en el debate de la Cámara de Diputados el doctor Peña y Lillo en el sentido de la comodidad en que se entra al debate respecto a este instituto que hoy votamos. No solamente está inserto en la plataforma partidaria sino que también tuvo el voto de sus representantes en la Convención Nacional Constituyente que en 1957 sancionara la prescripción constitucional antes recordada. También señalaba el doctor Peña y Lillo iniciativas que en el curso de esta noche algún orador tuvo a bien mencionar; las del diputado Méndez Calzada en 1939 y luego en 1941, así como también las prescripciones del laudo Culaciati, donde se acordaba este beneficio recordando así mismo que debía atenderse a las condiciones de la industria y adelantando que el Estado se haría cargo en cuanto a los perjuicios que las variaciones de salario vital y mínimo ocasionaran a los contratistas de obras públicas de las diferencias que surgieran por su aplicación.

También en 1943 se crea dentro del entonces Departamento Nacional del Trabajo una junta encargada de establecer las condiciones a que habría de ajustarse un salario que siguiera las variaciones que ya entonces se preanunciaban en el curso de la vida de los trabajadores, situación que mereció comentarios del doctor Figuerola, cuya figura adquiere después notoriedad.

Pues bien; en este orden de antecedentes surge en nuestro país el decreto ley 33.302/45 tantas veces recordado, sobre el cual me parece oportuno destacar que ponía algunas condiciones que indicaban sin duda alguna mucha prudencia en cuanto a los requisitos que se exigían para el establecimiento del salario vital mínimo y móvil, así como también se hacía eco de las diferencias regionales estableciendo distintas zonas en cuanto a la aplicación.

Esta relación de antecedentes resulta oportuno conjugarla, porque nos introduce en el tema; al mismo tiempo, justificará algunas disidencias que señalaremos concretamente al proyecto materia de análisis esta noche, con las ventajas y con los fundamentos teóricos que se hacen con respecto a la institución que hoy se consagrará definitivamente en nuestro país.

Este es un asunto que casi no merece mayor extensión. Pero resulta oportuno, frente a la comprensión de algunos, destacar ciertos límites que, a mi juicio, no puedo soslayar. Desde luego, tiende a buscar un nivel de vida digno al hombre y a la mujer que trabajan, asegurando la tranquilidad social y facilitando con ello una mejor redistribución de ingresos, asunto con respecto al cual tampoco quiero entrar en materia porque ha sido objeto de mucho análisis en esta Cámara.

Ampara, desde luego, a la familia del trabajador, impidiendo ganancias que a veces son excesivas, aun cuando no debe desalentarse el interés productivo de quien dirige desde el punto de vista técnico o capitalista la empresa, sin que por ello quiéramos entrar tampoco en la zarandeada cuestión del huevo y la gallina, que ha merecido alguna acotación esta noche.

Aumenta la demanda, y éste es otro argumento que debemos tener muy en cuenta; aumenta la demanda efectiva, lo que es indiscutible, y produce desde luego una reactivación económica aun cuando en este asunto debe tenerse extrema prudencia al legislarse, haciendo que esa demanda efectiva vaya hacia sectores productivos. Esto es el famoso asunto del efecto multiplicador.

Acentúa también en los empresarios la urgencia y la necesidad de reducir los costos y colocaría a nuestro país dentro de un proceso avanzado de legislación en consonancia con otros países. Sin embargo, dentro de este punto también cabe alguna reflexión de prudencia si recordamos que desde mucho tiempo antes, concretamente desde la sanción del decreto 33.302, estaban dadas las bases legales que no se concretaron por ninguno de los gobiernos que de entonces aquí se sucedieron, no obstante su heterogeneidad ideológica. Y éste —y no quiero entrar en el tono de la crítica sino de la comprobación objetiva— es un argumento más que debemos tener en cuenta para advertir lo espinoso del camino que estamos transitando y la prudencia con que debemos actuar en este instante. Claro está que pese a todas estas ventajas que desde el punto de vista teórico resultan indiscutibles, y son indiscutidas, que hacen que este instituto no pueda de ninguna manera contrariarse desde dicho ángulo, se requieren también en cuanto a su aplicación práctica otras medidas de tipo complementario que eviten que esta institución, de por sí inatacable, pueda convertirse en ilusoria y significar, dentro del proceso productivo o económico, un retroceso o una ventaja simplemente nominal. Es necesario, coincidentemente con la formulación legislativa de estas previsiones, una reactivación económica y no solamente industrial: una reactivación plena que evite derivaciones perniciosas.

Precisamente, señor presidente, la Organización Internacional del Trabajo —la OIT—, en un informe publicado en 1948, destacaba que este asunto al que me estoy refiriendo es un problema que debe tenerse esencialmente en cuenta en los países poco desarrollados.

Me voy a permitir leer estas conclusiones brevemente. Se afirma en este informe que «no existen motivos para temer un aumento general de salarios mientras el aumento no vaya más allá del punto en que se vería gravemente retardada la acumulación de capitales, y que para evitar el pernicioso efecto aludido, permitiendo un incremento de capitales que asegure el desarrollo potencial económico de las naciones», se

exigen medidas complementarias como una política fiscal monetaria y de precios adecuada; la proporción correcta entre el ahorro y la inversión y una orientación de los gastos de gobierno. Estos requisitos los destaca el organismo internacional, agregando que la política de salarios no puede considerarse en sí misma, sino que es parte integrante de la política económica del país. Marcal Pascucci, en su obra sobre salarios, también insiste en la necesidad de coordinar la política salarial con una política que atienda a la productividad, pues si esto no se diera se haría solamente una redistribución momentánea de tipo inconveniente, es decir, entraríamos en una gama de salarios de tipo nominal, que como muy bien se dijo por algún autor sumamente conocido en economía, lo que el trabajador quiere y requiere no es un aumento nominal de salarios sino un aumento en cuanto a la capacidad adquisitiva que le permita obtener los bienes que hagan a sus necesidades. Es decir, toda esta al parecer fatigosa enumeración de antecedentes la he realizado pretendiendo demostrar o llamar la atención en el sentido de que no obtendremos éxito, sino que, al contrario, los efectos benéficos que pretendemos encontrar pueden ser simplemente ilusorios y hasta contraproducentes, si legislamos de manera matemática, escindiendo este instituto de la vinculación y la relación que puede y debe tener con el campo de la economía; con el campo de la economía desde el punto de vista general y también desde el punto de vista de su aplicación a aquellas empresas que serán quienes directamente tendrán que abonar los salarios. Hablo de empresas como de personas individuales, refiriéndome al ente que necesariamente tendrá que abonar estos beneficios.

Esto no significa una posición de defensa de ningún interés determinado sino la preocupación de no herir de muerte fuentes productoras de trabajo y con ello crear el fantasma pavoroso de la desocupación. Esto lo digo, señor presidente, para sentar una disidencia que tenemos con respecto al proyecto materia de estudio esta noche. Y es que entendemos que quien está mejor capacitado para poder definir esta política salarial es precisamente el Poder Ejecutivo, por su conocimiento integral de todo el campo económico. Y esencialmente, reitero, teniendo en cuenta la productividad de aquellos entes que tendrán que abonar estos salarios. No se crea, señor presidente, que esto significa una posición en defensa de intereses capitalistas. Es una posición basada en leyes económicas inmutables, y lo notable y terminante del caso es que adquiere consagración a través de personas totalmente divergentes entre sí en cuanto a su motivación ideológica. Este asunto de la productividad como requisito necesario para que el instituto no fracase es sostenido desde la voz papal hasta la voz de un comunista, y voy a remitirme a las pruebas. Juan XXIII, en su famosa *Mater et magistra*, tantas veces mencionada y tan imperfectamente interpretada, nos dice al referirse a

la remuneración del trabajo: «Por eso creemos que es deber nuestro afirmar una vez más que la retribución del trabajo, así como no se puede abandonar enteramente a la ley del mercado, así tampoco se puede fijar arbitrariamente, sino que ha de determinarse conforme a justicia y equidad. Esto exige que a los trabajadores les corresponda una retribución tal que les permita un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus responsabilidades familiares; pero exige además que al determinar la retribución se mire a su efectiva aportación en la producción y a las condiciones económicas de la empresa, a las exigencias del bien común de las respectivas comunidades políticas, particularmente por lo que toca a las repercusiones sobre el empleo total de las fuerzas trabajadoras de toda la nación, así como también a las exigencias del bien común universal o sea de las comunidades internacionales de diversa naturaleza y amplitud. Claro está que los criterios arriba expuestos valen siempre y en todas partes; pero el grado en el cual se aplican a los casos concretos no se puede determinar sin respeto a la riqueza disponible; riqueza que, en cantidad y calidad, puede variar, y de hecho varía de nación a nación, y, dentro de una misma nación, de un tiempo a otro.»

Esto quiere decir en buen romance que hay que tener en cuenta el panorama económico concreto sobre el cual se va a operar y no pueden repartirse riquezas que no se producen. Esta opinión, que tiene la autoridad moral de la experiencia milenaria de la Iglesia, es también —notable es destacarlo— compartida por un militante comunista últimamente citado en alguna publicación, Strumilin, cuyas palabras voy a leer: «Sólo el cincuenta por ciento del aumento de la productividad debe reflejarse en el salario. El cincuenta por ciento restante debe aumentar los activos fijos y circulantes como contribución de la población al progreso técnico.»

A su vez, Jacques Malterre, un cooperativista destacado, en la revista «Cooperación» de enero de 1958, coincide con este criterio que obliga a tener en cuenta la productividad y recuerda el caso ocurrido en Francia cuando se dictó la ley de salario mínimo de 1957. Comenta el caso de algunas industrias que no tenían la capacidad económica suficiente para responder a esos nuevos salarios fijados legalmente y sus obreros se abstendían de reclamarlos, aceptando en cambio recibir uno inferior, porque sabían de la imposibilidad económica de la empresa y no querían con la quiebra de la misma tener que afrontar el fenómeno pavoroso de la desocupación.

Esto es especialmente importante en nuestro país, donde los montos de los llamados salarios invisibles o cargas sociales, son evidentemente elevados. En alguna publicación podrá haber discusión con respecto al monto exacto, pero evidentemente, a grosso modo, el monto nadie puede discutirlo. Se recordaba hace algunos días

que el salario invisible en nuestro país llegaba al 50,88 %, carga indiscutiblemente elevada si la comparamos con el 35 %, que es el máximo dentro de los países europeos.

Quiere decir, que éste es un asunto que nos obliga a legislar con suma prudencia para evitar repercusiones que lógicamente desvirtuarían el fin de bien común que todos perseguimos.

De allí pues, señor presidente, que anunciara algunas divergencias. Entre ellas, justamente, la que nace de nuestra convicción de que entre el proyecto que hoy viene como materia de análisis y el proyecto que fuera enviado por el Poder Ejecutivo, este último aparece como más elástico para adaptarse a una resolución eficaz en cada caso, que evitará alguno de los efectos perniciosos que acabo de citar por vía de ejemplo.

Entendemos, efectivamente, que el Poder Ejecutivo está en condiciones de actuar sobre la materia, y he de recordar algunos de los argumentos jurídicos que se dieron en el curso del debate de la Cámara de Diputados. Y era el doctor Peña y Lillo quien recordaba que una cosa es la ley, que tiene carácter genérico, que da los principios generales, y otra el decreto reglamentario, que, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 86, inciso 2º, de la Constitución Nacional, permite al Poder Ejecutivo a veces, por vía del poder de policía, actuar en la emergencia. En este sentido se recordaba la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en ocasión del aumento masivo concedido en 1960, convalidó la actuación administrativa, recordando el poder de policía y algún antecedente de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América.

El Poder Ejecutivo, al efecto, está en mejores condiciones que una decisión legislativa, donde nuestra responsabilidad se diluye en el número, para evaluar, dentro de lo que permite la economía del país y sin desatender necesidades mínimas y el fin buscado por el instituto que hoy votamos, a la solución más justa y conveniente, que evite alguno de los peligros que deben preocuparle y que nos preocupan a todos.

Por otra parte, ya he recordado que no puede escindirse la homogeneidad que debe existir entre la política salarial y la política económica general, máxime si, como en este caso, nos encontramos con que el Poder Ejecutivo está elaborando un plan económico que lógicamente no puede descuidar entre los elementos a aplicarse, una homogeneidad en cuanto a la política salarial y en cuanto a la financiera, dictada directamente por el Poder Ejecutivo. Considero que debe existir una homogeneidad entre uno y otro aspecto y que hay que entregarle a la responsabilidad del Poder Ejecutivo la conducción total del proceso para que no se produzcan distorsiones en uno y otro sentido y se llegue a fracasos que al final de cuentas a nadie benefician y a todos perjudican.

Por otra parte, y para terminar, entendemos inconveniente, señor presidente, la congelación de precios que se decreta. Creemos que resulta por un lado innecesaria e inconveniente y por el otro significa una decisión que puede ser temeraria. Resulta innecesaria, porque el Poder Ejecutivo tiene ya facultades conferidas por la ley de abastecimiento para fijar precios; y si no lo ha hecho todavía sus motivos tendrá, que estimo justificados. Creemos, en cambio, que al haber fijado legislativamente una congelación de precios, estamos entrando en un terreno peligroso, por cuanto significa una decisión definitiva que obligará a una nueva sanción legislativa cuando el volumen inevitable de la inflación torne absolutamente impracticables los precios que hoy son congelados por la sanción que acaba de tomarse. Es mucho más elástico dejar librado al criterio del Poder Ejecutivo, que está ampliamente facultado para congelar precios, si ello fuera necesario, conforme ello las disposiciones legislativas vigentes.

Pues bien, señor presidente; quiero adelantar también que atendiendo a esta preocupación que tenemos, de que pueda suscitarse como consecuencia de la incapacidad económica de algunos entes para afrontar los salarios, una ola de desocupación que lógicamente afectaría con justicia la tranquilidad del país, gravitando en sectores ponderables, creemos quizá oportuno agregar un artículo que atienda a contemplar esa situación caótica que algunas empresas puedan tener.

Este artículo, que podría ser incorporado dentro del capítulo de disposiciones transitorias, lo he proyectado en los siguientes términos: «A petición fundada de cualquiera de los sectores interesados que se tramitara por ante el Consejo Nacional de Salario Mínimo, y previo informe de este consejo y vista a la Dirección General Impositiva, el Poder Ejecutivo nacional queda facultado para acordar, por decreto, a los contribuyentes del impuesto a los réditos una deducción adicional a los importes impositivos para la liquidación de este impuesto equivalente a la cantidad que por el pago de aumento de remuneraciones mínimas efectúen en virtud de lo dispuesto por la presente ley. Este importe, cuyo monto no podrá superar al que resulte de lo abonado en concepto de diferencias por aplicación de esta ley durante un año a partir de la fecha de los ajustes de las remuneraciones, será deducible en los balances impositivos a los efectos de la liquidación del impuesto a los réditos que incluye este período. Para el caso de que él o los balances impositivos del contribuyente arrojen quebranto, esta cifra se adicionará al mismo.»

Creo, señor presidente, que este asunto, sobre cuya justicia no cabe discutir, no trae, además, algunos perniciosos efectos que pudieran crearse en cuanto a la recaudación fiscal, ya que esta recaudación habrá de aumentar automáticamente como consecuencia de la elevación de costos

y de la incidencia de los mismos en los precios en materia de impuesto a las ventas y en las retribuciones que incidan en el impuesto al aprendizaje.

Para terminar, señor presidente, reitero la advertencia que hice al iniciar mis palabras con respecto al clima desfavorable y a la oportunidad en que estamos votando esta ley, y lo hago porque no puedo eludir, por un mandato de conciencia, decir esto aquí, esta noche, entre mis pares. No se trata del tema en sí, sobre el cual tenemos opinión formada, ni se trata siquiera de su tratamiento por vía legislativa, asunto al cual diéramos nuestro voto favorable en su oportunidad. Se trata de la urgencia y del escaso tiempo que hemos tenido para traer una opinión seriamente fundada. Y se trata también, esencialmente, de que una cosa es la preocupación legislativa y otra el clima en que vivimos. Lo que no puede admitirse, a mi juicio, es que pretenda alterarse la paz o que pretendan atropellarse derechos individuales; que en nombre de reclamos, cuya justicia nadie puede desconocer, se entren a lesionar otros derechos también respetables y estén subyaciendo, junto a reclamaciones legítimas, algunos motivos que nadie puede negar que tienen también designios e inspiraciones claramente políticas. Yo tengo la certeza, señor presidente, de que en la inmensa mayoría de la clase obrera y de la clase media, que nosotros integramos y que están, sin duda, violentamente castigadas por la situación que vivimos, nadie quiere la violencia ni la fuerza o la intimidación como motivo que justifique o que origine una decisión legislativa que todos sabemos estaba en nuestra inspiración, como lo dijimos anteriormente.

Nadie quiere apelar a argumentos de este tipo, nadie que razonablemente desee la paz y la tranquilidad social. Hace pocas horas monseñor Caggiano produjo un sensato y a la vez dramático documento llamando a la fraternidad argentina. Este llamado siempre encontrará eco en el Senado de mi país, donde nos sentamos hombres que no venimos representando intereses espurios y que si hemos llegado aquí es porque hemos sabido mantener fidelidad a nuestras convicciones. Hemos sabido decir esta noche lo que cada uno de nosotros pensamos, aun a riesgo de que en el día de mañana encontremos críticas en campos opuestos, porque apoyamos esto o porque negamos lo otro. No nos importen las críticas en tanto y en cuanto cumplamos con nuestra conciencia y en tanto y en cuanto atendamos el interés general, dejando de lado todo aquello que signifique mezquindad o egoísmo.

Inspirado en estos sentimientos, me permito exhortar a mis colegas y a aquellos que fuera de este recinto están realizando un juego peligroso, que puede encender tempestades de imprevisible vaticinio. Es el momento en que más que nunca necesitamos ofrecer una imagen argentina de paz, de sensatez y de cordura.

Es el momento en que tenemos que pensar más en nuestros deberes que en nuestros derechos; es el momento en que tenemos que realizar el más tremendo sacrificio, el de nuestras pasiones, para juntarnos en aquello que nos une: en el interés del país, que es también el de todos.

Yo confío en que Dios habrá de iluminarnos a todos. Esto no significa arriar ninguna bandera. A esta inspiración la sirve únicamente un auténtico motivo de patriotismo que anida en todos los sectores, porque no es patrimonio de nadie, sino inspiración común argentina. Pero si la voz de la concordia fracasa, si se antepone la fuerza a la razón y a la convivencia, no es aventurado suponer a qué extremos llegaremos y cómo habrá de fracasar y zozobrar el barco en lo que deseamos sea una tranquila y feliz travesía.

Yo espero, señor presidente, que nosotros desde aquí sigamos dando un ejemplo, como lo hemos hecho, sin duda alguna, hasta este instante, para que podamos trabajar y llevar a esta tierra generosa al destino mejorado que quisiéramos dejar como el mejor legado a nuestros hijos.

Nada más.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Estamos terminando un debate que figurará prestigioso en los anales del Senado argentino. Discutimos una ley muy importante, por lo que tal vez convenga como prólogo que hagamos una reflexión sobre el proceso legislativo.

¿Cuándo se inicia este proceso? Cuando hay un requerimiento público. Ante una necesidad social insatisfecha se requiere una norma coactiva obligatoria que hace a la eficacia y a la justicia del orden jurídico. Es el presupuesto de hecho de toda legislación. En la más reciente doctrina jurídica, da lugar al primer término de la ecuación jurídica de Geny, *le donné*. lo dado por el medio social, que reclama satisfacción jurídica. Para satisfacerla hay que dictar una ley. Incumbe a los legisladores estar atentos a las aspiraciones sociales, para recoger los requerimientos del ambiente y poner en ejercicio la facultad legislativa.

Pero luego viene la tarea propiamente técnica; la ley debe ser acertada, es decir deberá dar satisfacción al requerimiento social; la ley debe ser clara para su aplicación por el pueblo, que debe acatarla, y para los órganos que deben interpretarla aplicándola, sean administrativos o judiciales. Esto hace a la técnica jurídica. Además, el legislador debe preocuparse para que no tenga repercusiones desfavorables o imprevistas.

La ley dictada así se inserta en todo el complejo legal, debe armonizarse con él, tiene repercusiones que alcanzan con mayor o menor intensidad a toda la estructura social. Puede curar un mal engendrando otros; de ahí que la tarea del legislador no es solamente la de auscultar el medio social, sino encontrar el instrumento

idóneo para satisfacer el requerimiento de ese medio social.

Nosotros tenemos que hacer el examen de la materia en cuestión a la luz de esas nociones. ¿Qué es lo dado? La disminución creciente del salario real, la distribución inequitativa de la renta nacional, la disminución del bienestar, el estancamiento en la producción, la perturbación social, el desmedro en la salud; repercusión desfavorable a largo plazo sobre el valor humano, que es el más importante de todos los valores.

Las civilizaciones han sido instaladas por el hombre aun en los medios menos propicios, cuando el hombre como valor humano supo vencer la resistencia del medio.

¿Cuáles son los remedios? Aquí nace, señores senadores, como en todas las oportunidades en que se debe legislar, el encuentro de las opiniones, el entrecuchar de los conceptos. No todos tenemos la misma formación mental. Si en los hechos simples de la vida se dividen las opiniones, es natural que haya opiniones dispares en cuestiones tan trascendentes como las que hacen al bienestar social, a la economía, al progreso y a la justicia.

No dejarán de levantarse, a través de los tiempos, los que sostienen que la intervención legislativa en contingencias como la presente suele perjudicar en vez de traer un beneficio y un remedio. Y parten del presupuesto de que las fuerzas económicas, libradas a su propio impulso, siguen el camino mejor para el progreso social. Es el famoso criterio del *laissez faire, laissez passer*. Es una idea retrógrada que no está a la altura de los tiempos. Afortunadamente, en el curso de este debate no ha sido recogida por ninguno de los señores senadores. Nosotros suponíamos que tampoco podía haberlo en ningún cuerpo legislativo que esté a la altura de los tiempos. Sin embargo, aparece contradicha en el debate de la Cámara de Diputados por la opinión expresada en nombre de la Unión del Pueblo Argentino (UDEPA).

Según esa fuerza política, que está representada en esta Cámara por un senador que no comparte ese criterio, sería peligroso y de consecuencias funestas pretender influir legislativamente para mejorar el salario de los trabajadores con un mínimo vital y móvil.

Y hay que decir que en la conducta de esa nueva fuerza cívico-política argentina existe una flagrante contradicción, porque cuando el general Aramburu ocupaba la presidencia provisional de la República no procedió con el pensamiento que ahora recomienda a los radicales del pueblo, sino que el 17 de febrero de 1956 dictó el decreto ley 2.739, cuyo artículo 1º prorrogaba los convenios laborales, el 2º aumentaba el diez por ciento de todos los salarios, fijando el artículo 3º un salario mínimo de 1.120 pesos.

Debían haber confesado el *mea culpa*, si es que aquella medida que dictaron en su oportu-

nidad era tan impropia y perjudicial para el proceso económico argentino, porque si analizamos su repercusión en valores reales, es tal vez de mayor intensidad que la que estamos considerando en este momento.

Hemos escuchado también —aun dentro del camino del encuentro, porque coinciden los señores senadores representantes del MIR con nuestro pensamiento en cuanto a la necesidad de dictar una ley de salario mínimo, vital y móvil—, una crítica acerada al sistema, entendiendo que no se puede aplicar sino dentro de una política de promoción y desarrollo.

Y en esto hay también una rectificación de conducta, porque el 13 de mayo de 1958, a los pocos días de instalado el presidente Frondizi en la Casa de Gobierno, daba un aumento masivo de salarios, cuando por cierto no podía aún haber desenvuelto ni desarrollado una teoría de resurgimiento nacional en la faz económica, que había prometido como candidato como una artillería electoral, teoría que no se evidenció en el gobierno, en ese ir y venir de ministros, que con ideas económicas y criterios distintos pasaron por la Casa de Gobierno.

No es posible admitir a esta altura de los tiempos la noción de indiferencia del Estado en el proceso social. Hay naciones más o menos intervencionistas, pero el intervencionismo estatal se presenta con mayor o menor intensidad en todos los Estados. Sobre todo, no es cierto que el progreso social esté en relación directa con la no intervención. Si paseamos nuestra mirada panorámica por la economía del mundo, nos encontramos con el ejemplo de Suecia, uno de los países que tiene mejor estructurado su régimen social y que, sin embargo, dentro de la precariedad de sus medios físicos, constituye una sociedad rica y floreciente. Francia ha entrado por la vía del progreso social y ya está muy por encima del margen de costo social que se ha indicado en este debate.

Se quiere objetar con el ejemplo de los Estados Unidos, y es necesario que detengamos nuestra atención en él para recoger enseñanzas. Algunos de nosotros nos hemos puesto en contacto con ese pueblo pujante y progresista. Hemos visto en él una acumulación de riqueza asombrosa, pero esto mismo obliga a calar más hondo, para desentrañar si la acumulación de la riqueza es un presupuesto de reparto óptimo, o si, en realidad, hay dos problemas distintos que debemos encarar acumulativamente, en cuanto el uno influye sobre el otro. Y, además, individualmente, para apreciarlos desde el punto de vista del proceso de producción y de su reparto.

Nadie duda de la inmensa acumulación de riqueza lograda por ese país magnífico. ¿Pero nosotros podemos afirmar que así como es un ejemplo en la acumulación de la riqueza, lo es en el reparto? Si nos ajustáramos a ciertos datos, la respuesta sería afirmativa. Si atendiéramos

mos a cómo se distribuye la renta nacional entre el capital y el trabajo, diríamos que es un país que se exhibe como ejemplo de justicia social.

Acertadamente, un comentarista argentino ha hecho un análisis en el cual debemos reparar. Se dice que en los Estados Unidos la renta del trabajo per cápita logra límites enormes, pero lo que no se dice es que en los Estados Unidos hay sueldos enormes. De tal manera que si se acumulan los sueldos de un dirigente industrial que tiene 10.000 dólares, con los de un obrero, que gana 200 dólares, y se hace el término medio, llegamos a la conclusión de que el término medio en los Estados Unidos son 5.100 dólares. Pero eso no impide una gran desproporción en los sueldos altos y la miseria en los sueldos inferiores.

Acaba de publicarse un libro muy interesante, traducido al castellano; un libro de Michael Harrington que el Fondo de Cultura Económica publicó en 1963 y que en inglés se intitula: *La otra América; la pobreza en los Estados Unidos*. En él se dice que en los Estados Unidos hay 8 millones de ancianos que no pueden permitirse hoy una vivienda decente, ni una nutrición apropiada, ni un cuidado médico adecuado, sea preventivo o urgente, ni una recreación necesaria. De un informe del Senado de los Estados Unidos, que tres millones de personas viven en chozas, cobertizos y casas de veindad; que dos millones de braceros viven y trabajan en condiciones inhumanas; que 1.200.000 neoyorquinos carecen de medios para las necesidades básicas: alimentos, albergue, atención médica mínima y que llenan los requisitos para la asistencia pública. En suma, en esa gran democracia progresista existen treinta millones de personas que no llegan a un nivel vital adecuado a aquella sociedad tan avanzada.

Quiere decir, señores senadores, que no nos podemos olvidar del problema del desarrollo, pero reparamos que hay otro problema subyacente, y es que el desarrollo sirve para que el común de las gentes viva en un nivel satisfactorio de bienestar, de salud, de recreación y de progreso.

Leyes como la que estamos considerando, indudablemente que no tienden por sí a aumentar la masa por repartir, pero influyen sobre la distribución de la renta nacional, y eso ya es bastante. La sociedad no puede desentenderse de que el salario satisfaga un mínimo de bienestar, de salud, de posibilidades de cultura dentro del ámbito familiar en que se asegura la continuidad de la vida y de la sociedad. La prueba está en que la inmensa mayoría de este Senado...; me corrijo, todo este Senado comparte al respecto el mismo pensamiento. Y hasta se habla el mismo lenguaje.

Escuchábamos recién a un senador expresar cuál era la doctrina justicialista, y a mí, señores senadores, me parecía un antiguo idioma.

Desde que era un niño actuó en la Unión Cívica Radical, y nosotros decíamos con respecto al obrero y a la reivindicación del obrero lo que en este recinto se enunciaba como doctrina justicialista. Cuando ese senador hablaba, yo pensaba: ¡qué antiguo y conocido es su lenguaje; el senador que se expresa en estos términos, sin duda, en su tiempo fue un buen radical!

Sr. Flores. — Alguna diferencia hay en cuanto a la serie de realizaciones, que no pudieron llevar a cabo los otros partidos.

Sr. Fassi. — Sabe el señor senador que no tuvimos oportunidad, y sabe el señor senador que en este momento, en que estamos en el gobierno de la República, no nos negamos a ninguna ley de progreso social.

Sr. Flores. — Lo felicito en nombre de la doctrina justicialista.

Sr. Fassi. — Al legislar sobre el salario mínimo, vital y móvil nosotros cumplimos un precepto constitucional: ponemos en vigencia el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuya primera parte tiene que ser interpretada a la luz de la segunda, porque cuando habla del trabajador no pierde de vista a la familia. De manera que desde ya anticipo que estamos en la corriente del espíritu de la Constitución cuando nos preocupamos primordialmente del salario vital mínimo y móvil no con respecto al trabajador aislado, sino con respecto a la unidad familiar.

Cumplimos, además, señor presidente, con una obligación política. No deseo cansar a la Honorable Cámara leyendo los programas partidarios de los últimos cuarenta años, porque en todos ellos aparece como un requerimiento de la Unión Cívica Radical dictar una ley de salario mínimo, vital y móvil.

Se ha introducido en el debate la duda de que ése haya podido ser el motivo impulsivo de nuestra decisión. Y cuando se enunció ese criterio yo me dije: ¿pero habrá entrado de tal manera en la mentalidad de los argentinos que el programa es una mentira para no cumplirse, que ni siquiera nos hacen fe cuando decimos que venimos a cumplir con el programa de nuestro partido? (Aplausos.) No, señores senadores. La democracia se funda en el cumplimiento de los programas. El pueblo no vota hombres sino programas, y si los hombres que llegan con un programa al gobierno no lo cumplen, y si esa conducta es reiterada por otro partido, vendrá una gran desilusión popular y el pueblo preferirá que se sorteen los gobernantes y no que se lo complique en la complicitad de una elección en que va a recibir el mandato quien promete una gestión y cumple las ideas completamente distintas a las que ha enunciado en su función programática y de campaña electoral.

Nosotros, los radicales del pueblo, cumpliremos íntegramente nuestro programa.

Se ha afirmado también que este debate se suscita como un arbitrio divisionario de la CGT.

Nada más lejos de nuestro espíritu. No podemos entender cómo la sanción de una ley de salario mínimo vital y móvil requerida por todo el proletariado argentino puede ser un motivo de división de la central obrera, salvo que prive la idea de que esa central obrera está al servicio del caos y de la perturbación pública y no de los intereses de los proletarios.

Hay sobre esta iniciativa largos y copiosos antecedentes de mi partido y de los demás partidos políticos. No es necesario que me detenga en su enumeración porque ya lo ha hecho el miembro informante, señor senador Martínez. Hay voces coincidentes que vienen de todos los sectores de la opinión, de todos los sectores del pensamiento, dentro y fuera de nuestras fronteras. Se ha analizado el criterio de la Iglesia Católica, que ha tenido una evolución, que se ha ido adecuando hasta lograr una fórmula cada vez más justa. En la encíclica *Rerum novarum* se analizaba el salario justo, que era el suficiente para asegurar la subsistencia del obrero sobrio y honrado; y ya Pío XI, en la *Quadragesimo anno*, aclaró que es el necesario para cubrir el mínimo de subsistencia, considerando en ella manutención del obrero y la familia, posibilidades de la empresa y principalmente el ahorro. Es decir, aparece el ingrediente familia. Así, el requerimiento social viene como consecuencia no solamente de las circunstancias contingentes por las cuales pasan las masas laboriosas argentinas, sino también de un pensamiento que trasciende los límites puramente materiales para entrar también en la esfera espiritual de la Iglesia.

De lo que se trata, para apoyar nuestro proyecto, es de que hayamos acertado en la técnica jurídica, porque hay un acuerdo esencial en cuanto al requerimiento social. Y yo afirmo, señor presidente, que de los proyectos elaborados en los últimos tiempos, éste es uno de los menos objetables, es de los técnicamente mejores, que ha facilitado la labor legislativa en gran medida y que ha de ser un instrumento útil a los fines perseguidos. Ha sido elaborado por el Ministerio de Trabajo, que utilizó sin duda la experiencia que ofrece el derecho comparado y la experiencia nacional, y que debe haber contado con el concurso de técnicos, porque sólo éstos habrían acertado en la redacción.

La Cámara de Diputados, olvidando lo episódico, en un gran debate lo mejoró; debate en el cual resultó aun útil el ingrediente de UDELPA, porque es conveniente que nosotros nos enfrentemos con los últimos representantes del liberalismo a ultranza para ratificarnos en nuestro criterio de que estamos en el buen camino. Ha habido inclusive un debate en la prensa periódica.

La ley es clara, meditada, técnicamente inobjetable; lo que por cierto, señores senadores, no significa eludir dificultades de interpretación.

Muchas veces los juristas han puesto en tela de juicio la idoneidad de los legisladores para

sancionar leyes. Muchas veces nos quieren someter a la tutela de los juristas y hasta en alguna ocasión se ha proyectado adosarnos un organismo que realice la tarea para la cual no nos reputan adecuados.

Y es conveniente que alguna vez los legisladores demos demos que no necesitamos tal tutela. El Código Civil alemán comenzó a redactarse en 1874 por una comisión de once juristas. Figuraba en ella el más eminente romanista germánico, Windscheid; el más grande de sus germanistas, Wolff; tres magistrados en representación de Prusia, Baviera y Westfalia; tres de la región sometida al código prusiano y dos al código napoleónico. Consultaron a ilustres corporaciones de derecho, a las personas entendidas y a todos los tribunales de justicia. Trabajaron 13 años, escribieron 19 volúmenes de 12.300 páginas. En 1887, 13 años después, se redactó el código. El Consejo del Imperio lo imprimió y sometió a todas las críticas, y en 1890 se nombró una segunda comisión que terminó su tarea en 1895. En 1896 se nombró una nueva comisión de 21 miembros, y el Código Civil alemán se promulgó en 1898. Si hay una obra en el mundo jurídico que sea el resultado de una técnica selecta es el Código Civil alemán. Si hay un proceso largo de redacción de un código es el del Código Civil alemán, y, sin embargo, señores, no están las dos bibliotecas de la famosa anécdota. En la interpretación del Código Civil alemán se sostienen las más distintas interpretaciones y se multiplican los trabajos científicos que, sobre cualquiera de los artículos, sostienen puntos de vista diferentes.

Quiere decir, señor presidente, que no podemos nosotros suponer la realización de una tarea tan perfecta, la adecuación de la terminología jurídica, tan exacta y tan certera, que la ley que estamos dictando no de lugar a alguna dificultad interpretativa. No obstante, afirmo —y no ha sido desmentido en el curso del debate— que es de una redacción clara, diáfana, sencilla y de una aplicación que no tendrá mayores dificultades.

Queda por analizar la ley desde el otro punto de vista: el de su repercusión. Y es en esta materia en que se han acentuado las críticas. Se olvida su finalidad, que no es aumentar la riqueza, sino que es distribuirla mejor. Lógicamente entraña riesgos, pues toda reforma social los entraña. Siempre, cada vez que se ha intentado algo en el proceso social, han sonado las voces agoreras, sobre todo en la materia de salarios. Entre mis lecturas un tanto olvidadas, yo recuerdo una polémica que sostuvo en Londres Carlos Marx con los sindicalistas de su época cuando sostenían el pensamiento de que todo aumento de salarios significaba un proceso inflacionario en espiral. Y Marx, que además de las ideas que ya han sido superadas por los tiempos, escribió páginas magníficas, concluía en esa polémica que, indudablemente, el salario en alguna medida iba a repercutir sobre los cos-

tos y, en consecuencia, iba a influir sobre los precios. Pero él afirmaba que mientras los salarios beneficiaban a los trabajadores, los costos refluían sobre toda la colectividad y significaba por lo tanto una redistribución más justa de la renta nacional. Más adelante explicitaré que éste será el resultado de la ley que estamos considerando. Pero como desde aquellas polémicas iniciales ya está presente la idea de que se trata de una redistribución de la renta y va a haber una repercusión sobre los costos, es necesario que en leyes de esta especie los legisladores sean cautos. No podemos improvisadamente dar lo que piden algunos sectores —23.000 pesos— porque podría ser un aumento que repercutiera desfavorablemente sobre la economía en general y, en consecuencia, peligroso para la colectividad, que está por encima de los intereses particulares que la componen. Si sólo se tratara de dar, nosotros tendríamos que acusar de mezquinos a quienes piden 23.000 pesos y, en ese tren, podríamos dar cincuenta, sesenta o setenta mil pesos. Pero debemos admitir que lo que corresponde es que se establezca como salario lo que es justo y posible.

Por eso, señores senadores, no se puede decir que ésta es una ley que se da bajo presión, porque si obedeciéramos a presiones estableceríamos el salario mínimo vital y móvil en 23.000 pesos y si procediéramos por motivos puramente electoralistas nos sumaríamos a las corrientes de los que quieren dar más agregando más a la suma mayor que se propone.

Debemos ajustarnos a lo que entendemos adecuado, y con ello destruimos el cargo de la presión. No damos la ley que se nos pide, sino la que debemos dictar según nuestra conciencia de legisladores.

Se ha afirmado también que tal vez habría convenido demorar la ley unos días, y yo reconozco que eso habría servido para elaborar mejor nuestros discursos pero no para esclarecer más nuestros criterios ni para introducir en el dictamen modificaciones sustanciales. La vuelta del dictamen a la Cámara de Diputados significaría una gran desilusión, porque no faltan voces que anuncian que el Congreso no está en la honesta tarea de dictar una ley, sino en la de entretener con un debate. Favorecería a la corriente que critica al parlamentarismo por lento, cuando no es así.

Exhibo como un mérito la celeridad del Senado argentino, sobre todo, luego del debate serio a que estamos asistiendo, y en el que se han recogido y se van a recoger todas las críticas que se han formulado. Se afirma que ésta es una ley de efectos inflacionarios. Yo no descarto totalmente esos efectos, pero señalo una inconsecuencia y una contradicción.

Inconsecuencia: los mismos medios que más la critican son los que han apoyado la política cambiaria de los últimos tiempos; son los que han exigido la adecuación sana del precio de la moneda nacional al precio del dólar. Este es-

taba en un precio artificial desde Perón. Significaba una política de redistribución de la renta nacional en perjuicio de las fuentes madres y primarias de nuestra producción. Era justo rectificar un valor artificial de nuestro signo monetario, pero era una decisión inflacionaria el desencadenamiento de una nueva distribución de la renta nacional en desmedro de los ingresos y del salario real. ¿Por qué la aplaudieron los que ahora protestan por una posible inflación, o por una casi segura inflación, que restablezca la parte del trabajador en la distribución de la renta nacional? ¿No era grave cuando disminuía el nivel de vida de cada hombre argentino que vive de su trabajo? ¿Por qué, entonces, es tremendo y hay que resistirla cuando restablece ese nivel de vida?

Otra contradicción: no quieren la congelación de los precios; ¿por qué quieren congelar los salarios? ¿Por qué no admiten el salario móvil? No invertamos el concepto de que el salario no es una mercancía, en sentido peyorativo para aquél, sosteniendo que mientras es intangible la relación costo-precio, no es intangible la relación salarios-recursos suficientes. Si hay una relación costo-precio, debe haber una relación salarios y recursos suficientes para mantener en condiciones óptimas de productividad, salud y reproducción a la masa trabajadora.

Sin perjuicio de que esta ley también tiene efectos saludables con relación a la economía general.

Nosotros no estamos en la política de la irremediable lucha de clases. Por el contrario, creemos que hay una coincidencia esencial en los intereses de todas las clases, y estamos ratificados en nuestro criterio por lo que ha pasado en los últimos tiempos. Al obrero se lo ha estado desmejorando constantemente por todos los gobiernos hasta llegar a una situación de subconsumo. ¿Y quiénes son los perjudicados con ese subconsumo? ¿Solamente los obreros? No; también los productores, los empresarios, porque al faltar el consumo se ha producido la crisis de la industria, la superproducción, no porque se arrojen a la plaza abundantes mercaderías sino porque no hay quienes puedan comprar las pocas que se están produciendo.

Y yo quiero, señor presidente, para que se comprenda la justicia de esta ley, ratificar lo que he enunciado con toda deliberación. No es cierto que se haya estado mejorando en la Argentina los jornales de los trabajadores en alguna oportunidad. Se los ha estado desmejorando constantemente, y lo demuestro con esta publicación de la CGT que es, en consecuencia, imparcial. En esta publicación se menciona el salario nominal del obrero industrial y la evolución del costo del nivel de vida y del presupuesto de la familia tipo. Voy a tomar algunos años claves para que se vea cómo el desmejoramiento ha sido paulatino y constante. Y tienen de ello responsabilidad todos los gobiernos que se han sucedido en este país.

En el año 1952 el costo de la vida con respecto a 1943 había alcanzado el número índice 562,9. El número índice de aumento de salario del peón en el año 1952 alcanzó a 572,5; es decir, superaba al índice costo de la vida en 9,6; pero el salario índice del oficial sólo alcanzó a 498,1, es decir, desmejoró respecto al año 1943 en 64,8. Significa que en ese momento álgido del gobierno del justicialismo, mientras se había mejorado un poco al trabajador indiferenciado, se rebajaba considerablemente el salario real del trabajador de oficio...

Sr. Ríspoli Román. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Fassi. — Con mucho gusto.

Sr. Ríspoli Román. — La verdad es, señor senador, que no tengo ninguna estadística a mano...

Sr. Fassi. — Se la puedo facilitar, porque la tengo sobre mi banca, y es de la CGT.

Sr. Ríspoli Román. — No dudo absolutamente de lo que dicen sus estadísticas, pero quiero referirme a una pequeña experiencia. Tengo para mí que en el año 1943, con salarios más altos, según la estadística, los obreros no comían ni pan, y en el año 1952 nuestro obrero bebía champaña, y eso lo sabe todo nuestro pueblo, señor senador. Esa es la aclaración que quería hacer.

Muchas gracias.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Aun a riesgo de entretener a la Cámara, voy a relatar una anécdota. Efectivamente, el señor senador es veraz. Allá en su provincia, por aquella época pretérita, habían matado al obrero Aguirre en la Casa de Gobierno, y para acallar el estado de indignación pública se dio una copiosa retroactividad, de una sola vez, y he visto en Monteros a los obreros diciendo: «deme un litro de *champagne*». Pero ésa no era la realidad argentina de la época; era un episodio. La realidad está en las estadísticas, y las de la CGT, precisamente, demuestran que en el año 1952 el peón había aumentado su número índice en 9,6 y el trabajador de oficio, el albañil, el carpintero, el herrero, en fin, todos los que sirven al progreso social porque se han superado para aprender una técnica, estaban 64,8 por debajo con respecto al índice de nivel de vida. Y esto, insisto, surge de una publicación de la CGT, cuya inserción en el Diario de Sesiones pediré. Ahora bien, si la central obrera está en contra del justicialismo, vaya por cuenta de ella y no del senador que habla.

Sr. Flores. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Presidente. — El señor senador Flores le solicita una interrupción. ¿Se la concede, señor senador Fassi?

Sr. Fassi. — Sí, señor presidente, y al señor senador Lovaglio también, con mucho gusto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Flores.

Sr. Flores. — Quisiera que me explicara, señor senador, qué razón psicológica es la que po-

día dar lugar a que una gran parte de la masa trabajadora argentina se sintiera satisfecha con su condición de vida en aquel entonces.

Sr. Fassi. — Le voy a explicar por qué. Ahí está nuestro disenso con el justicialismo, si es tal como lo presentan los señores senadores.

No es un criterio de la justicia social. Nosotros en esto no vamos ni a la zaga ni pretendemos mejorarlos a ustedes. Lo que a nosotros nos alejó del peronismo fue la supresión de la libertad de prensa, de la libertad de la cátedra y de la autonomía universitaria, la regulación de la representación popular por leyes electorales tramposas, el plan Conintes, el endiosamiento del gobernante al son del bombo que retrasaba la madurez política. La escuela era un elemento de propaganda donde se formaron los niños que ahora son ciudadanos. Los opositores no teníamos tribuna ni oportunidad de ponernos en contacto con la opinión del país.

El Congreso no daba el ejemplo que se da en esta oportunidad. Se componía de una mayoría masiva que nos limitaba el término de nuestras exposiciones y que llegó hasta a suprimir en el Diario de Sesiones la publicación de nuestros proyectos para que la opinión pública del país no los conociera. Es decir, que cayó una ola de oscurantismo y de falta de información sobre la República. Y es necesario que nosotros ilustremos las conciencias, sobre todo porque después que terminó esa noche oscura de nuestro país vino el desacierto del gobierno de Aramburu y la desventura del gobierno de Frondizi. Esa es la herencia que tenemos nosotros que soportar.

Sr. Flores. — Con eso no me ha terminado de explicar el señor senador.

Sr. Presidente. — Señores senadores: han quedado unificados los pedidos de interrupciones. Tiene la palabra el señor senador Lovaglio y después el señor senador Rísoli Román.

Sr. Lovaglio. — Le iba a preguntar al señor senador Fassi más o menos lo mismo que le preguntó el señor senador Flores. ¿Por qué la CGT, a pesar de la estadísticas según las cuales se estaba tan mal, quiere volver a esa época? Yo quisiera que el señor senador me hiciera entender a mí, por otra parte...

Sr. Fassi. — También se lo voy a explicar. No tengo ningún inconveniente.

Sr. Lovaglio. — Lo que quiero significarle al señor senador es que nosotros, los justicialistas, no estamos haciendo lo que hacían ustedes. En nuestra época ustedes no enfrentaban el debate; se iban cuando no les convenía.

Sr. Fassi. — ¡Qué nos íbamos a ir! Lea los Diarios de Sesiones.

Sr. Gadano. — Nos iban, señor senador.

Sr. Presidente. — Le ruego a los señores senadores que no hagan interrupciones sin que se les conceda el uso de la palabra. La Presidencia va a admitir estas interrupciones pero advierte que el tema que se está tratando no es el que se refiere a las gestiones realizadas durante la época del justicialismo.

Sr. Fassi. — Hace muy bien en llamarme al orden el señor presidente. Si me permite contesto y después sigo.

Yo quiero decir que algunos dirigentes de la CGT de ahora están formados en aquella escuela, en la de antes, y ahora hay que dar elecciones. En cambio, antes los digitaban desde arriba y eran eternos. Ahora quieren mantenerse en las funciones hasta la eternidad, sin elecciones. Es por eso que añoran aquellos tiempos en que eran digitados y no elegidos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra para una interrupción el señor senador Ramírez.

Sr. Ramírez. — Es para decir dos palabras con referencia a las manifestaciones del señor senador Fassi, en cuanto mencionó a los desaciertos del general Aramburu de los que yo hago cómplices a todos los partidos políticos, porque no debe olvidar el senador Fassi que el general Aramburu gobernó con una junta consultiva integrada por todos los partidos políticos.

Sr. Fassi. — Le hago notar el significado de las palabras junta consultiva, de lo cual surge la respuesta a su interrupción: ellos deliberaban y el gobierno hacía lo que quería. *(Risas.)*

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rísoli Román para una interrupción.

Quiero manifestar a los señores senadores que está anotado el señor senador Rísoli Román, luego el señor senador Flores y, posteriormente el señor senador Astudillo.

Sr. Rísoli Román. — Quería expresarle al señor senador Fassi, en lo que se refiere a esa falta de libertad que nos achaca, que pienso y tengo para mí un gran convencimiento de que la única libertad que no permitimos fue la de atentar contra el pueblo argentino. Fue una reacción contra la Unión Democrática, en la cual iban del brazo los comunistas, el señor embajador de los Estados Unidos y ustedes.

Sr. Castiglione. — ¿Y la clausura de diarios?

Sr. Fassi. — Generalmente los que atentan contra la libertad tienen el pudor de dar una excusa. Así hubiera habido un error inicial en la Unión Democrática, no era razón para impedir la libertad de la ciudadanía argentina, ni para cerrar la prensa libre ni para excluir de sus cátedras a los profesores universitarios que no se ponían de rodillas. Un error no justifica la suma de errores, y menos la tiranía.

Pero yo pediría a los señores senadores que volviéramos al tema. Podría contestar las interrupciones de cada uno de los señores senadores, pues lamentablemente yo las he provocado y...

Sr. Presidente. — La Presidencia se hace cargo de su reflexión, pero entiende que corresponden las interrupciones para que el debate quede equilibrado y siga su curso.

Sr. Flores. — Yo solamente quería destacar que, a mi juicio, el señor senador por la Capital no ha respondido satisfactoriamente a la pregunta que le hacía respecto a la razón por la cual una gran mayoría de la masa trabajadora

argentina daba su aprobación a la política del gobierno justicialista, y continúa aún firmemente adherida a los ideales de esa doctrina. Y digo que no ha dado satisfacción porque los argumentos que ha esgrimido llevan involucrados un punto de vista que yo llamaría un poco oligárquico, en cierto sentido.

Sr. Presidente. — Ruego no hacer alusiones de tipo personal.

Sr. Flores. — No, señor presidente, es un punto de vista.

Sr. Presidente. — Ningún senador puede hacer calificaciones.

Sr. Flores. — Un punto de vista oligárquico significa un punto de vista vinculado a criterios muy de minorías. Así dejó perfectamente aclarado cuál es el sentido con que empleo la palabra.

Porque sostener que el pueblo argentino de entonces y la masa trabajadora de entonces y de ahora no pudo ver la realidad, se dejó engañar como si fuera incapaz de comprender, vio claro y limpio lo que a juicio de una minoría era oscuro, yo entiendo que eso significa hacer un juicio injusto y desfavorable para el buen criterio, para el alto criterio de un buen sentido político que han demostrado siempre los trabajadores argentinos. De manera que me parece que su respuesta hasta cierto punto viene a ser ofensiva para la masa trabajadora de la República, que estuvo adherida a esa política y que sigue estando en buena parte con la doctrina justicialista, a la cual nosotros pertenecemos.

Así mismo quiero expresar lo siguiente: el señor senador ha señalado cosas que a su juicio son desaciertos. Se ha referido a la falta de libertad. Yo sostengo que para formular juicios sobre episodios de una época hay que hacer también un poco la comparación con las que le preceden o le siguen. Si algunas imperfecciones hubieran existido, en absoluto creo que nadie pueda pretender gobiernos ni acciones perfectas, si algunas imperfecciones hubieran habido como la que dicen de que había falta de libertad para los partidos u otros; pero todos los partidos políticos actuaban, las elecciones eran libres y aquéllos podían elegir sus representantes.

Sr. Gamond. — ¡Con la diferencia de que un solo partido usaba la radio los 365 días del año y los demás no podíamos hacerlo!

Sr. Presidente. — No interrumpa, señor senador.

Sr. Flores. — Si comparamos eso con otras elecciones posteriores en las cuales un partido, con una gran masa adherida a nuestra doctrina, no ha podido expresarse ni concurrir a los comicios, vemos que cualquier defecto que hubo entonces resulta pálido, virtualmente nulo en comparación con lo que después ha sucedido.

Y a la vez, con alguna experiencia y derecho por haber desempeñado funciones ejecutivas durante la época de 1946 a 1955, y mi-

rando el ámbito más reducido donde desarrollé mi acción, puedo afirmar que todos los partidos políticos en mi provincia tuvieron la más amplia libertad mientras gobernaron los hombres que siguen la doctrina justicialista. Esa fue una realidad efectiva e indiscutible.

Si se citan defectos, no creo que sea éste el momento, cuando estamos tratando un problema de actualidad que interesa profundamente a la masa trabajadora, para que hagamos un amplio debate sobre lo ocurrido hace años. Pero ya que el señor senador lo ha querido y ha mencionado defectos, ¿por qué no recuerda también las grandes realizaciones de aquella época, que indudablemente merecieron entonces la aprobación del pueblo y creo que aún la siguen mereciendo? Ya que se quiso hacer un poco de historia, hubiera sido mejor hacerla completa y pensar que si en esa época pudo haber errores, también existieron grandes realizaciones y los que intervinimos en una medida más grande o más pequeña, pusimos todo nuestro fervor patriótico, nuestro sentir de argentinos, nuestra buen fe de ciudadanos honrados. Creo que los errores que puedan haber existido quedan superados por lo que se realizó y por la pura intención argentina que pusimos muchos para que nada censurable hubiera en nuestra acción.

Nada más.

Sr. Fassi. — He estado haciendo un análisis de conciencia mientras hablaba el señor senador y me preguntaba qué provocó esta tormenta que estaba tan lejos de mi espíritu, y la verdad es que, cuando se lea el Diario de Sesiones, se verá que lo único que hice fue leer las estadísticas de los años 1952 y 1962. Me referí a cifras, a la CGT, y me parece que me provocaron. Entonces, como de alguna manera tengo que pagar mis culpas, si también las tengo, voy a dejarlo sin respuesta al señor senador concretándome a decir que cualesquiera fueran mis términos y la exaltación con que traté esa época, porque diré que traigo cicatrices de ella, nunca pronunciaré una palabra de agravio contra el pueblo, por confundido y equivocado que esté.

Si tales pudieron ser mis palabras me rectifico, porque para mí el pueblo, depositario de la soberanía, debe merecer el respeto y el acatamiento, aun en sus errores, de los hombres que lo representamos de una u otra manera.

Sr. Flores. — Me parece muy bien, porque el pueblo es el único que tiene derecho a equivocarse.

Sr. Presidente. — Continúa con la palabra el señor senador Fassi, salvo que acepte la interrupción solicitada por el señor senador Astudillo.

Sr. Fassi. — Me parece que la va a necesitar dentro de un rato, porque hablaré también del MIR, así que se la concedo gustoso en este momento.

Sr. Astudillo. — No voy a tratar un aspecto político, sino procurar determinar el porqué

de la contradicción entre las estadísticas y la manifestación que hacía el señor senador por Tucumán. Lo que ocurre es que las estadísticas efectivamente suelen decir la verdad, pero hay que tratarlas con mucho cuidado. ¿Qué se compara aquí? Salarios del año 43, que, con toda seguridad, no se cumplían; y ésa es la primera consideración que hay que hacer, porque, precisamente, durante el conservadorismo se dictaron muchas leyes sociales que nunca se pusieron en vigencia. En segundo lugar, que la familia tipo perdió el sentido que tenía en el año 1943 a principios del año 1949, porque se incorporaron a la vida activa del país las mujeres y mucha gente que estaba en el desempleo, como lo hice notar en mi exposición. Vale decir que la ocupación masiva y la creciente influencia de la mujer en la vida laboral aumentaron los ingresos totales, y de ahí que hayamos tenido condiciones económicas mucho mejores en el año 1952 con respecto a 1943. Por eso dije que hay que considerar las estadísticas con mucho cuidado; por ejemplo, en el año 1952, en el campo se sufre un año de mucha sequía. En consecuencia, convendría, para verificar en absoluto la tesis del señor senador Fassi, que leyéramos las estadísticas desde el año 1943 hasta 1964, sin excluir ningún año.

Sr. Fassi. — Me parece interesante, aun perdiendo un momento...

Sr. Aguirre Lanari. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Presidente. — Hay una nueva interrupción, que es interrupción de interrupción.

Sr. Fassi. — Si las he permitido todas con gusto, ¿cómo no voy a concedérsela al señor senador Aguirre Lanari?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari, y después le ruego al señor senador Fassi que continúe con su exposición.

Sr. Aguirre Lanari. — No voy a provocar una nueva polémica y no está en mi ánimo defender lo que no debe defenderse, salvo la justicia y la verdad. Pero no puedo pasar por alto una afirmación que acaba de hacer el señor senador Astudillo, a quien no quise interrumpir para que conservara el hilo de su exposición, cuando dijo que nunca se habían cumplido las leyes durante el conservadorismo.

No es del caso repetir aquí que no vengo a defender ni defenderé errores que mi partido también padeció, quizá, en lo que hace a mi provincia, tanto o más que el partido que integra el señor senador. Pero lo que no puedo permitir, porque incluso se agravía a los legisladores del radicalismo de aquel entonces, es que se afirme que las leyes no se cumplían. Tal vez no se haya cumplido alguna, o se haya cumplido en forma imperfecta, lo que es un defecto común en todos los gobiernos, e incluso ha ocurrido con el decreto ley 33.302, dictado en época del peronismo, y mantenido en todos los gobiernos posteriores, entre ellos el de Frondizi. Sin

embargo, no se ha cumplido, y prueba de ello es el debate a que asistimos.

Pero tan incierto es lo manifestado por el señor senador, y lo invito caballerescamente a que se rectifique, salvo que su manifestación importe un convencimiento íntimo, en cuanto a que afirmó que no se cumplió ninguna ley, en absoluto, durante el conservadorismo. Tan injusta es esta afirmación, que si fuera así resultaría que hubo jueces en la República que no cumplían su deber y que merecieron la condigna sanción legislativa, por medio del juicio político, no solamente por parte de los legisladores entonces oficialistas sino también de los legisladores radicales que integraban la Cámara.

Por ello, no he podido pasar por alto la afirmación del señor senador, salvo que se tratara de una expresión apresurada o no meditada suficientemente, en cuanto a que no se cumplía ninguna ley.

Sr. Fassi. — Voy a continuar...

Sr. Flores. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Fassi. — No permito más interrupciones.

Sr. Flores. — Es exclusivamente para rogarle me formule una aclaración.

Sr. Fassi. — Se la voy a conceder.

Sr. Flores. — Es una aclaración sobre las estadísticas a que hizo referencia, para poder seguirlo en su exposición.

Sr. Fassi. — En el año 1952 el salario del peón era de 780 pesos. Usted lo divide por 136, que es el salario del año 1943, y le va a dar el número índice, que es 572,5. En cuanto al oficial, en el año 1952 el salario nominal era 1.026,1 pesos, que dividido por 206, que es el salario del año 1943, da el número índice 498,1. Por otro lado, en el año 1952 el número índice del costo de la vida, partiendo de 100 nos da 562,9. Entonces, comparemos por un lado el índice del costo de la vida, 562,9, con 572,5, índice del salario del peón, y con 498,1, índice del salario de oficiales, lo que nos da un aumento de 9,6 para el salario de los peones y 64,8 de disminución del salario de los oficiales, con relación al costo de la vida. Ahora bien, el señor senador Astudillo dice que yo tomé un año de depresión.

Sr. Flores. — Exactamente, tomó el año 1954.

Sr. Fassi. — No he hecho el cálculo matemático, pero la situación siguió empeorando. Es decir, no hay un proceso oscilante, hay un proceso regresivo de salario del oficial que se va acentuando a medida que transcurre el tiempo. El mismo cálculo se puede hacer en los años 1955, 1956, 1957, 1958, etcétera.

Sr. Flores. — Le quería hacer notar esto, señor senador: el índice del costo de vida fue de 100 en 1943 y de 607 en 1954, vale decir que sube seis veces; en cambio, el salario del peón del año 1943 es de 136 y el del año 1954 es de 954; vale decir, aumentó siete veces.

Sr. Fassi. — ¡No! Divídalo, y haga luego el mismo cálculo con los 206,8.

Sr. López. — Elija el año 1950, si usted tiene razón, y terminemos la discusión.

Sr. Fassi. — He hecho dos cálculos pero no voy a tener inconveniente en agregar al Diario de Sesiones el cálculo de todos los años, y verá que es un proceso de continuo deterioro del salario.

En cuanto a la afirmación formulada por el señor senador Astudillo, me parece que es conveniente analizarla, porque nos va a aproximar otra vez a nuestro tema.

Antes del año 1943 yo era abogado de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Unión Tranviarios, es decir, tenía una experiencia personal sobre salarios y una experiencia muy importante, si se quiere, porque además era asesor de la Asociación Bancaria y de los viajeros de comercio. Pues bien, en base a esa experiencia puedo afirmar que 136 pesos no era el jornal medio. El jornal corriente era de 160 pesos. En cuanto al operario de oficio estaba, en mi experiencia personal, por encima de los 206 pesos. Supongo que a esas cifras —136 y 206— se llegó como consecuencia de los menores jornales que se ganaban en las provincias y que no entran en mi experiencia personal.

Ahora bien, en aquella época la mujer no trabajaba. Yo nací en un hogar modesto y en un medio modesto de Barracas; en aquel tiempo el hombre tenía la dignidad de ser el soporte del hogar, y la comunidad matrimonial se organizaba sobre la base de que el sueldo del marido alcanzaba para vivir, bien o mal, mientras que la mujer se dedicaba a la crianza y a la educación de los hijos. Hoy las cosas han cambiado en algunos sectores y hemos asistido al ejemplo de los Estados Unidos de América, donde las mujeres, aun en las clases sociales elevadas, trabajan fuera del hogar.

Y yo digo, señor presidente, como aspiración íntima de mi espíritu: ojalá no sigamos esa corriente y podamos algún día celebrar la política de que el sueldo del marido alcance; no porque me oponga a la emancipación de la mujer, sino porque los hogares en que falta la madre en la atención prolija de los hijos, son hogares a medias en el cumplimiento de su deber, y yo quisiera una sociedad como aquella en la cual nací, en que bastaba el sueldo del marido.

Es por eso, señor presidente, que observo con extrañeza, porque es un punto tangencial al de esta ley, que se haya dictado en las últimas épocas un decreto ley por el cual el salario familiar corresponde aun respecto de la mujer que trabaja, porque entra en esa corriente de que la mujer se aleje del hogar para allegar un sueldo más. Yo creo que si la mujer trabaja, y en consecuencia aporta un sueldo, el marido no puede cobrar el salario familiar con respecto a esa mujer. Y desde ya lo anticipo a los efectos de una rectificación legislativa cuando se trate de la suerte de los decretos leyes.

Y vuelvo al tema, señor presidente. Nosotros estamos de acuerdo en que no se puede mirar una sola faceta de la medalla. La con-

templamos desde el punto de vista de la justicia social para decir que es justo que el obrero goce de un mejor salario. Pero tenemos que analizar también el progreso general, la reactivación económica, la prosperidad del país.

Ya se ha dicho en el curso de este debate que se ha desarrollado una campaña sistemática para demostrar la ineficacia de este gobierno, su falta de decisión y de planes. Se decía en los medios del gran capital y ahora se trata de difundir la especie en los medios proletarios. Pero a esa afirmación hemos contestado con las palabras del señor senador Acuña, demostrando que este país se estaba encauzando, que estábamos asistiendo al albor de nuevos tiempos, que podíamos tener la esperanza en la paz y fraternidad de asegurar el progreso de nuestro país, el que necesita de la paz social y del respeto de todos los derechos. Por eso, y no por un don gracioso, la Unión Cívica Radical se apresta a terminar con las leyes represivas y va a asegurar un sistema electoral justo y limpio, porque el progreso sólo se puede asentar en la paz social, y los que trabajan contra ésta no pueden decir que lo hacen en favor de ninguna causa que sirva al interés común.

Y este clima de paz que hemos creado lo logramos en parte por haber conseguido suprimir durante meses el rumor, que se quiere ahora alimentar de nuevo sin comprender que es perturbador. Más que los desaciertos del gobierno, lo que aleja a los capitales es el rumor, la inseguridad de su estabilidad. Por eso este gobierno, que logró instaurar la paz social y el respeto de todos los derechos, que gobierna en paz, con provincias que están en manos de todos los partidos políticos, que tiene un profundo respeto por todas las representaciones parlamentarias, que no invade las atribuciones de los municipios, que asegura un porvenir de ventura para los argentinos desde el punto de vista de la profesión de las ideas y de los pensamientos políticos, asiste a la disminución del número de desocupados y a los mayores índices de ventas de los negocios mayoristas y las mayores ventas de las grandes empresas industriales. Pero al mismo tiempo está en la realización del plan de promoción, porque nosotros teníamos derecho a creer que en este país había un plan de promoción y era otra de las grandes proclamas propagandísticas.

Tanto no había planes promocionales, que en todos los centros financieros de los Estados Unidos que hemos recorrido nos han dicho: la Argentina no ha aprovechado las oportunidades de crédito porque no nos ha presentado planes promocionales, porque la Argentina no tiene planes promocionales. Y nosotros, señor presidente, estamos en la tarea de hacer nuestros planes promocionales. Pero debemos analizar si es ocasión, con esta ley que trata del problema de los salarios, para introducir por vía incidental un plan promocional; si es serio, si

está a la altura del Senado que en el curso de un debate en el cual se trata el salario mínimo, vital y móvil, querramos dar la solución y la respuesta a todas las angustias económicas del país. Me parece, señor presidente, que no es serio, y menos en la forma como se ha promovido en la Cámara de Diputados y como se promueve en esta sesión repitiendo las mismas ideas.

¿De qué se trata? Se trata de negarle al Poder Ejecutivo la facultad de obtener créditos del Banco Central, es decir, la derogación lisa y llana de la ley 16.452, que reformó el artículo 49 de la ley orgánica del Banco Central.

Pero, entendámonos: ¿qué quiere la oposición? ¿Que pongamos en la calle a 600 mil empleados públicos? Que lo proclamen valiente y paladinamente. Pero no pueden decirnos que se le prive al Estado de los recursos para pagar los sueldos a los empleados públicos y los créditos a los proveedores; que se le prive de los recursos para ayudar a las provincias. Es muy fácil criticar la política del gobierno con respecto a los ferrocarriles; pero ¿qué dicen los señores senadores que no están conformes con la política que seguimos al respecto? ¿Quieren que arrojemos a la calle a la mitad de los empleados de los ferrocarriles? ¿Quieren que cerremos estaciones, suprimamos vías? No. Le piden al gobierno un milagro: que se prive de esos recursos, que mantenga a todos los empleados públicos y, además, que los aumente los sueldos; y que no se les pague desde el 1º de noviembre, sino desde el 1º de julio, sin tardanza, y sin faltar; pero privándolo de los recursos. Es decir, creándole una imposibilidad para luego proclamar el fracaso del gobierno. Y, además, que no acuda a nuevos impuestos, porque en el proyecto en que se pretende que el Estado quede privado de los recursos del crédito y mantenga todas las partidas presupuestarias, y todos los empleados, que se les aumente y se les pague a partir del 1º de julio, se establece también que no podrá aumentar los impuestos. No es posible, porque si se lo colocara en esa situación, ¿de dónde sacará los recursos? ¿De la galera? Pero resulta, señores senadores, que el gobierno es gobierno y no prestidigitador. Y, además, que se movilice una masa de 20 mil millones de pesos. No se sabe para qué. Se nombrará una comisión de reactivación que usará los 20 mil millones de pesos. Pero, señor presidente, según datos que se han dado en el debate de la Cámara de Diputados, los 20 mil millones de pesos habría que dárselos a las empresas para que puedan abonar los nuevos sueldos y el salario familiar. ¿Como si con esa suma arrojada en la corriente circulatoria para promover la industria, vamos a salvar los problemas del país! No me sorprende, señor presidente, que estemos donde estamos. Si ésas son las ideas con las cuales se manejaba el gobierno al que nosotros sucedimos, claro está que hemos tenido que recibir una

triste herencia, que soportamos con resignación y patriotismo, tratando de que quienes nos sucedan a nosotros, sean quienes fueren, reciban un país ordenado y en la vía del progreso, como nosotros no lo hemos recibido.

Insisto, pues, en que se trate de una ley de salario mínimo vital y móvil, y que debemos considerar el instrumento en sí. Su repercusión ya la veremos, y tomaremos las medidas pertinentes para evitar que no sea en desmedro de la economía nacional. Desde el gobierno, digo, tomaremos las medidas; es decir, no el Poder Ejecutivo, porque somos tan gobierno como el Ejecutivo y no es cuestión de que nos pasemos el tiempo protestando por la falta o la presunta falta de acción del gobierno, que no es tal. Nosotros también somos gobierno, y si no hay planes en el Ejecutivo, presentémoslos en este Senado, pero no —excúseseme la expresión— este pobre proyecto de dejar al gobierno sin recursos pero con obligaciones, y de considerar que vamos a nadar en la prosperidad por la circunstancia de que nombremos una comisión que maneje a su arbitrio 20 mil millones de pesos.

No es la oportunidad de enunciar ideas, pero si nos decidiéramos a un debate de esa especie, aportaríamos alguna pequeña contribución, como lo hiciéramos en el año 1952, cuando presentamos proyectos en la Cámara de Diputados. Se nos acusaba y se nos acusa de una oposición a ultranza. Yo nunca he conocido, señor presidente, esa actitud, y aun en aquella época trataba de aportar modesta y humildemente mis ideas. Es la obligación de todos los partidos políticos hacer la propaganda de las suyas, pero con seriedad, calando hondo y llegando a la profundidad para encontrar soluciones a los problemas.

El salario que deseamos establecer es mínimo, vital y móvil. Mínimo, porque es lo menos que se puede lícitamente pagar en determinada rama de la actividad laboral. El señor senador Astudillo dijo que no es mínimo porque es insuficiente. El salario no deja de ser mínimo por ser insuficiente. El concepto se refiere a que legalmente se fija como un mínimo. El problema de si es suficiente o no, es otro, que lo vamos a considerar cuando nos refiramos al salario vital.

Sr. Astudillo. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Fassi. — Sí, señor senador.

Sr. Astudillo. — Cuando he dicho que es insuficiente, me he referido al aspecto vital, y cuando me referí a mínimo he dicho que se establecería un salario que no sería el que fija la ley por las deducciones que en ellas se mencionan: quitas zonales, asignaciones familiares, interpretación del artículo 8º, etcétera; es decir, que nos encontraríamos con un mínimo absolutamente desconocido que, con toda seguridad, será mucho más mínimo que el que estamos declamando.

Sr. Fassi. — Me felicito de que el señor senador haya aclarado su pensamiento porque probablemente él lo haya expresado bien y yo lo comprendí mal.

Yo diría, señor presidente, que ésta es una ley sabia, justamente por el motivo que suscita la crítica que acabamos de escuchar. El salario mínimo para ser justo no puede ser rígido, sino que debe adecuarse a distintas circunstancias que vamos a analizar. En primer lugar, la edad. Es un salario para el adulto, desde que parte del concepto del padre de familia.

En la primera etapa laboral el hombre se forma, aprende, se adecua a la tarea que va a realizar. Generalmente no tiene cargas de familia; más: integra una familia y, en consecuencia, ayuda a un presupuesto. Hay que fijar el momento de la vida del hombre en que debe ampararlo el salario mínimo. Y esta ley lo hace a partir de los dieciocho años.

Las leyes de salarios deben contemplar otro factor que es la habilidad física, porque en nuestra sociedad, señor presidente, hemos incurrido en el tremendo error de dejar al margen de la producción a muchas personas que todavía serían útiles a pesar de deficiencias orgánicas o físicas. No se aprovecha totalmente el material humano, y es conveniente que el salario se fije con respecto al obrero hábil, al completo, pero que no dejen de darle la oportunidad al que sufre una desventura física, de obtener un salario que no puede ser el mismo porque nadie lo emplearía pudiendo utilizar a una persona que tuviera capacidad física total.

Y finalmente zonal. El criterio de zonal, es justo y equitativo, y no lo hemos inventado nosotros. Está en los convenios laborales, pero está además en el artículo 18 del decreto ley 33.302, que viene con el signo del justicialismo y que fue para su época un gran avance. Ojalá lo hubieran puesto en movimiento. También establece el artículo 18, pueden verlo, el salario zonal. ¿Y por qué? Porque si el salario tiene que contemplar todos los factores que dice la ley y que bien ha enumerado el señor senador Flores, tiene que contemplarlos de acuerdo con los costos de la zona y no son los mismos en todos los lugares de la República. De tal manera, que si se fijara el salario mínimo para todas partes igual, no le alcanzaría al trabajador para mantener el mismo estándar de vida en uno y otro punto de la República. Y esto no quiere decir que el salario zonal sea un pretexto para descontar sobre los 14.000 pesos, sino que puede ser también un motivo para aumentar sobre ese límite, porque se ha tenido sobre todo en mira el costo de vida en la capital de la República; pero hay lugares en donde es más elevado, como en Chubut y en Santa Cruz. Vale decir, que la adecuación no va a ser siempre en menos; se hará en menos donde la vida cuesta menos y en más donde cuesta más, y como resultado de esa circunstancia, se asegurará en todas las zonas del país, un igual nivel de vida que es lo

que interesa, y no el monto de los salarios. Lo que interesa es el bienestar que ese salario da, las posibilidades de vida que ese salario brinda, y ello debe adecuarse a cada una de las zonas de la República.

Pero ese mínimo no puede calcularse para el individuo. Al citar los antecedentes de las encíclicas indiqué la evolución que había percibido en ellas, suponiendo que en las primeras no se había explicitado del todo el pensamiento de la Iglesia, que es, además, el pensamiento de nuestra cultura occidental, respetuosa de la familia como célula de la sociedad en la cual debe desenvolverse la vida del hombre y deben perpetuarse las fuerzas sociales.

Además, el salario debe ser vital. La ley explicita con claridad qué se entiende por vital. No es vital el salario que alcanza exclusivamente para satisfacer necesidades esenciales y además convenientes. La experiencia enseña que el hombre no se conduce como un ser ideal en la utilización de sus salarios. Si, por ejemplo, se le diera a un obrero estrictamente lo necesario para el bien vivir, el bien comer y para el bien vestir, ese obrero no satisfaría todas sus necesidades; está acostumbrado a fumar, y desde el punto de vista de la moral, es un vicio, pero desde el de la economía, es una necesidad para la satisfacción de la cual a veces se sacrifican otras, que desde el punto de vista de la moral y de la higiene son repudiables.

Y el salario es móvil; esto constituye el centro del problema. Es indudablemente grave, pero por el signo de los tiempos; porque sufrimos desde antiguo una inflación a la cual no le hemos podido poner, hasta el presente, remedio. Ya sé que los que nos critican por la sanción de esta ley, si sigue el proceso inflacionario —que va a ser difícil detener, porque es como el alud, que una vez que empieza a caer por la ladera de la montaña es imposible detenerlo— dirán que es por culpa de nuestra sanción. Y nosotros tendremos a mano la razón de peso de que antes de la sanción también hemos asistido al derrumbe de los precios y al proceso inflacionario.

Se acusa al salario móvil por el fracaso de sistemas precedentes. Quiero aclarar, y es otra de las virtudes de esta ley, que el que nosotros establecemos en esta ocasión es más elástico; para modificarlo se tendrá en cuenta no sólo el aumento del costo de vida, sino también la posibilidad de abonarlo, sin que determine un aumento de los índices de desocupación.

Subrayo el concepto, sobre todo para aquellos que consideran que estamos concediendo con exceso. No, señores senadores; si procediéramos con un impulso emocional, daríamos mucho más. Cuidamos el valor humano del trabajo, pero de ninguna manera queremos introducir un proceso de distorsión en nuestra economía. Vamos paso a paso con serenidad, avanzando en el sentido del progreso social. Lo fundamental es

no detenerse; no pretender transcurrir en una jornada lo que va a ser un largo camino.

Estos tres elementos tienen que ser determinados en el tiempo, para que el salario mínimo sea siempre vital. Para ello la ley arbitra un instrumento que es el Consejo Nacional del Salario Vital Mínimo y Móvil, con la representación de los intereses en juego y la del Estado, que está por encima de todos aquéllos.

Quiere decir que la tormenta que se desata alrededor del punto inicial de los catorce mil pesos no percibe que es meramente circunstancial, un arbitrio hasta que el sistema funcione. No tiene término fijo de duración; permanecerá exclusivamente el tiempo necesario para que el órgano de aplicación, con todos los antecedentes e información necesarios, pueda fijar el salario que en realidad corresponde. Yo espero, señor presidente, que muy pronto se ponga en ejercicio este órgano y tengamos el salario fijado por conocimiento de causa y con la ponderación de todos los intereses.

Habría deseado entrar en el análisis exhaustivo de la ley, tal como lo he hecho en la oportunidad de considerar la ley de monopolios. Pero realmente mi exposición se extendió más de lo que esperaba y, sin perjuicio de cualquier esclarecimiento que se pueda producir en el curso del debate en particular, voy a dar por terminada mi exposición.

Antes quiero formular una profesión de fe. No desconozco las circunstancias en que vivimos, los obstáculos que tenemos que vencer y las horas duras que nos puedan esperar. Yo diría que no son una desgracia. La experiencia ajena nos demuestra que los pueblos se superan venciendo grandes obstáculos. Son aquellos más castigados por la guerra los que presentan el ejemplo de mayor progreso; son aquellos que tuvieron que luchar contra mayores obstáculos los que mejor los han superado y nosotros, argentinos, integrantes de un pueblo viril, enérgico e inteligente, con una naturaleza pródiga, ¿seremos los agoreros de la derrota y del fracaso? No, señores senadores. Cantémosle un himno al progreso y a la patria y esperemos con confianza el futuro. Ejercitemos nuestra facultad de legislar para dictar las leyes que la justicia exige y tengamos seguridad que ellas han de servir para el bienestar futuro de la República.

Nada más. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Bauducco. — Me adhiero a las palabras del señor senador nacional doctor Fassi.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente. — Se va a votar en particular. La Presidencia entiende que la moción formulada al comienzo es la de enunciar los artículos.

Sr. Ríspoli Román. — Pido la palabra para solicitar que se dé lectura a cada uno de los artículos.

Sr. Presidente. — Se procederá en la forma indicada por el señor senador.

—Al leerse el artículo 1º, dice el

Sr. Ríspoli Román. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Ríspoli Román.

Sr. Ríspoli Román. — Propongo que se agregue, después de las palabras «bajo dependencia de un empleador», lo siguiente: «dependencia pública o privada de un empleador».

Sr. Presidente. — ¿Aceptan las comisiones la modificación propuesta?

Sr. Fassi. — Las comisiones no aceptan porque la modificación no agrega nada al concepto, ya que que empleador es tanto el público como el privado.

Sr. Lovaglio. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Lovaglio.

Sr. Lovaglio. — Quisiera preguntarle al señor senador si la expresión «toda persona mayor de 18 años» comprende tanto al hombre como a la mujer.

Sr. Fassi. — Persona, en sentido jurídico, es tanto el hombre como la mujer.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo tal como ha sido redactado por las comisiones.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 2º.

Sr. Lovaglio. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Lovaglio.

Sr. Lovaglio. — Para hacer moción, en nombre de nuestro bloque, de que se supriman las palabras «en cada zona».

Sr. Presidente. — ¿Las comisiones aceptan?

Sr. Fassi. — Las comisiones no aceptan.

Sr. Olmedo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Olmedo.

Sr. Olmedo. — Vamos a pedir la modificación del artículo en la parte que dice «es la remuneración». Pediríamos que se diga «es el sueldo básico», porque de acuerdo con las explicaciones de la fuerza obrera, especialmente la representación de la CGT que ha estado en el Senado de la Nación esta noche, el término jurídico del artículo 2º es «sueldo básico» y no «remuneración».

Sr. Presidente. — ¿Las comisiones aceptan la modificación que propone el señor senador?

Sr. Fassi. — No, señor presidente, porque no hay ninguna duda sobre el sentido de la palabra «remuneración».

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 2º tal como ha sido despachado por las dos comisiones, que no aceptan la modificación propuesta.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 3º.

Sr. Astudillo. — Pido la palabra.

Solicito la supresión del párrafo final, que dice: «El salario vital mínimo estará integrado además por las asignaciones familiares.»

Sr. Presidente. — ¿Las comisiones aceptan?

Sr. Fassi. — Por las razones que di en mi exposición, las comisiones no aceptan.

Sr. Presidente. — Las comisiones no aceptan la supresión que propone el señor senador Astudillo. Se va a votar el artículo 3º tal como ha sido dictaminado por las dos comisiones.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones se leen y aprueban los artículos 4º, 5º y 6º.

—Se lee el artículo 7º.

Sr. Ríspoli Román. — Pido la palabra.

Es para mocionar que se suprima la parte que dice «poseer reconocida versación en materia laboral o económica», porque, señor presidente, ¿quién va a ser el que determine esa versación?, o ¿cómo puede exigirse la misma a alguno de los integrantes de ese cuerpo? Sería un tanto imposible, eventualmente, se me ocurre, poder integrar debidamente esa condición. Por ello, pido la supresión de esa parte del artículo.

Sr. Presidente. — ¿Acepta la comisión la supresión solicitada por el señor senador?

Sr. Fassi. — No acepta, señor presidente.

Sr. Ríspoli Román. — Entonces, tendremos que solicitar al Ministerio de Economía, a las universidades, que nos manden gente versada para que integre la comisión con carácter de obrero.

Sr. Fassi. — No tenga cuidado, porque se va a proceder con gran criterio y equidad.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 7º del dictamen de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Como el artículo 8º se compone de varios incisos, éstos serán leídos y votados separadamente.

—Sin observación se leen y aprueban los incisos a), b), c) y d).

—Se lee el inciso e).

Sr. Corradi. — Quiero hacer notar que no existe ningún organismo que se denomine Consejo Nacional de Enseñanza Técnica.

Sr. Barbich. — Efectivamente, el inciso e) del artículo 8º habla de que el excedente será transferido a la orden del Consejo Nacional de Enseñanza Técnica. Sin embargo, ha sido perfectamente aclarado el sentido de este artículo, dado que se refiere al Consejo Nacional de Educación Técnica. Evidentemente, hay aquí un error que de ninguna manera invalida la ley, el que podrá ser solucionado en su oportunidad para el caso de que no se encontrara la interpretación adecuada, que entiendo no ofrece ninguna duda, por cuanto ha sido perfectamente aclarado que se refiere al Consejo Nacional de Educación Técnica, denominación que corresponde a la anterior Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional.

Creo que con esta aclaración queda perfectamente interpretado el sentido de este inciso y considero que no es necesario pasar el proyecto de ley por el tamiz de otra revisión para una simple aclaración que hacemos en este momento.

Sr. Presidente. — En consecuencia, ¿la comisión no acepta ninguna reforma a este inciso?

Sr. Fassi. — No acepta. Ya quedó aclarado su alcance.

Sr. Corradi. — Hago constar que tampoco solicité que se hiciera la corrección. Me limité a señalar la denominación que correspondería, Consejo Nacional de Educación Técnica, como lo establece la ley.

Sr. Presidente. — Como el señor senador Corradi no ha formulado ninguna proposición se va a votar el inciso e) tal como figura en el dictamen de la comisión y que ha sido leído por Secretaría.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el inciso f).

Sr. Lovaglio. — Pido la palabra.

Quiero solicitar de la comisión que tenga a bien aceptar este pedido de un pequeño agregado: «...y la vigilancia de su aplicación en todo el territorio de la Nación, instando al cumplimiento de la misma a los organismos respectivos». Propongo este agregado porque se va a producir el caso de que en algunas zonas no habrá quien haga cumplir la ley.

Sr. Fassi. — Recogemos el pensamiento del señor senador las dos comisiones y servirá para la interpretación de la ley. No es necesario incluirlo en el texto y en consecuencia lo mantenemos.

Sr. De Rege. — Pido la palabra. Solicito que con anterioridad o posterioridad al inciso f) se agreguen tres incisos: inciso g) Orientar la política salarial del Poder Ejecutivo, a cuyos efectos será organismo de consulta previa y obligatoria; h) Realizar los estudios tendientes a determinar la estructura del salario en el país, por profesiones y regiones, teniendo en cuenta la composición del salario directo e in-

directo; i) Efectuar los estudios para establecer la real composición de la familia en el país, sobre la base de la población activa.

Sr. Fassi. — Nos parece muy útil el aporte para la reglamentación, pero entendemos que no es imprescindible incluirlo en el texto de la ley. Es una contribución muy útil del señor senador, pero la comisión no acepta.

Sr. Lovaglio. — Están muy intransigentes los señores senadores.

Sr. Presidente. — Se va a votar el inciso f), que mantiene la comisión, y se tendrán presentes los agregados propuestos para la reglamentación y la interpretación de la ley.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 8º.

Sr. De Rege. — Yo propuse el agregado.

Sr. Presidente. — Y yo lo he sometido a la consideración de la comisión, que no lo aceptó, manteniendo su dictamen.

Sr. Flores. — ¿No correspondería votar los agregados, porque se está votando inciso por inciso?

Sr. Presidente. — Reglamentariamente, corresponde que, propuesta una modificación o un agregado, la comisión exprese si lo acepta o no. Si no lo acepta, se pone primero a votación el dictamen de la comisión y si resulta afirmativa, queda aprobado dicho dictamen.

—Se lee el artículo 9º.

Sr. Presidente. — En consideración.

Sr. Astudillo. — Pido la palabra.

Voy a pedir la eliminación del párrafo que dice: «...la capacidad económica de las distintas zonas del país y las circunstancias que no determinen un aumento de los índices de desocupación».

Nuestro criterio es que la inclusión de estas cláusulas invalida todas las consideraciones sociales que se han hecho sobre la aplicación de esta ley de salario vital mínimo. A través de la misma se entiende que se pagará de acuerdo con la capacidad económica de las empresas.

Sr. Gamond. — Es de la zona.

Sr. De Rege. — Pido la palabra.

Solicito la modificación del artículo 9º en el sentido de que se supriman las palabras: «o reducción», por las razones que he expuesto al hacerse el debate en general.

Además, en la redacción del artículo hay una omisión, cuando a continuación dice: «...correspondiente a las distintas zonas de aplicación, a los aprendices y menores», se debe agregar: «...y las reducciones a los aprendices y menores».

Sr. Rísoli Román. — Adhiero en nombre de mi bloque a la moción del señor senador De Rege.

Sr. Barbich. — El tema ha sido suficientemente debatido, pero yo quiero señalar que al establecer los porcentajes de aumento o de reducción, ello se refiere al porcentaje de modificación que puede existir con respecto al punto de referencia que se toma como base de estudios por la comisión, porque en ningún momento podemos dejar de interpretar una realidad. Hay algunas provincias que tienen índices diferentes a los de la Capital Federal; en mi provincia, particularmente, existen índices muy superiores de costo de vida que deben ser contemplados. Ahora bien, si se habla de reducción en una parte, ello implica que existe la posibilidad de aumentar en otra. Ese es el verdadero sentido de la disposición, por lo que solicito que no entremos a un juego de palabras; siempre va a existir una diferencia entre zonas, que es, en última instancia, lo que se quiere establecer aquí. Personalmente, y además la comisión que integro, hemos creído conveniente mantener ese principio a efectos de que se puedan establecer criterios distintos según cada zona que permitan, en cada caso, llegar a las condiciones prescritas en el artículo 2º de esta ley.

Sr. Presidente. — Las dos comisiones deberán pronunciarse si aceptan las modificaciones propuestas.

Sr. O'medo. — Voy a pedir una modificación del artículo 9º, en la parte que dice que el consejo determinará anualmente para cada zona el salario vital mínimo. Argumento este pedido basado en que la determinación de zona en cuanto a la fijación de salarios ha sido superada por la clase obrera, y tanto es así que existen en el país numerosas leyes de orden provincial que han dejado sin efecto la aplicación dentro de la jurisdicción de su provincia.

—Hablan varios señores senadores simultáneamente.

Sr. Presidente. — La comisión debe pronunciarse sobre tres proposiciones: una del señor senador Astudillo sobre supresión del último párrafo del primer apartado del artículo 9º, donde se hace referencia a la capacidad económica de las distintas zonas del país; una modificación propuesta por el señor senador De Rege y apoyada por el señor senador Rísoli Román; y una supresión propuesta por el señor senador Olmedo.

Varios señores senadores. — Las comisiones no aceptan.

Sr. Astudillo. — Solicito una aclaración.

Cuando hablamos de la determinación de los salarios mínimos por zonas, entendemos que esta fijación de salarios debe tender exclusivamente a las variaciones del costo de vida en cada zona pero no a las consideraciones de carácter económico. Por eso, al introducirse el concepto de la capacidad económica de las distintas zonas, en mi concepto se injerta un nuevo elemento

para la fijación del salario. Eso es lo que yo quiero que me aclare la comisión

Sr. Fassi. — Yo no encuentro los términos a que se refiere el señor senador.

Sr. Presidente. — Es la parte final de la primera parte o del primer párrafo del artículo 9º.

Sr. Fassi. — No sé cuál es la parte final de la primera parte. (*Risas.*)

Sr. Presidente. — El primer apartado del artículo 9º termina diciendo: «...los índices zonales que deberá determinar el consejo realizando los estudios e investigaciones necesarios; la capacidad económica de las distintas zonas del país y las circunstancias que no determinen un aumento de los índices de desocupación.»

Sr. Fassi. — La comisión no acepta. Creo que tiene que haber un margen para contemplar las contingencias económicas.

Sr. Corradi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Corradi.

Sr. Corradi. — Yo estoy dispuesto a aceptar los porcentajes de aumento porque entiendo que ellos responden a una necesidad real. Lo ha dicho bien el señor senador Barbich: existen provincias donde el costo de vida es superior al del resto de la República. Quiero traer una cifra. En el anuario estadístico oficial del gobierno de la provincia de Santa Cruz figura como costo real de vida para una familia tipo a fines del año 1962 la cifra de \$ 19.000. No obstante este argumento que es cierto y exacto para el porcentaje de aumento, entiendo que no lo es para el de reducción. Este podría basarse también en una situación real de menores costos, pero entiendo que la limitación debe ser hecha en base al salario ideal que debe percibir cualquier obrero que trabaje en una zona de menores costos. Digo esto porque es evidente que el menor costo puede en la práctica concretarse por el hecho de que existan servicios vacantes, y hay que tenerlos en cuenta. Además, si es cierto que el aumento del salario puede producir una reactivación por sí mismo, es una buena medida que se lleve a una suma superior el correspondiente a las zonas que tienen menor costo de vida, pues seguramente son las que más necesitan de esa reactivación.

Sr. Castiglione. — El artículo 18 es claro, no acepta la reducción.

Sr. Corradi. — Razón de más para que se elimine la posibilidad de reducción en este artículo.

Sr. Presidente. — La comisión no acepta las modificaciones propuestas. Corresponde en consecuencia que se vote el artículo 9º tal como ha sido dictaminado.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 10.

Sr. Lovaglio. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Lovaglio.

Sr. Lovaglio. — Es para pedir a la comisión que en vez de 15 %, el índice de variación sea del 10 por ciento.

Sr. Lovaglio. — Está en consideración la modificación propuesta por el señor senador Lovaglio de que en vez del 15 % sea el 10 %. ¿Acepta la comisión?

Sr. Fassi. — No acepta la comisión, señor presidente.

Sr. Astudillo. — Consecuente con la petición que hice en el artículo 9º, quiero insistir con la misma idea en este artículo 10, pidiendo que se teste «sin perjuicio de considerarse las demás circunstancias previstas en el artículo anterior».

Sr. Presidente. — ¿La comisión acepta la modificación que propone el señor senador Astudillo?

Sr. Fassi. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 10.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 11.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari.

Sr. Aguirre Lanari. — Es para solicitar a la comisión una aclaración oportuna respecto a una pregunta que formulé hoy en privado al señor senador Blanco, para evitar dudas posteriores. Es una inquietud suscitada con motivo de un artículo aparecido en el diario «La Nación» respecto de la ley de salario móvil. En ese artículo se suscita una duda acerca de los criterios que podrían existir. Por ello le pido a la comisión que deje aclarado este artículo en forma categórica.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Martínez.

Sr. Martínez. — La comisión entiende que no existe ninguna duda en cuanto a los beneficios que se acuerdan en este artículo en aquellas remuneraciones superiores al salario vital mínimo, por cuanto dice claramente que será el equivalente al diez por ciento sobre las remuneraciones que exceden a ese salario vital mínimo. Quiere decir que en todos los casos en que sea superior al básico establecido, será siempre el 10 por ciento del salario fijado, o sea 1.400 pesos.

Sr. Barbich. — Se aclaró también en el debate de la Cámara de Diputados.

Sr. Olmedo. — Eso significa que se van a modificar todos los convenios colectivos donde se establece 500 pesos por la familia. A ese aspecto se hace referencia en los diarios, porque entonces el impacto sobre la economía va a ser tremendo.

Sr. Martínez. — No creo, señor senador.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 11 tal como ha sido dictaminado por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se votan y aprueban sin observaciones los artículos 12 y 13.

—Se lee el artículo 14.

Sr. Lovaglio. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Lovaglio.

Sr. Lovaglio. — Le pido al señor presidente de la comisión que aclare cómo juega aquí el salario vital mínimo con relación a la jerarquía de los cargos. Cito, por ejemplo, el caso de un estanciero que tenga un peón y un capataz con distinto sueldo. ¿Cómo se va a aplicar?

Sr. Fassi. — Precisamente ése no es problema de esta ley. Esta ley asegurará que el salario mínimo sea de 14 000 pesos. Si esa suma alcanza al capataz y al peón, quedarán equiparados mientras no venga una iniciativa en favor del capataz que propiciará el señor senador y que yo apoyaré.

Sr. Lovaglio. — Pero eso no es justo, señor senador.

Sr. Fassi. — Le repito, señor senador, que no es problema que contempla esta ley, que se refiere al salario mínimo.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 14.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 15.

Sr. Fassi. — Deseo aclarar, a los efectos de la reglamentación, que es el artículo de la ley que estamos sancionando.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — El artículo 16 se va a votar por incisos.

—Se lee el inciso a) del artículo 16.

Sr. Lovaglio. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Lovaglio.

Sr. Lovaglio. — Voy a solicitar la supresión del artículo 16 porque estas exclusiones van a hacer perder todo el mérito que puede tener esta ley. Vamos a tener situaciones de privilegio, y yo creo que no hay razón para establecerlas.

Sr. Fassi. — La comisión no acepta la supresión que se propone. Con respecto a las remuneraciones del servicio doméstico, manifiesto que existe el propósito de sancionar una ley especial. En cuanto al inciso b), entiendo que avanzaremos sobre las autonomías provinciales.

Sr. Bassi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Bassi.

Sr. Bassi. — Deseo dejar constancia del alcance inconstitucional de este artículo 16 en cuanto establece una discriminación en detrimento de importantes sectores laborales. Más aún, al tratarse de un derecho constitucional consagrado en el artículo 14 bis, es evidente que esta ley alcanza y tutela a todos los habitantes del país. No puede, por imperio del artículo 16 de la misma Constitución, quedar nadie excluido de los beneficios de esta ley. Por otra parte, de aceptarse la tesis del señor senador preopinante, no se allanaría la autonomía provincial solamente porque se interfiriera en la elaboración de los presupuestos provinciales y municipales; también lo sería en tanto y en cuanto interfiriera en la retribución del trabajo que se realiza dentro de la jurisdicción de cada una de las provincias. Entiendo que no es ése el concepto. Oportunamente, cuando se sancione el Código de Trabajo y Seguridad Social, que va a tener vigencia en todo el país y va a asegurar por igual a toda persona que trabaje, sin discriminación como la que establece esta disposición legal que se está estudiando, se verá con más claridad el alcance nacional de esta ley, que trata un tema de dicho código.

De todas maneras, «como lo perfecto es enemigo de lo bueno», y lo fundamental es, como se dijo en este amplio debate, que estamos en el comienzo de una etapa de elaboración de este instituto del salario mínimo vital y móvil, estamos siempre a tiempo de introducir modificaciones al texto que se está considerando.

Por otra parte, entiendo que con una simple elaboración jurisprudencial la justicia del trabajo puede amparar a estos sectores laborales que aparecen marginados; pero lo fundamental, señor presidente, es dejar la constancia expresa de que es evidente la inconstitucionalidad de esta marginación de sectores que son tan respetables y dignos de la protección de esta ley de salario mínimo vital y móvil.

Es inadmisibles que exista en la República alguien que no esté alcanzado por la protección de esta ley, por el hecho de que sean modestas sus actividades, en el caso del servicio doméstico, o porque esté al servicio de organismos provinciales o municipales. Lo único que quiero en este momento es dejar constancia del reparo que hago con respecto a la constitucionalidad.

Sr. Olmedo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Olmedo.

Sr. Olmedo. — En representación de mi bloque, voy a adherir a las palabras pronunciadas por el señor senador Bassi, no solamente porque ratifican los principios de la Constitución, sino porque ellas se ajustan a la perfecta interpretación que dan a las normas constitucionales las fuerzas obreras representativas argentinas.

Sr. Fassi. — Por la importancia del asunto, la comisión tiene que explicar su pensamiento.

Yo no creo que antes ni después de la sanción del artículo 14 bis de la Constitución haya una norma constitucional que nos obligue a dictar la misma regulación del trabajo para todas las actividades laborales.

En la historia de la legislación social argentina se multiplican los estatutos que sólo atienden a determinadas profesiones: Estatuto del Peón, del Tambero, etcétera, fijando para cada una de esas actividades una remuneración distinta. No hay razón para suponer que no se pueda dejar para una regulación especial la remuneración del servicio doméstico, que es un caso especialísimo. Eso sin prejugar con respecto al criterio del legislador. El trabajo del servicio doméstico exige una legislación particular, y ésa será la que en su oportunidad tendrá que dictar el Congreso.

Pero el problema más importante es el que se vincula con los agentes de la administración provincial y municipal, organismos descentralizados y autárquicos provinciales y municipales. Nosotros entendemos que entre las facultades delegadas por las provincias no está la de que interfiramos en su propia administración local, fijando la remuneración de su personal, creándole tal vez dificultades que las provincias no tienen cómo vencer, porque no se trata solamente de un problema presupuestario, señor presidente. El problema presupuestario está vinculado al problema de los impuestos, y cuando nosotros recargamos a las provincias con gastos determinados estamos imputando la obligación de que cobre impuestos determinados, es decir, entramos en la esfera...

Sr. Bassi. — ¿Me permite una interrupción? La Constitución, que es un texto sumamente sabio, ha previsto la hipótesis que señala mi distinguido colega el doctor Fassi, estableciendo en el artículo 67, inciso 8º, entre las atribuciones del Congreso, la de arbitrar recursos para superar los déficit de las provincias. Vale decir que ese argumento se destruye con la misma Constitución. No hay intervención de la jurisdicción provincial, sino que simplemente estamos legislando sobre una cuestión eminentemente humana, que atiende a lo esencial de la personalidad humana, como son todos los derechos constitucionales. No pueden las provincias invocar la autonomía provincial para remunerar a sus agentes por debajo de lo que considera la autoridad de aplicación como el salario mínimo, el salario vital, o sea aquello sin lo cual no puede atender a las necesidades esenciales.

Pero quiero aclararle, precisamente, por esa referencia que hice, de que lo «perfecto es enemigo de lo bueno», que no me opongo a la sanción de la ley. Esta ley, en principio, es buena. Lo que he dicho no lo he planteado como motivo de una polémica, ni siquiera de un pedido de modificación, sino que quede la constancia de mi repudio a la doctrina que inspira el artículo 16, reservándome el derecho de presentar oportu-

namente un proyecto de ley, modificando la presente en todos los aspectos que han motivado mis reparos.

Sr. Fassi. — He querido formular la aclaración no porque no comprendiera el sentido de la expresión del señor senador, pero hizo una referencia a la posible actuación de la justicia y no es posible que la comisión no diga su pensamiento para que la justicia no tergiversar el fondo de esta ley, sobre la base de la aseveración del señor senador, muy respetable y muy bien fundada, por lo demás. El argumento que hace el señor senador no influye, no es decisivo. La circunstancia de que la Nación pueda acudir en auxilio de la provincia no obliga a ésta a que tenga un presupuesto que necesite el auxilio de la Nación. La provincia al fijar su presupuesto de gastos debe actuar con la mayor autonomía y libertad, y es con ese concepto que nosotros no podemos aceptar la modificación que propone el señor senador.

Sr. Bassi. — Yo no propongo modificación alguna, señor senador.

Sr. Fassi. — No podemos aceptar un criterio ponderable judicialmente, que podría surgir del silencio de la comisión.

Sr. Rísoli Román. — Deseo adherir a las palabras del señor senador Bassi y proponer dicha moción por parte de mi bloque en el sentido de suprimir esa parte del artículo.

Sr. Presidente. — ¿La comisión acepta la modificación?

Sr. Fassi. — No acepta señor presidente.

Sr. Presidente. — Se va a votar el inciso a) del artículo 16.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones se vota y aprueba el inciso b) del artículo 16.

—Son igualmente aprobados sin observaciones los artículos 17 y 18.

—Al leerse el artículo 19, dice el

Sr. De Rege. — Señor presidente: antes del dictado del decreto ley 33.302/45 la legislación laboral, a través del Código de Comercio y la ley 11.729, amparaba al trabajador empleado de comercio (artículos 154 a 160 del referido código).

Al dictarse el decreto ley se amplió la tutela del Estado a otros sectores de la actividad laboral, puesto que el artículo 2º del mencionado decreto ley establece claramente y define qué es sueldo o salario, comprendiendo los mismos a empleados u obreros que realicen tareas en relación de dependencia para uno o varios empleadores, alternativa, conjunta o separadamente, en forma permanente, provisional, transitoria, accidental o supletoria.

Es decir, que la legislación laboral, que a través de la ley 11.729 amparaba solamente al empleado de comercio, viene en virtud del decreto

ley 33.302, y al decir del mismo «empleado u obrero», a extender el ámbito de la ley, en materia especialmente de despido, a la rama industrial. Tanto es así, que el referido artículo 29, en sus distintos incisos, nos dice de las actividades que el mismo comprende.

Esta idea está robustecida por lo que establece el mismo decreto ley en sus artículos 66 y 67.

En resumen, existe un nexo jurídico y dispositivo entre el artículo 67 y el artículo 29 del decreto ley 33.302.

Al reconocérsele, en virtud del artículo 67, a los empleados u obreros que son despedidos derecho a la indemnización, necesariamente, por disposición de la misma ley, debe tenerse presente el artículo 29.

Cabe entonces una pregunta: ¿puede modificarse o derogarse un sistema legal tan claro y preciso de los dos artículos referidos, unilateralmente? Es de práctica legislativa que al derogarse una disposición legal relacionada con el texto de una ley se deba tener en cuenta el articulado total de la misma; más en este caso, donde un artículo queda vigente y otro, al cual hace referencia el primero, se deroga.

En la ley de salario mínimo vital y móvil, en su artículo 19, que es el que estamos considerando, se dejan sin efecto, por derogación, numerosos artículos del decreto ley 33.302. En el caso concreto del artículo 29 del referido decreto, que desaparece, deja sin soporte también legal al artículo 67, del cual es un nexo, limitando así la amplitud del mismo; por cuanto si el artículo 67 establece que los empleadores no podrán despedir a los empleados y obreros comprendidos en las disposiciones del artículo 29, y éste es derogado, su desaparición trae necesariamente la limitación del artículo 67, en cuanto solamente los empleados de comercio tendrán derecho a indemnización por despido, en perjuicio de los obreros de la industria, teniendo en cuenta además que por otros regímenes de previsión otros sectores laborales, como ser bancarios, gráficos, tendrán amparo legal por las leyes que los rigen.

¿Cuál será la interpretación jurisprudencial del artículo 67 del decreto ley 33.302, con la derogación del artículo 29 del referido decreto?

Es de práctica legislativa que cuando se deroga una ley se la sustituye por otra, cuando la otra hace mención a la que se deroga, salvo que la mención sea también derogada.

Frente a nuestro régimen jurídico-laboral sancionado, según la ley de salario mínimo vital y móvil, de conformidad con la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados, los empleados u obreros que no fueran de comercio y aquellos que actualmente no tienen un estatuto laboral particular quedaría fuera de toda protección legal en cuanto a indemnización por despido se refiere, por cuanto los jueces, ni aun si fallan teniendo presente el espíritu y la letra del legislador, y yendo más allá aún, por los

principios generales del derecho, podrán acoger favorablemente una petición obrera por despido injustificado del sector industrial.

Viene a avalar lo dicho anteriormente lo que expresa el artículo 45 del decreto ley 33.302, que al hablar del sueldo anual complementario entiende el referido texto legal en su segunda parte que el mismo será la dozava parte del total de sueldos y salarios, definidos en el artículo 29 del presente decreto ley, percibidos por cada empleado u obrero en el respectivo año calendario. Y el referido artículo 29 ha sido derogado.

El decreto 33.302, además de definir las remuneraciones, determina lo que se entiende por empleado u obrero con la amplitud y abarcando los sectores que el artículo 29 en sus diversos incisos comprende. Además, el referido decreto legisla sobre el salario vital mínimo, salario básico, sueldo anual complementario, despido e Instituto Nacional de Remuneraciones. Si una ley posterior a ese decreto viene a legislar y comprender en su sanción un sistema de salario vital mínimo, de asignaciones familiares y de familia tipo, no debe derogar leyes anteriores que sean referidas a los mismos temas, por cuanto se corre el riesgo de derogar disposiciones que, al no estar comprendidas en la nueva ley, pueden destruir derechos que leyes anteriores han consagrado y que no está en el ánimo de los legisladores de la nueva ley destruir y ni siquiera menoscabar. Solamente corrigiendo por vía de una nueva ley el salario mínimo es como podrán quedar sustentados los derechos que podían haber sido derogados sin existir la intención de hacerlo. Pero también cabe aquí otro interrogante: en ese lapso, ¿qué sucede? Yo dejo planteada esta observación, que, entiendo, es muy grave.

Sr. Presidente. — ¿El señor senador De Rege propone alguna modificación, supresión o agregado? ¿O solamente hace una cuestión de interpretación?

Sr. De Rege. — Deseo aunar criterios con la comisión para ver cuál es la situación. No está en mi ánimo polemizar y sí evitar un perjuicio que puede ser de grandes dimensiones. Al quedar desamparado durante un tiempo un sector laboral, se causaría un perjuicio que no puede establecerse en una disposición legal y que además no está en el pensamiento de los legisladores causarlo.

Sr. Fassí. — Cuando me ocupé de la regulación de precios de los medicamentos sostuve que dentro del sistema legislativo occidental no se seguía la práctica de incluir definiciones en la ley. En muchos de los decretos leyes y leyes que se han dictado en el país ha entrado la práctica de las definiciones, que, generalmente, está encomendada a la doctrina. En este caso las disposiciones que establece el derecho positivo, es decir los derechos que se quieren conservar, son disposiciones que hablan de obreros y emplea-

dos. Yo creo que en esos términos son suficientes. No puede haber ningún juez en la República que, frente al espíritu de la sanción que estamos dictando y al propósito de derogar el Instituto de Remuneraciones, que es reemplazado por el que ahora nosotros creamos, pueda darle al concepto de empleados y obreros otro significado que el tradicional. Yo desearía que esta explicación se considere satisfactoria para no perturbar a la justicia y para que no sea sólo la explicación de la comisión sino la de todos los señores senadores. No está en nuestro espíritu, de ninguna manera, que ninguna de las personas que reciben los beneficios establecidos en el decreto ley 33.302 los pierdan como consecuencia de una definición que puede o no estar en la ley y que habría sido muy bueno confiarla a la doctrina, como quedará desde ahora en adelante. El concepto de obrero y empleado tiene una latitud y una extensión tal que no quedarán fuera de sus términos ninguno de los que actualmente gozan de los beneficios del decreto ley a que he hecho referencia. Nada más.

Sr. Presidente. — Con la interpretación dada por el señor senador Fassi, se va a votar el artículo 19.

Sr. De Rege. — Yo deseo aclarar que personalmente quisiera aceptar la explicación del señor senador Fassi, pero entiendo que ante una derogación expresa abrimos una puerta que puede traer perjuicios irreparables.

Sr. Presidente. — De cualquier manera, la comisión le ha dado el alcance concreto de su interpretación. Se va a votar el artículo 19.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones se leen y aprueban los artículos 20, 21 y 22.

—Se lee el artículo 23.

Sr. Bassi. — Pido la palabra.

Quiero volver a hacer la salvedad de que, evidentemente, es discriminatoria e inconstitucional la disposición de este artículo, ya que tanto los empleados públicos como los de la actividad privada merecen el mismo amparo de una ley laboral. Desearía que quedara constancia de esta manifestación.

Sr. Presidente. — Se dejará constancia, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se lee y aprueba el artículo 24.

—Se lee el artículo 25.

Sr. Astudillo. — Pido la palabra.

Cuando se consideró en general el proyecto, anticipé que íbamos a pedir la sustitución del artículo 25 por otro similar al que la bancada del MIR había presentado en la Cámara de Diputados. Con posterioridad, el señor senador Fassi calificó de poco seria, precisamente, la programación económica introducida en el proyecto, que versaba aparentemente sobre salarios. Pero es que el artículo 25 que estamos considerando está mechado justamente dentro de la consideración de este proyecto sobre salario mínimo, vital y móvil, y es lo que nos indujo a entrever la posibilidad de sustituirlo atendiendo a conceptos que habíamos fijado durante el planteamiento en general.

Lo que yo conceptúo de poco serio es precisamente el artículo 25, por el cual vamos a congelar los precios al 1º de marzo, vamos a ordenar prácticamente un descenso superior al 10 por ciento con respecto a los precios que rigen actualmente en el mercado. La realidad de esta disposición, indudablemente, se encuentra compensada cuando se establece una congelación que no es tal, porque luego de fijarla, en el segundo párrafo se dice que la Secretaría de Estado de Comercio podrá autorizar modificaciones en los casos de productos estacionales o en aquellos casos concretos en que las circunstancias de hecho así lo aconsejen.

En lo que respecta a la programación propuesta, nosotros la sostenemos porque entendemos que la política de paro en que actualmente vive el país está causada principalmente por la desviación de los fondos públicos para servir exclusivamente a los déficit de la administración central y los organismos descentralizados.

No coincido por cierto con el señor senador Fassi cuando nos atribuye la intención de restarle todos los medios al Estado para que pueda sobrevivir, porque entendemos que al margen de la emisión de dinero, que por otra parte se la desvía de inmediato hacia el Estado, existen otros medios de recaudación y fundamentalmente el que nosotros propugnamos, que es el de las mayores recaudaciones como consecuencia de una promoción industrial y agrícola.

Sr. Fassi. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 25 tal como ha sido despachado.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Antes de que se vote el artículo 26 voy a reiterar la proposición que formulé en la consideración en general en el sentido de que se acepte un artículo que diría así: «A petición fundada de cualquiera de los sectores interesados, que se tramitará por ante el Consejo Nacional de Salario Mínimo, y previo informe de este consejo y vista a la Dirección General Impositiva, el Poder Ejecutivo nacional queda facultado a acordar por decreto a los contribuyentes del impuesto a los réditos, una deducción

adicional en los importes imponible para la liquidación de este impuesto, equivalente a la cantidad que por el pago de aumentos de remuneraciones mínimas efectúen en virtud de lo dispuesto por la presente ley. Este importe, cuyo monto no podrá superar el que resulte de lo abonado en concepto de diferencias por aplicación de esta ley, durante un año a partir de la fecha de los ajustes de las remuneraciones mínimas, será deducible en los balances impositivos a los efectos de la liquidación del impuesto a los réditos que incluyan este período. Para el caso de que el o los balances impositivos del contribuyente arrojen quebranto, esta cifra se adicionará al mismo.»

Entiendo que no es necesario insistir con mayores consideraciones. Esta presentación está basada esencialmente en algo similar a lo dispuesto en el decreto 33.302. No sé si recuerdan los señores senadores que el mismo autorizaba, por término que no excediera de doce meses y por una sola vez, a abonar salarios menores a los establecidos cuando ellos pudieran incidir negativamente en la evolución financiera de la empresa. Con esto se buscaba evitar la quiebra de las mismas para no provocar el impacto de la desocupación. Aquí no se pide una exención en cuanto al instituto en sí sino un apoyo del Estado por la vía de una deducción del impuesto a los réditos.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Voy a formular brevísimas consideraciones. Comprendo los motivos que mueven al señor senador, pero me parece que el remedio no es el adecuado. La empresa sin ganancias tendría que arbitrar por cualquier medio la forma de pago y no podría resarcirse, y el empresario que gana conservaría incólumes todas sus ganancias.

Me parece que en principio no se inspira en ningún criterio de justicia.

Sr. Aguirre Lanari. — No comparto ese criterio.

Sr. Presidente. — ¿La comisión acepta el artículo propuesto?

Sr. Fassi. — No, señor presidente.

—El artículo 26 es de forma.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al poder Ejecutivo.

Se van a votar las inserciones solicitadas por los señores senadores Acuña y Fassi.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia (1).

Sr. De Rege. — Pido la palabra.

Nuestro bloque acaba de presentar un proyecto de ley modificatorio del que se acaba de sancionar. Desearía que por Secretaría se diera lectura a los efectos de que este honorable cuerpo le dé preferente despacho.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Aun sin que se haya procedido a la lectura del proyecto, adhiero a la moción formulada por el señor senador De Rege, porque será sin duda una iniciativa muy interesante que debe merecer el estudio de los señores senadores.

Sr. Presidente. — Los señores senadores De Rege y Corradi han propuesto una reforma a un estatuto que todavía no es ley, pero la Presidencia no tendrá inconveniente en darle el trámite reglamentario dentro de la instancia correspondiente, para que se trate oportunamente en una sesión especial. En consecuencia, tendrá entrada y se incluirá en el Diario de Sesiones dándole la difusión pertinente.

Habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, se levanta la sesión.

—Es la hora 5 del día 7 de junio.

(1) Véase el Apéndice.

7

APENDICE

I

INSERCCIONES SOLICITADAS POR LOS SEÑORES SENADORES

1

Inserción solicitada por el señor senador Acuña (R.E.)

INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO CON LOS PAISES ALALC

Dos primeros meses de 1963 y 1964

Países	Dos primeros meses 1963			Dos primeros meses 1964		
	export.	import.	saldo	export.	import.	saldo
Brasil	10 600	6.303	+ 4.297	13 623	9.187	+ 4.439
Colombia	1 537	84	+ 1.453	1 437	150	+ 1.287
Chile	4 160	3.042	+ 1.118	4.867	2.239	+ 2.628
Ecuador	103	384	— 281	89	18	+ 71
Perú	6.189	1.410	+ 4.779	6.917	2.741	+ 4.176
Uruguay	1.206	799	+ 407	1.573	311	+ 1.262
Total	29.262	13.926	+ 11.336	30.726	17.449	+ 13.277

Cantidades en miles de dólares.

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos.

2

Inserción solicitada por el señor senador Fassi

NUMEROS INDICE DEL SALARIO NOMINAL Y DEL COSTO DE LA VIDA

Años	Salario nominal del obrero industrial (Nivel general)		Salario		Costo de vida
	Peón	Oficial	Peón	Oficial	
1943	136	206	100	100	100
1944	146,1	216,1	107,43	104,90	99,7
1945	159,9	234,0	117,57	113,59	119,4
1946	182,0	265,9	133,82	129,08	140,5
1947	234,0	346,1	172,06	168,01	159,5
1948	334,0	463,9	245,59	225,19	180,4
1949	416,0	586,1	305,88	284,51	236,5
1950	510,0	696,1	375,00	337,91	296,9
1951	608,0	792,1	447,06	384,51	405,8
1952	780,0	1.026,1	573,53	498,11	562,9
1953	814,0	1.074,1	598,53	521,40	585,3
1954	954,0	1.208,0	701,47	586,41	607,5
1955	982,0	1.233,9	722,06	598,98	682,3
1956	1.343,9	1.736,0	988,16	842,72	773,8
1957	1.377,9	1.780,0	1.013,16	864,08	965,1
1958	2.026,0	2.610,0	1.489,70	1.266,99	1.269,9
1959	3.437,9	4.356,1	2.527,87	2.114,61	2.713,7
1960	4.956,1	5.094,0	3.644,19	2.472,82	3.454,4
1961	5.034,0	6.436,0	3.701,47	3.124,27	3.921,0
1962	6.292,0	8.059,9	4.626,47	3.912,57	5.021,1
1963	7.917,5	10.051,3	5.821,69	4.879,27	6.227,8
1963 (Diciembre)	8.496,5	10.831,1	6.247,43	5.257,82	7.272,6

FUENTE: Elaborado en la CGT sobre la base de informaciones publicadas por el Servicio Estadístico Nacional.